

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado

**CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA
ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS**

TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN

El conflicto agrario de 2008: una revisión bibliográfica

AUTOR: EMILIO ULISES BOSIA

TUTOR: JULIÁN KAN

Resumen

En un contexto caracterizado por la volatilidad de los precios de los *commodities* de exportación del agro argentino, el alza que sufrieron a partir de 2006 generó tensiones en distintos países. En nuestro caso, la imposición de retenciones móviles a las exportaciones en marzo de 2008 desató un conflicto social que marcaría un antes y un después en la historia reciente. Esta tesina consiste en un amplio análisis bibliográfico que abarca algunas de las principales temáticas del conflicto agrario, tanto en el nivel de los entramados económicos como en el de los sujetos políticos.

En primer lugar se aborda el contexto económico, tanto en relación al mercado internacional como al marco nacional. Además, se considera el proceso de transformaciones productivas y tecnológicas que caracterizó al agro argentino en las últimas décadas.

En segundo lugar se consideran diferentes análisis sobre la estructura social del agro, sus componentes, sus formas de relación con la propiedad privada de la tierra y del capital, las relaciones productivas que se entablan dentro de ella, sus vínculos con el mercado interno y externo, sus dinámicas y conflictos, las organizaciones gremiales que la representan, las alianzas que se establecen con otros sectores sociales, los elementos ideológicos que se encuentran presentes, entre otras cuestiones. De esa manera se estudian las características del bloque agrario como sujeto político durante el conflicto de 2008.

En tercer lugar se detallan diversos puntos de vista sobre el bloque político liderado por el gobierno nacional durante su enfrentamiento con el bloque agrario. Se comienza por las diferentes caracterizaciones sobre la alianza social que sustenta al gobierno en esa etapa, sus distintos componentes, las relaciones entre ellos y, naturalmente, los sectores que ejercen la hegemonía a su interior. Luego se pasa revista a las transformaciones que se operaron en ese bloque político durante el conflicto de 2008 y como consecuencia de él.

En cuarto lugar se analizan las distintas opiniones sobre el carácter del conflicto agrario, particularmente sobre si se trató de un conflicto estructural o accidental.

Palabras claves

Gobierno nacional – Sociología económica – Conflicto agrario - Debates

Índice

| | |
|--|----|
| Introducción | 4 |
| 1. El contexto del conflicto agrario | 7 |
| 1.1. El contexto económico internacional del sector agrario | 7 |
| 1.2. El contexto económico nacional de la producción agraria | 10 |
| 1.3. Las transformaciones en el agro argentino | 15 |
| 2. Composición social y política del bloque agrario | 26 |
| 2.1. La trama social del “campo” | 26 |
| 2.2. El “campo” como sujeto político | 45 |
| 3. Composición social y política del bloque liderado por el gobierno nacional | 59 |
| 3.1 El gobierno kirchnerista y el bloque de poder | 60 |
| 3.2. Las transformaciones del bloque liderado por el gobierno como sujeto político | 71 |
| 4. Debates sobre el carácter del conflicto | 80 |
| 5. Conclusiones | 87 |
| 6. Bibliografía | 93 |

Introducción

Ríos de tinta se escribieron a lo largo de estos años sobre el conflicto que enfrentó, entre marzo y julio de 2008, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández con la Mesa de Enlace integrada por las cuatro entidades patronales agropecuarias más representativas. Por esa razón, el objetivo de este trabajo no apunta a una revisión totalmente exhaustiva de lo escrito sobre la cuestión, sino más bien al relevamiento de una serie de temáticas referentes a este suceso, de interés para la realización de una posterior investigación más amplia, que integra al conflicto agrario como punto de partida. En este sentido, se relevarán aportes provenientes de diversos puntos de vista que, de conjunto, conforman una mirada suficientemente representativa de la pluralidad de interpretaciones sobre lo que sucedió, las causas que lo originaron y las consecuencias a las que dio lugar, priorizando la comprensión y el análisis de los acontecimientos en dos niveles paralelos, pero sumamente interconectados.

Por un lado, un nivel económico-estructural, en el que se recabarán las conclusiones de diversas investigaciones sobre el contexto económico en el período, las transformaciones producidas previamente en el agro argentino, los grupos sociales que estuvieron detrás del llamado “campo” y las relaciones del gobierno nacional con los diversos intereses sociales que sustentaron su proyecto, con especial atención a los cambios que se produjeron en sus vínculos con los sectores dominantes.

Por otro lado, un nivel político donde se buscarán aproximaciones al despliegue de la disputa, a la conformación como sujetos políticos de los dos antagonistas centrales en conflicto en 2008, a las formas de ejercicio y disputa en torno de la hegemonía política y a las modificaciones en la situación política que se generaron a partir de entonces.

Como aproximación a nuestro punto de vista, y en consecuencia a la fundamentación de los ejes temáticos y niveles de análisis seleccionados para este trabajo, vale desarrollar brevemente algunas de nuestras hipótesis más generales de trabajo. Partimos de la consideración -que surge ampliamente de la bibliografía, como veremos- de que este conflicto fue un parteaguas en la historia política reciente de nuestro país. Un acontecimiento tan explicable *a posteriori* en sus causas profundas, como inesperado *a priori* para sus protagonistas directos, que dio como consecuencia dos grandes resultados políticos.

Por un lado este conflicto, inicialmente motivado por el rechazo hacia el régimen de retenciones móviles pero rápidamente convertido en mucho más que eso, reorganizó el campo político profundamente, en la medida que revitalizó con la fuerza de una enorme base social rural y urbana al imaginario neoliberal y a las fuerzas políticas herederas de aquellas que habían sido desplazadas del poder en 2001. A partir de allí se impuso una dinámica de profunda polarización política en nuestro país que marcaría, al menos, los siguientes diez años, al calor de la disputa hegemónica entre una posición nacional-popular-democrática y otra posición liberal-republicana.

Por otro lado, junto con esta primera cuestión, también se produjo un proceso menos visible: el inicio de un proceso de ruptura de lo que vamos a llamar el “consenso neodesarrollista” con el que Argentina había conseguido dejar atrás los años de crisis económica, social y política de comienzos de siglo. Es relevante tener en cuenta que no nos referimos a un “consenso” al interior de la clase dominante -que al contrario, en esos años se encontraba marcada por la división con la que emergió de la crisis de 2001- sino a una alianza entre diversos sectores sociales que sostuvieron al gobierno de Néstor Kirchner. Principalmente: una fracción de la clase dominante que había conseguido imponer su salida devaluacionista en 2002, una franja de los sectores medios, el grueso del movimiento obrero y buena parte de los movimientos de desocupados.

Postulamos la idea de que este segundo proceso se inició tras el conflicto agrario de 2008 y se fue desarrollando a lo largo de diversos momentos, muchos de ellos caracterizados por importantes tensiones políticas como resultado de la iniciativa gubernamental: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la estatización de las AFJP y la elección de directores estatales en nombre de la ANSES en las principales empresas del país, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la expropiación de la mayoría accionaria de YPF S.A., entre otras. De este recorrido turbulento emergió una tercera posición política en nuestro país que, como mencionamos arriba, recién se terminó de consolidar en 2013 con la formación del Frente Renovador, y cuya representatividad social estaba directamente vinculada a los intereses de los grandes grupos económicos locales y de los sectores gremiales subordinados a ellos.

De esa manera, el profundo cisma que se generó al interior de las fuerzas políticas y sociales que habían posibilitado el fin de la valorización financiera en 2001, expresó en carne viva el carácter abierto de la definición de un nuevo patrón de acumulación posneoliberal que,

retomando antagonismos preexistentes, generó dos grandes debates de interés para esta investigación.

El primero se dio entre las posiciones que, ante cierto estancamiento de la tasa de crecimiento económico, hacían énfasis en la redistribución del ingreso para dar lugar a una profundización de la industrialización y un mayor crecimiento de la economía, versus las posiciones que, en cambio, ponían el acento en el favorecimiento de la inversión a costa de un enfriamiento relativo de la economía. Es decir, las primeras apostaban por la vía de la demanda, las segundas por la vía de la oferta. El segundo debate tenía que ver con los límites a la intervención del Estado en la planificación económica, en el que las posiciones podrían diferenciarse entre un Estado meramente “regulador” de las reglas del mercado y un Estado que asumía la tarea de conducir áreas consideradas estratégicas de la economía. Cada una de estas opciones suponía, por cierto, una muy diversa relación entre los poderes fácticos y la definición de las políticas públicas. No parece descabellado remitir estas discusiones a los debates históricos que surcaron el período de la industrialización por sustitución de importaciones y que bien podrían identificarse como las posiciones desarrollistas y las del nacionalismo popular.

En este sentido, es posible preguntarse en qué medida la división del frente posneoliberal a partir de 2008, que parecía ser un conflicto político al interior de una nueva etapa que había dejado irreversiblemente atrás al neoliberalismo, se demostró en cambio como una ventana de oportunidad para un intento de restauración neoliberal, como el que en efecto se llevó adelante entre 2015 y 2019. En otras palabras, podría hipotetizarse que la crisis de la valorización financiera en 2001 no había sido definitiva, y que por lo tanto los nuevos consensos eran más frágiles de lo que se creía. De esa manera, se llegaría a la conclusión de que en la Argentina del siglo XXI, los tres grandes proyectos de país que se alternaron en la disputa por los rumbos de la Nación a lo largo de la historia, volvieron a actualizarse, combatirse, combinarse y anularse mutuamente: liberalismo, desarrollismo y nacionalismo popular.

Es interesante retomar estos acontecimientos desde el presente, toda vez que estamos asistiendo a la recomposición de una amplia alianza de fuerzas sociales y políticas alrededor del Frente de Todos, cuyo antecedente más directo -y explícito- es el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). ¿Es posible reconstruir un nuevo “consenso”, en el que convivan los grandes grupos económicos locales, una porción significativa de las clases medias y el grueso

de los sectores populares? O en todo caso, ¿qué formas tomará ese intento? ¿Qué similitudes y qué diferencias podrá encontrar? Esas preguntas sobrevuelan la escena argentina actual.

En particular hay una pregunta que parece tener un significado especial: ¿la ruptura del “consenso neodesarrollista” fue principalmente el resultado de una impericia del gobierno de Cristina Kirchner? ¿Se debió a los “malos modales” de un elenco gubernamental que convirtió una discusión impositiva en un plebiscito a vida o muerte sobre el modelo de país? ¿O polarizar fue el camino que encontró ese gobierno para resistirse a ser doblegado a los poderes corporativos? En otras palabras, ¿la grieta fue un “error no forzado” del gobierno? Las respuestas a estas preguntas echan luz sobre el futuro cercano de nuestro país. Por eso investigar el proceso de ruptura de aquel consenso es sumamente útil para reflexionar sobre los caminos del presente.

Finalmente, hay un elemento que resulta interesante. La ruptura del consenso neodesarrollista no parece obedecer solamente a causas económicas, o en todo caso las motivaciones económicas, que siempre existen, no pueden explicarlo suficientemente. Fue la propia Cristina Fernández la que en más de una oportunidad mostró su perplejidad ante un empresariado que “juntaba con pala” sus ganancias, y sin embargo era férreamente opositor a su gobierno. ¿Cómo comprender adecuadamente las relaciones entre política y economía en nuestro país, en este periodo?

1. El contexto del conflicto agrario

1.1. El contexto económico internacional del sector agrario

Un elemento destacado por toda la bibliografía, imprescindible para comprender el inicio del conflicto entre la Mesa de Enlace y el gobierno de Cristina Fernández, es el contexto internacional caracterizado por la tendencia al aumento de los precios internacionales de los principales productos de exportación agraria de nuestro país.

Barsky y Dávila, en “La rebelión del campo”, que editaron en 2009, le dedican un desarrollo importante a esta cuestión, con atención a construir una mirada de corto plazo y una de largo plazo. En el primer sentido, demuestran la rapidez y volatilidad del incremento de precios que

se produjo en tiempos de finales del gobierno de Néstor Kirchner e inicios del de Cristina Fernández: entre marzo de 2006 y marzo de 2008, el índice internacional de precios de los alimentos casi se duplicó en términos nominales, con un aumento del 82% (2009: 116). Lógicamente, ante un proceso de estas características, los países importadores de alimentos sufrieron importantes consecuencias sociales¹, mientras que las naciones exportadoras, como la nuestra, sintieron un profundo estímulo para aprovechar la oportunidad a través de la inversión y de un aumento de la productividad.

Sin embargo, es preciso inscribir esta dinámica en una foto de mayor duración, para permitir una mejor comprensión de lo que sucedía. Estos autores retoman la evolución del precio de los alimentos a largo plazo, que puede describirse de la siguiente manera: una tendencia a la baja que se detuvo a fines de la década del 80, registrándose un repunte importante a mediados de la década del 90 y un mínimo histórico cerca de 1999, al que siguió una recuperación gradual que comenzó en 2002 y, posteriormente, una marcada subida desde 2006.

Por eso, para Barsky y Dávila, a la hora del análisis del conflicto de 2008 el factor más destacado de la suba de precios es su rapidez, así como que, a diferencia de otros procesos de movilidad de precios, en este caso afectó a casi todos los productos alimentarios y forrajeros y generó perspectivas de que los precios continúen altos por varios años más.

En cuanto a las causas de este proceso de aumento de precios, de tal magnitud que condujo a una crisis alimentaria global, señalan la influencia múltiple de un conjunto de factores, centrados en la existencia de un cambio fundamental en la oferta y demanda mundial:

“La mayor producción de biocombustibles, el alza del precio de la energía, disminución de los stocks mundiales, factores climáticos y aumento del ingreso y mayor consumo de alimentos en los mercados en desarrollo, son algunas de las causas de la crisis que todos mencionan, pero con diverso grado de prioridad.” (Barsky y Dávila, 2009: 119)²

¹ A nivel global, las consecuencias políticas y sociales de este aumento de precios no se hicieron esperar. “En el último año, el precio de los alimentos a nivel internacional subió un 68%. Eso llevó a revueltas populares en 23 países en los últimos tres meses.” (Barsky y Dávila, 2009: 126). Lo cual expresa que la rebelión agraria no fue un hecho excepcional argentino, sino que puede ser inscripta en un conjunto de procesos sociales más amplio, si bien las características del contexto nacional determinarán en alto grado su especificidad.

² Una cuestión sobre la que insisten estos investigadores es la de los subsidios agropecuarios que implementaron históricamente los países desarrollados, a los que juzgan como un factor más de

Sobre la cuestión de las causas de este proceso inflacionario, es interesante la incorporación de visiones diferentes, que matizan la solidez de las tendencias alcistas de la demanda mundial y destacan las relaciones del precio de los *commodities* con las tendencias del capitalismo financiero neoliberal y, sobre todo, con el desarrollo de la crisis económica internacional que se había estado incubando y explotaría en esos mismos meses de 2008. De esa manera, estas investigaciones permiten profundizar sobre las razones de la rapidez de los cambios de precios, es decir, sobre su volatilidad.

Es el caso del análisis desplegado por un equipo de investigadores coordinado por Sartelli en un trabajo titulado “Patrones en la ruta” (Sartelli et. al., 2014), quienes afirman que la suposición de que la expansión china implicaba un cambio estructural que mantendría los precios de los *commodities* altos por un largo plazo a partir de un crecimiento cualitativo de la demanda, no estaba teniendo en cuenta que la crisis, aunque inicialmente estuvo centrada en los EEUU, era de carácter global y por lo tanto afectaría también a China. Por lo que, en su opinión, con seguridad los precios sufrirían un proceso de baja de precios más adelante.

Por otro lado, Teubal y Palmisano, del Grupo de Estudios Rurales y la Cátedra de Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, concluyen que en el caso del precio de la soja, además del aumento de la demanda europea de materia prima para la elaboración de alimento balanceado de cerdos, pollos y vacunos, de la creciente producción de agrocombustibles y del aumento de la demanda de China e India producto de la modernización acelerada de sus sectores agropecuarios, existe un factor más, que estos dos investigadores destacan:

“A partir de la crisis mundial del 2007 y frente al constante avance de la lógica financiera en la economía mundial pudo vislumbrarse otro factor explicativo del aumento sostenido del precio de los *commodities*: en el año 2008 en medio de la crisis financiera muchos inversores y analistas económicos recomendaron la compra de *commodities* como reaseguro frente a la desarticulación de las finanzas mundiales.” (Teubal y Palmisano, 2010: 221)

encarecimiento de los precios, en la medida en que afectaron la expansión de la producción en otros países (Barsky y Dávila, 2009: 119).

Otro análisis enriquecedor en esta misma perspectiva es el realizado por Enrique Arceo (2009), quien atribuye al rápido crecimiento de la economía mundial una elevación en los precios de los alimentos y las materias primas a partir de 2003, aunque este autor llama la atención de que hasta fines de 2007 no superaron, en términos reales, el nivel de otros periodos de términos de intercambio favorables. Sin embargo agrega que, a medida que se desinfló la burbuja inmobiliaria, se creó una nueva burbuja resultante del desplazamiento de capitales especulativos a los mercados de futuro de bienes primarios, generándose un aumento de los precios entre septiembre de 2007 y junio de 2008 del 55%. Sin embargo, al complicarse la situación financiera, estos capitales se retiraron, dando lugar, aún antes de que la demanda experimentase cambios significativos, a una caída de precios que barrió con los aumentos experimentados durante 2008.

De esta forma, este investigador concluye que “las expectativas de que un cambio en los términos del intercambio como el experimentado en la primera mitad de 2008, que modificase permanentemente las condiciones de desarrollo de los productores primarios era, en realidad, ilusorias” (2009: 44)³.

1.2. El contexto económico nacional de la producción agraria

A la hora de definir las características de la realidad económica nacional en este periodo, Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo (2009) se refieren a un “conflicto irresuelto” en la medida en que en el año 2001 se agotó el patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera que puso en marcha la dictadura militar en 1976, y se inició una fase de transición donde “se están desplegando nuevas alianzas y contradicciones sociales que responden en última instancia a las importantes modificaciones estructurales que se desplegaron en las décadas anteriores” (2009: 52). Es decir que la revuelta agropecuaria se puede enmarcar, desde esta visión, en las pujas por la redefinición de un nuevo patrón de acumulación de capital en nuestro país, después del final del regido por la valorización financiera en 2001.

³ Puede encontrarse una argumentación contraria en “Oportunidad histórica”, artículo de opinión firmado por el analista Jorge Castro, publicado en La Nación, el 22 de abril de 2004. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/oportunidad-historica-nid594647> (consultado el 30/01/20).

Se trata, en las palabras de estos investigadores, de una “fase de transición”, en la que no se plasmó un nuevo patrón de acumulación de capital, sino una disputa entre los diferentes sectores sociales por imponer uno determinado y diferente al propuesto por los demás. Sí registran cómo, durante esa transición, la expansión de la economía real desplaza la centralidad que tuvo anteriormente la valorización financiera, e incluso dentro de ella la producción primaria, la industrial y la construcción ganan terreno en términos de las rentabilidades relativas respecto de los servicios públicos, que desde la privatización de las empresas estatales habían predominado en la economía argentina.

En efecto, para Basualdo y Nicolás Arceo es digno de remarcar que esta confrontación se desarrolla en una etapa en la que los productores agropecuarios de todas las escalas, inclusive los pequeños, logran elevadas rentabilidades, que atribuyen no solamente al factor analizado en el apartado anterior referente a la recuperación de los precios internacionales, sino también a las características de la salida de la Convertibilidad a través de la devaluación del peso en 2002.

Los economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Costa et. al., 2010), por su parte, analizan la situación macroeconómica de la producción agropecuaria de la siguiente manera, poniendo el acento en las modificaciones iniciadas a partir de 2002:

“El abandono del régimen de tipo de cambio fijo y crecientemente sobrevaluado a comienzos del año 2002 dio lugar a una profunda modificación de la estructura de precios relativos en favor de los productos transables. Para los productores de bienes de exportación -como es el caso de los agropecuarios- la devaluación de la moneda implicó, por un lado, un incremento del poder adquisitivo local de los ingresos percibidos por medio de las ventas al exterior y, por el otro, determinó una reducción de los costos locales de producción medidos en dólares. Consecuentemente, la salida de la Convertibilidad significó una sensible mejora de la rentabilidad de las producciones agropecuarias, dando inicio a una etapa caracterizada por elevados márgenes de ganancia.” (Costa et. al., 2010: 304)

Este centro de investigaciones llega a la conclusión de que los márgenes de ganancia fueron de tal magnitud que dieron lugar a elevados niveles de rentabilidad para la producción agropecuaria durante estos años, incluso teniendo en cuenta el aumento de la inflación y la tendencia hacia la apreciación del tipo de cambio real que sufrió la economía nacional en los años que separan 2002 y 2008.

Además, a la hora de sopesar la influencia del precio internacional y de las condiciones macroeconómicas nacionales para originar esa rentabilidad, llegan a la conclusión de que el segundo elemento fue de mayor importancia:

“Un análisis realizado en términos de dólares constantes permite notar que recién en el año 2007 los precios de estos productos superaron el promedio de la Convertibilidad, mientras que los precios del girasol y de la soja lograron ubicarse por encima de los valores de la década previa en 2008. La evidencia demuestra -por tanto- que el impacto devaluatorio sobre la rentabilidad y los ingresos del sector agrícola fue mayor que el efecto del incremento de los precios internacionales.” (Costa et. al., 2010: 306)

Es decir que, también para ellos, las condiciones internacionales fueron centrales para explicar la dinámica de la producción agropecuaria, pero más aún lo fueron las políticas públicas fijadas desde la salida de la Convertibilidad por los distintos gobiernos que se sucedieron.

Kulfas, en un trabajo titulado “Los tres kirchnerismos” (2016), analiza esta cuestión en los siguientes términos:

“El campo argentino conoció uno de los momentos de máximo esplendor de su historia tras la salida de la Convertibilidad. Los motivos de ese auge no se explican de manera directa por los efectos de la fuerte devaluación de 2002 y la licuación de los pasivos resultante de la pesificación de las deudas bancarias ese mismo año. Tampoco por el alza de los precios internacionales, que llegaría en años posteriores. Estos tres fenómenos le permitieron, en todo caso, coronar un proceso de inversiones y cambio tecnológico que había tenido lugar en la Argentina durante la década de 1990, cuando se introdujeron cambios sustanciales en el cultivo de la soja. El nuevo paquete tecnológico incorporó nuevas semillas, fertilizantes, agroquímicos y siembra directa, lo que dio por resultado un alza notable en la productividad del sector y en la consolidación de la soja como cultivo central en el campo argentino.” (Kulfas, 2016: 128)

Sin embargo, este autor explica que ese proceso de transformación tecnológica y productiva que jugó un papel tan prioritario, se había financiado fundamentalmente a través del endeudamiento -gran parte de él con el Banco Nación-, en años en que los precios internacionales no tuvieron niveles suficientemente altos, por lo que no se había generado la rentabilidad necesaria para afrontar las deudas. Por eso la situación de los productores a

finales de la Convertibilidad se había ido tornando cada vez más crítica y llegó al final de la Convertibilidad a una situación en la que “cerca de la mitad de la superficie productiva se encontraba hipotecada” (2016: 128).

Por eso, este investigador interpreta a la devaluación y a la pesificación asimétrica de deudas de 2002, como “un enorme regalo al sector, que luego le cobraría en cuotas mediante las retenciones a las exportaciones” (2016: 128). La alta rentabilidad que a partir de allí marcaría esos años queda en evidencia, desde este punto de vista, en la medida en que la imposición de retenciones fue anterior al auge de los precios internacionales.

Quienes explican de forma detallada cómo operaron las políticas públicas en beneficio del sector agropecuario son Barsky y Dávila, en el trabajo de referencia ya mencionado:

“La gran devaluación del año 2002 y la pesificación de los créditos a los deudores bancarios representaron una gran transferencia de recursos al sector agropecuario. Los altos precios internacionales de los cereales, las oleaginosas y los productos ganaderos, y los costos internos depreciados por la devaluación, determinaron una ecuación extremadamente favorable para los productores, a pesar de la implantación de retenciones. Ello impulsó una expansión continua de la producción y una importante inversión en las explotaciones, que arrastró además una gran reactivación de la industria local de maquinarias e implementos agrícolas. La siembra directa posibilitó el avance productivo hacia el norte del país, expandiéndose fuertemente el área sembrada con soja y en menor medida, maíz y trigo.” (Barsky y Dávila, 2009: 161)

Se puede observar cómo estos autores incorporan una serie de cuestiones propias del proceso de acumulación de capital en el campo que van agregando complejidad al análisis -la pesificación de deudas bancarias, el salto productivo propio de la aplicación de la siembra directa y otros avances tecnológicos, la expansión de la frontera agropecuaria, etc.- de las que nos ocuparemos en el apartado siguiente. Pero es importante retener ahora que esta comprensión de la cuestión les permite situar los debates en torno de las retenciones en una posición interesante para la reflexión: no se puede analizar de forma aislada a la variable “retenciones”, sino que a la hora de determinar el ingreso de los productores además es imprescindible tener en cuenta, como mínimo, la evolución de los precios internacionales y el tipo de cambio.

Otro rasgo destacado por ambos investigadores, a la hora de analizar la influencia del contexto macroeconómico nacional, es el impacto en la situación financiera de los productores, particularmente a través de la pesificación de deudas provenientes de los años 90:

“La política de tipo de cambio muy elevado, en cambio, que arranca en el año 2002 como salida de la crisis, perjudicó inicialmente a los asalariados pero benefició fuertemente a los productores agropecuarios, dado el atraso en los costos, incluidos los salarios rurales, los precios del combustible subsidiado por el Estado y otros insumos. Esa bonanza inicial fue además complementada con la pesificación de las deudas, que permitió licuar el fuerte endeudamiento en dólares de los productores con los bancos y facilitó a muchos operar con capital propio, ahorrando así el desembolso de intereses en el desarrollo del proceso productivo.” (Barsky y Dávila, 2009: 212)

Finalmente, analizan cómo este contexto macroeconómico dinamizó la llegada de inversiones, lo que repercutió en todo el complejo agropecuario, no solamente en los campos sino también en gran cantidad de ciudades y pueblos donde viven los prestadores de servicios profesionales relacionados con la actividad:

“Condiciones tan favorables impulsaron la creciente llegada de capitales externos, a veces de habitantes de las mismas localidades del interior, en proporciones mayores a través de fideicomisos constituidos con inversores urbanos de mayor tamaño. Al conjuro de este proceso, se expandieron rápidamente las eficientes fábricas de maquinarias agrícolas que habían sobrevivido a las duras condiciones competitivas impuestas por las políticas monetarias de la década del '90. Se sumaron numerosas redes de servicios profesionales de todo tipo y pueblos y ciudades intermedias recobraron un dinamismo económico pocas veces visto.” (Barsky y Dávila, 2009: 213)

Todas estas consideraciones remiten a una cuestión fundamental que Barsky y Dávila señalan sobre la economía argentina en este periodo, que contrasta a la luz de una mirada de largo plazo, y que es de una importancia insoslayable a la hora de adentrarse en la comprensión de la revuelta agropecuaria:

“A pesar de la pérdida de centralidad del agro desde la década de 1940, los profundos cambios tecnológicos y su creciente integración con complejos agroindustriales han convertido nuevamente a la producción de cereales y oleaginosas en un sector estratégicamente decisivo, tanto en la provisión de divisas como en la generación de empleo y alimentos.” (Barsky y Dávila, 2009: 209)

El equipo de investigadores coordinado por Eduardo Sartelli, en el trabajo ya citado, señala la continuidad de la dependencia de la economía nacional respecto de la producción agraria. De esta manera, explica el desempeño económico de esos años a partir de esa clave. Después de la devaluación y ante la contracción del crédito internacional, atribuyen a la renta diferencial de la tierra y, en menor medida, también al petróleo, junto a la baja salarial, haber sido las fuentes que permitieron la recuperación salarial. Por otra parte, gracias a las retenciones, el gobierno pudo sostener la subvaluación de la moneda y así proteger a capitales de poca escala que de otro modo hubieran perecido en la competencia internacional, lo cual también redundó en el crecimiento del empleo, debido a que por su baja productividad, esos capitales emplean gran cantidad de mano de obra. Asimismo, remite a la expansión motorizada por el agro la posibilidad de que el gobierno pudiera otorgar crecientes subsidios a los capitales extranjeros para que mantuvieran ganancias en dólares cercanas al promedio internacional, aunque sus tarifas hubieran estado pesificadas.

Sobre esta base, este equipo de investigadores concluye que el paro agrario deja en evidencia la “utopía” de que nuestro país pueda alcanzar independencia económica merced a la aplicación de políticas “nacionales y populares” y al impulso de la burguesía nacional. Así, la creciente búsqueda por aumentar la recaudación fiscal a través de las retenciones a las exportaciones de granos muestra que “nada nuevo se engendró en la Argentina en los últimos años y que el país está tan al borde de una nueva crisis como lo ha estado en los últimos treinta años” (2014: 121). De esa forma, lo que para otras visiones se trata de una modificación importante del patrón de acumulación en el periodo analizado, es fuertemente relativizado por este punto de vista, caracterizado por el planteo de que la posibilidad de que Argentina se aleje sólidamente de la posibilidad de una bancarrota económica está en una redefinición profunda de la economía y la sociedad argentinas, que, en el caso de la problemática agraria, depende de una serie de medidas entre las que se destaca la “expropiación de los terratenientes y de *toda* la burguesía agraria” (2014: 145).

1.3. Las transformaciones en el agro argentino

Ahora bien, la combinación entre la situación económica internacional y la etapa económica nacional no explica suficientemente las coordenadas estructurales en las que se debe ubicar el conflicto agrario, si no se hace referencia a las transformaciones sufridas por el agro argentino en los años previos a 2008. Estas transformaciones fueron de una gran profundidad,

según todos los autores, por lo que son imprescindibles para explicar los acontecimientos. Tomaremos como lectura de referencia principal para esta cuestión al trabajo ya mencionado de Osvaldo Barsky y Mabel Dávila.

Desde un punto de vista cuantitativo, la producción de cereales y oleaginosas del agro argentino vivió un proceso de crecimiento cuantitativo muy significativo en la década del 90 y la del 2000 (Barsky y Dávila, 2009: 19), cuya explicación es el espectacular aumento de la producción de soja sobre los demás cultivos, en especial a partir de la campaña 98/99. Todo lo cual redundaba en que desde 2002 la soja representa, con fluctuaciones entre años, aproximadamente el 50% de la producción total de cereales y oleaginosas. Luego de la soja se ubica en importancia el maíz y en tercer lugar el trigo.

¿Por qué la soja fue el cultivo preponderante? Por sus resultados económicos: “mostró un mejor margen de rentabilidad respecto de cultivos competitivos, como el trigo y el maíz, en siete de las once campañas agrícolas entre las de 1994/1995 y 2004/2005” (Barsky y Dávila, 2009: 46), y de esa manera logró imponerse en las zonas más productivas del campo argentino, fundamentalmente la región pampeana.

Sin embargo, esta hegemonía de la soja no lleva a estos autores a hablar de “monocultivo” ya que “se ha expandido también la producción de trigo, maíz, y más recientemente el girasol, al tiempo que se asiste a una significativa recuperación del algodón” (2009: 53). Es decir que desde su punto de vista, el crecimiento de la soja no se hizo a costa de la producción del resto de los productos principales del agro argentino.

Ello conduce necesariamente a estudiar la notable expansión del área sembrada. En efecto, se produjo una ampliación de la frontera agrícola como consecuencia de un proceso de transformación en el uso del suelo, debido al doble cultivo, y también a los cambios tecnológicos que por un lado posibilitaron el avance agrícola hacia tierras que anteriormente eran marginales, y por otro lado permitieron un gran aumento de los rendimientos en las mejores tierras:

“Mientras que a principios de los ochenta se cultivaban aproximadamente 20 millones de hectáreas, en la campaña 2006/2007 el área sembrada fue de 30.704.500 hectáreas. También se invirtió la relación entre cereales y oleaginosas, aumentando el peso de estas últimas, que pasaron de ocupar el

30% al 60% de la superficie, y sobre todo debido al peso de la soja, que representa aproximadamente la mitad de la superficie cultivada.” (Barsky y Dávila, 2009: 21)

Este proceso fue conceptualizado como la “agriculturización de la región pampeana” porque, además de la expansión productiva de estos cultivos, también supuso el desplazamiento de más de 5 millones de hectáreas desde la ganadería hacia la agricultura, dando lugar a una transformación de las históricas prácticas productivas en el agro argentino. La ganadería fue desplazada hacia las regiones extrapampeanas y sufrió también una sustitución de la producción ganadera extensiva por sistemas más intensivos en la región pampeana, bajo el sistema del *feed lot*. La magnitud de este conjunto de fenómenos, que incluso llevó a hablar de una “Segunda Revolución Agrícola Pampeana”, en referencia a lo ocurrido hasta 1930, produjo gran cantidad de discusiones entre los especialistas, en aras de determinar sus características, sus causas y sus consecuencias.

Barsky y Dávila optan por remontar su mirada hasta los años 60 para encontrar el inicio de las transformaciones productivas y tecnológicas que, en su opinión, explican el crecimiento continuo de la producción de cereales y oleaginosas durante cuatro décadas, y que ubicaron al sector agropecuario argentino como uno de los más modernos a nivel internacional (2009: 26).

¿Cuáles son los elementos principales del cambio tecnológico? La mayor difusión de la siembra directa, la incorporación de nueva maquinaria de mayor tamaño y complejidad, el aumento del uso de fertilizantes, herbicidas y otros agroquímicos, la incorporación de tecnologías de gestión de la empresa y el crecimiento del uso de transgénicos, en particular de soja y maíz. La influencia de estas modificaciones en las prácticas productivas agrícolas se expresa en que en 2008, aproximadamente el 70% de la superficie sembrada se realiza con siembra directa.

Estos investigadores afirman que el esquema macroeconómico de los años 90, si bien no fue el origen de los procesos de transformación analizados, ni tampoco le dio un impulso central, tuvo su importancia porque la liberalización de los mercados que estuvo vigente en aquel tiempo posibilitó el acceso a bienes importados a precios más reducidos. Es decir que habilitó y facilitó un proceso de tecnificación de la maquinaria agrícola. Además de que el Banco de la Nación favoreció el proceso de inversión agropecuaria mediante una política crediticia.

Por otro lado, si bien el papel de las empresas multinacionales es indisimulable en el despliegue de estas transformaciones tecnológicas, estos investigadores también resaltan el involucramiento constante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que desarrolló investigaciones para enfrentar las tendencias a la erosión de los suelos desde los años 60 y 70, y luego sobre la siembra directa. Un momento decisivo para la transformación agraria de nuestro país se dio en 1997, cuando es aprobada para su liberación comercial la semilla de soja transgénica resistente al glifosato producida por Monsanto (“Soja RR”). Solo había pasado un año de su aprobación en los Estados Unidos, y rápidamente esta semilla se expandió por el país. La evolución de esta semilla fue imparable: “en la campaña 96/97 se siembra un 4% de la superficie, un año después el 20%, mientras que en la campaña 98/99 el área con soja RR llegó casi al 80% y en el 2001 era del 90%, algo notable si se aprecia que en los EEUU en ese año llega solo al 68%”, acotan Barsky y Dávila (2009: 43).

A partir de la implementación masiva de este paquete tecnológico, se produjeron -y se siguen produciendo- grandes discusiones sobre las consecuencias ambientales de su aplicación. Estos argumentos no fueron ajenos al conflicto de 2008. Por esa razón, Barsky y Dávila no dejan de plantear su posición al respecto.

En primer lugar, afirman que el uso de los herbicidas totales encabezados por el glifosato, a los que adjudican una alta efectividad para controlar todo tipo de malezas y no tener efecto residual, redujo el consumo de atrazina, un herbicida de acción residual sumamente tóxico. Es decir que consideran que el glifosato, el más conocido de los agroquímicos, que por lo tanto estuvo en el centro del debate público, además de ser altamente efectivo, es menos tóxico que otros herbicidas a los que pudo sustituir. Pero acto seguido, matizan su posición y reconocen que la intensificación agrícola genera una importante presión sobre el medio ambiente, que en algunos casos puede tener impactos negativos, sobre todo si no se plantea simultáneamente con prácticas de conservación que mitiguen los efectos no deseados, entre los que destacan la contaminación del suelo y aguas por exceso de productos químicos, la pérdida de materia orgánica y la erosión de los suelos. Desde su punto de vista el impacto en el medio ambiente de estas nuevas estrategias productivas tiene solución, para lo cual es fundamental la realización de prácticas conservacionistas y el cuidado de los bosques nativos, además de que también hacen referencia a la disminución de la erosión de los suelos como resultado de la masificación de la siembra directa.

Otra de las discusiones de tipo estructural que se planteó durante el conflicto de 2008 fue la relevancia en términos de empleo de la actividad agraria. Sobre este debate, Barsky y Dávila son categóricos y consideran superficiales los comentarios que relacionan mecánicamente la expansión de la soja con el desempleo, porque revelan la incapacidad de comprender la dinámica de generación de empleo en los procesos productivos que se integran a la producción sojera. Para fundamentar esta opinión citan un estudio realizado por Llach, Harriague y O'Connor en 2004 sobre la generación de empleo en las cadenas agroindustriales del país, que revela que “el mismo abarcaba a 5.592.000 de puestos, es decir un 35,6% del empleo total del país” (citado en Barsky y Dávila, 2009: 62). En otras palabras, su razonamiento apunta a considerar la importancia del empleo relacionado con la actividad agraria buscando incluir en esa consideración a diferentes actividades que están íntimamente eslabonadas con ella.

Finalmente, a la hora de sintetizar algunas de las consecuencias potencialmente negativas de este conjunto de procesos de transformación, agravadas por las presiones que resultan del contexto internacional analizado en el apartado anterior, Barsky y Dávila detallan:

“a) especialización productiva y exportadora en pocos productos -cinco complejos representan alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias-; b) estructura exportadora apoyada en productos de bajo valor agregado; c) mantener las ventajas comparativas de la región pampeana basada en sus características ecológicas y su cercanía a los puertos y, por lo tanto, perpetuar desequilibrios macroeconómicos que dificultan el desarrollo del interior; d) escasa integración de la producción agropecuaria con el conjunto de la economía, limitando los efectos multiplicadores sobre el empleo y la actividad económica regional que éste podría tener en un esquema de mayor agroindustrialización; e) presión sobre los recursos naturales agrícolas como el suelo y el agua para sostener el crecimiento de la producción y de las exportaciones; f) favorecer la concentración en el uso de la tierra y, por esto, se debilitan la estructura social y política de las zonas rurales.” (Barsky y Dávila, 2009: 136)

Una mirada también muy completa pero con una orientación crítica bien diferente de la anterior sobre las transformaciones del agro argentino es la que aporta el ya mencionado Grupo de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ellos estructuran su investigación alrededor de la tesis de que en Argentina se consolidó un nuevo “sistema de

agronegocios”, que no hubiera sido posible de no haber sido por la gama de políticas públicas neoliberales introducidas en nuestro país desde los años 70:

“Nos remitimos a la importancia que fueron asumiendo grandes empresas transnacionales, o transnacionalizadas, en sectores clave del complejo agroexportador y del sistema agroalimentario en su conjunto. Se trata de empresas entrelazadas y articuladas entre sí en un sistema que, aunque remite fundamentalmente a la soja, también –como dijimos- caracteriza y afecta a otros sectores de la producción agropecuaria.” (Teubal y Palmisano, 2010: 202)

En la opinión de estos investigadores, el inicio de estos procesos se encuentra en la última dictadura militar, cuando se potenciaron procesos de globalización y asumió una importancia creciente el capital financiero. En ese contexto, surgió “un nuevo régimen de acumulación y el sistema agroalimentario en su conjunto comienza a operar en función de la lógica del agronegocio” (2010: 202). A partir de ese momento, la influencia de las grandes empresas transnacionales es cada vez mayor y comienzan a articularse con el sector financiero a través de los pools de siembra.

Durante la Dictadura, entre otras cosas se desmontó el banco de semillas del INTA, de modo que se abrió la reserva genética de biodiversidad a las empresas transnacionales, y a partir de entonces las nuevas revoluciones tecnológicas que se fueron dando (híbridos, transgénicos, etc) estuvieron bajo su control. De ese modo, se incrementó la influencia de las grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas en la definición de aspectos esenciales de la política agropecuaria que también se articulan con el sector financiero a través de los pools de siembra. Un hito importante que destacan estos investigadores es el decreto 2284 del 31 de octubre de 1991 que, entre otras múltiples medidas de desregulación, eliminó de raíz todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria que operaban desde los años ´30. Según Teubal y Palmisano “el agro argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo y sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial” (2010: 205). La orientación de este nuevo modelo se puede sintetizar, siempre según su punto de vista, en la producción de *commodities* orientados a la exportación, basándose en tecnología de punta y en grandes unidades productivas.

Otras transformaciones importantes que estos investigadores detallan son la flexibilización de las leyes de arrendamiento rural y la promoción de contratos accidentales, que dieron por

resultado el fortalecimiento de la figura del contratista. Además, resaltan que se privatizaron silos y puertos, configurando un nuevo sistema exportador, también dominado por grandes empresas, y que se fortalecieron los grandes productores, mientras surgían los pools de siembra y los fideicomisos como formas de canalizar recursos para llevar adelante los procesos productivos. Finalmente, también destacan como modificación relevante la creciente extranjerización, tanto de la industria alimentaria argentina como de los cada vez más presentes supermercados e hipermercados.

En cuanto a las consecuencias de la implantación del “sistema de agronegocios”, Teubal y Palmisano se detienen en los peligros que conlleva una excesiva especialización en un solo cultivo, que por definición excluye toda biodiversidad, la producción de otros cultivos o la priorización de alimentos más importantes desde el punto de vista de las necesidades de la población. Lo mismo sucede, en su opinión, con la rotación de los cultivos y la producción pecuaria, imprescindibles para mantener la sustentabilidad del sector.

En ese sentido, afirman que:

“El avance de ese paquete tecnológico involucrado en la producción sojera amenaza la soberanía alimentaria, crea graves problemas de salud a las poblaciones por medio de la fumigación, tiene efectos edafológicos, con un deterioro sustancial de la calidad de los suelos debido a prácticas corrientes del paquete tecnológico utilizado, incide sobre la biodiversidad de la fauna y flora del medio rural, y contribuye a que los desechos tóxicos tiendan a difundirse por el medio ambiente.” (Teubal y Palmisano, 2010: 247)

Por otro lado, también reparan en la expulsión de medianos y pequeños productores y trabajadores rurales del sector, dando lugar a una suerte de “agricultura sin agricultores”, así como en la creciente dependencia del productor agropecuario sobre la semilla transgénica provista por unas pocas grandes empresas transnacionales.

Finalmente, como un aspecto significativo del modelo, Teubal y Palmisano también agregan que las retenciones no necesariamente producen una redistribución efectiva del ingreso a favor de los sectores más vulnerables de la población, para lo cual consideran que haría falta una reforma impositiva global. Este carácter fallido de las retenciones como mecanismo de redistribución del ingreso no se debe a la propia naturaleza de este tributo, sino a una serie de

factores propios de la economía argentina contemporánea y, en particular, de la estructura agraria.

El principal de estos factores (junto a la capacidad de los derechos de exportación de incidir efectivamente sobre el precio de los alimentos y consolidarse en el marco de una estrategia antiinflacionaria) es la concentración que existe en el comercio de cereales y le otorga un enorme poder a un puñado de grandes empresas. En ese sentido, estos investigadores afirman que el despliegue de varios mecanismos, algunos de ellos defraudatorios para con el fisco, permiten que las grandes empresas exportadoras se apropien de una parte sustancial de las rentas.

De esta manera, concluyen:

“Tanto el Estado como los productores pierden, uno porque ve disminuida su recaudación y los otros porque dejan de percibir de los comercializadores y exportadores en concepto de retenciones un importe superior al que efectivamente arriba al erario público. En definitiva, lo que dejan de percibir por su producción son importes que no son apropiados totalmente por el Estado sino que una parte importante queda en manos privadas.” (Teubal y Palmisano, 2010: 250)

Giarraca (2010), también integrante del Grupo de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, interpreta estos cambios como parte de la configuración de una nueva lógica productiva a la que considera adecuado denominar “agronegocio”, debido a sus marcadas diferencias con el antiguo sector agrario y agroindustrial. En la misma línea de Teubal y Palmisano, explica que:

“En ese nuevo espacio económico del “agronegocio” se registra una fuerte intervención del sector financiero; en él, además, participan capitales transnacionales en puntos clave de la cadena de producción, distribución y ventas a los mercados externo y doméstico. Tanto las transnacionales que proveen insumos, los exportadores, así como las cadenas de “hipermercados” en el mercado interno, son unos pocos ejemplos de lo que deseo significar.” (Giarraca, 1020: 318)

En ese marco, analiza cómo los viejos actores agrarios y agroindustriales del capitalismo nacional van adaptando sus conductas al nuevo escenario: o bien traspasan sus patrimonios a los capitales transnacionales para dejarlos en disponibilidad para operar en el sector

financiero o engrosar la fuga de capitales, que a su vez son los que imponen la nueva lógica de funcionamiento (empresas agroalimentarias, ingenios azucareros, grandes bodegas vitivinícolas, etc.); o bien mantienen sus patrimonios nacionales pero se subordinan a los nuevos “núcleos de poder”. Esta investigadora llama “núcleo de poder” al interior de las cadenas de producción a “aquellos agentes capaces de imponer qué, cómo, cuánto producir y subordinar los funcionamientos del resto de los agentes a su propia lógica” (2010: 318). En el nivel de la producción agraria, la novedad que Giarraca distingue en la década de 1990 y, sobre todo, a partir de la expansión sojera es la gestión de los pools de siembra o fondos de inversión.

Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo (2009), por su parte, a la hora de analizar estas importantes transformaciones, explican cómo se dio el proceso de incorporación plena del agro pampeano al patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera que rigió en nuestro país entre 1976 y 2001. De esa forma, incorporan un elemento de mayor complejidad al proceso por el cual se quebró la tradicional alternancia agrícola y ganadera, para incorporar un tercer tipo de rentabilidad: la financiera, de forma tal que la producción agropecuaria se incorpora también a la regla que rige para el conjunto de la economía argentina en aquellos años caracterizados por la vigencia de la valorización financiera como estrategia principal de acumulación de capital. Sin embargo, a mediados de los años 90, la conjunción entre los precios internacionales y el aumento de la productividad debido a las modificaciones tecnológicas (soja transgénica y siembra directa, principalmente) producen como resultado que la creciente rentabilidad de la soja superara a las inversiones financieras, por lo que impone su propio dinamismo e inicia una inédita expansión productiva. Estos autores consideran que las causas de este proceso de expansión tienen que ver con “la convergencia de las nuevas innovaciones tecnológicas con la consolidación de las transformaciones registradas en la etapa anterior” (2009: 57).

Basualdo y Arceo hacen referencia a la necesidad de analizar tres procesos simultáneos que se dieron a lo largo del periodo analizado. El primero tiene que ver con las consecuencias de la producción sojera. Efectivamente, luego de relevar la importancia cuantitativa en términos de superficie sembrada y de producción física de la soja, coinciden con Barsky y Dávila en que esa expansión no se hizo a costa de los otros cultivos principales, con la sola excepción del girasol, aunque sí encuentran una merma significativa en ambas variables para otros cultivos como el alpiste, el sorgo, la avena o la cebada.

El segundo proceso que se despliega durante esta etapa tiene que ver con la evolución del precio internacional de los principales *commodities* de exportación del agro nacional, al que ya hicimos referencia en el apartado 1.1. Basualdo y Arceo resaltan que hasta el año 1997 el precio internacional permanece estancado o desciende en todos los principales cultivos pampeanos. Por lo tanto, su conclusión es clara: el motor del crecimiento de la producción agraria no pueden haber sido los altos precios, algo que se alteraría en las proximidades del conflicto de 2008, como ya hemos analizado.

Finalmente, el tercer proceso que Basualdo y Arceo registran durante esta etapa, está relacionado con la evolución diferencial de los costos de acuerdo a la superficie explotada, debido a la intensificación de las economías de escala en la región pampeana. Esta cuestión será central a la hora de analizar la composición social del bloque de los productores agrarios, toda vez que las presiones hacia una escala de producción mayor generan modificaciones estructurales en el sujeto productor, especialmente en los pequeños y medianos productores, que fueron considerados la principal base de sustentación de la Mesa de Enlace.

Un último elemento de estas grandes transformaciones al que Basualdo en otro de sus trabajos (2011) le da importancia es a las consecuencias de la ampliación de la frontera agropecuaria:

“Bajo el predominio de la soja la producción pampeana es mucho más *nacional* que antes, porque se expande a zonas en que antes se producían otros productos. Desde el punto de vista social, esta *nacionalización* significa que nuevos estratos sociales se identifican con esta producción, aún cuando desde el punto de vista productivo sean intrascendentes debido a la baja productividad en las zonas periféricas respecto a la que exhibe la región pampeana tradicional.” (2011: 155)

En cuarto lugar, el trabajo ya mencionado coordinado por Sartelli (Sartelli et. al., 2014), plantea que los principales factores sobre los que se asienta este proceso de crecimiento son “nuevas variedades de semillas transgénicas, cambios en el tratamiento del suelo, siembra directa y el desarrollo de nuevos y mejores agroquímicos” (2014: 47).

En opinión de este trabajo, puede definirse a la “sojización” del campo argentino como “el paso de la soja de ser un cultivo marginal y prácticamente desconocido a ocupar la mitad de

la superficie cultivable del país”, proceso al que enmarca dentro del ya mencionado proceso más general conocido como “agriculturización”, al que a su vez define como “la producción agrícola permanente en lugar de las rotaciones agrícola-ganaderas que fueron la estrategia productiva principal en la Argentina hasta mediados de la década de 1970 (2014: 47).

Coincidiendo con las perspectivas anteriores, en este trabajo se afirma que “la solución a estos problemas [erosión y desgaste de los suelos], que permitió el despegue definitivo del cultivo de la soja en los ´90, llegó de la mano de los nuevos paquetes tecnológicos y productos químicos desarrollados por grandes empresas multinacionales” (2014: 48). Tras lo cual define al paquete tecnológico básico como una combinación de semillas transgénicas, nuevos métodos de trabajo de la tierra, como la siembra directa y la agricultura de precisión, nuevos y mejores productos químicos (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes) y el desarrollo de maquinaria agrícola acorde a las nuevas tecnologías. Por otro lado, este conjunto de investigadores llama la atención sobre que el proceso de crecimiento se realizó en gran medida al margen de la evolución del precio de la soja, que cae abruptamente a partir de 1997 y se recupera recién en 2003. Ambas cuestiones le permiten concluir que “el principal determinante del despegue de la producción fue la aplicación del nuevo paquete tecnológico en combinación con una ampliación de la tierra apta para el cultivo” (2014: 48). De todos modos, también resaltan que, para lograr afianzarse en las zonas extrapampeanas menos rentables, el cultivo de soja recién debió esperar a los años 2002 y 2003, cuando aumenta el precio internacional de la soja.

Además, este trabajo aporta un factor explicativo más de este proceso a partir de la modificación de las condiciones climáticas, dado que además del aumento de los rindes de la soja y otros cultivos por mejoras técnicas y del aumento de los precios internacionales de los alimentos, “ha habido un cambio en los regímenes de lluvias que ha influido fuertemente en los procesos descritos” (2014: 49).

Con respecto al planteo de que la sojización se habría hecho a costa de otros cultivos, de amplia publicidad durante el conflicto agrario de 2008, con todo tipo de consecuencias ambientales, sociales y en la canasta alimentaria nacional, el equipo coordinado por Sartelli toma partido con la tesis de que no es cierto, a partir de un conjunto de datos que le permiten afirmar que en todo caso sólo se explica “un tercio del avance sojero por reducción de otros cultivos” (2014: 54). En cambio, considera que “los perdedores son, por un lado, la

ganadería, pasando a peores tierras, o directamente perdiendo hectáreas de producción, y por otro lado los bosques, eliminados para dedicar esas tierras a la producción agropecuaria” (2014: 55).

La mirada de este trabajo sobre las transformaciones estructurales sucedidas en el agro argentino se pueden sintetizar muy bien en una de las conclusiones que presenta: “más que un monstruo que se come todo, la soja es la punta de lanza de una modernización general de la agricultura pampeana y no pampeana” (2014: 56).

2. Composición social y política del bloque agrario

Una vez establecidas las diversas opiniones sobre el contexto estructural en el que se dio el conflicto iniciado en marzo de 2008 por la imposición de retenciones móviles a las exportaciones de cereales y oleaginosas, toca trasladarse a las interpretaciones respecto de los sujetos sociales y políticos presentes en él, en primer lugar al entramado heterogéneo que protagonizó y respaldó la sublevación de los productores.

2.1. La trama social del “campo”

De cara a un análisis estructural del entramado social que se puso en juego en la sublevación agraria, resulta de una gran utilidad el amplio desarrollo hecho por Barsky y Dávila (2009), en el trabajo ya mencionado en los apartados anteriores. Como vimos, estos investigadores destacan la relevancia histórica de las transformaciones sociales operadas en el agro pampeano. En ese sentido, para marcar el contraste, explican que:

“El pasaje de un sistema de producción agrícola con importante presencia de arrendatarios a un sistema de dominio decisivo de los propietarios, operado entre 1940 y fines de la década de 1960, fortaleció numerosas capas de productores de distinta magnitud, como parte también de procesos de desconcentración de la propiedad de la tierra. Pero paralelamente, los profundos cambios tecnológicos que elevaron la escala de producción fueron impulsando políticas de concentración de capital que se plasmaron en unidades de mayor tamaño para combinar distintas formas de acceso a la tierra. Los propietarios que pudieron capitalizarse ampliaron su unidad mediante la toma de tierras a otros, que se fueron retirando del proceso productivo para convertirse en rentistas. Políticas macroeconómicas concentradoras, sucesivas crisis y endeudamientos, fortalecieron estos

procesos y crearon condiciones para la emergencia de otras formas sociales.”
(Barsky y Dávila, 2009: 111)

Es decir que, tras una etapa donde predominó la tendencia a la desconcentración de la propiedad agropecuaria entre los años 40 y 60 del siglo pasado, luego se destaca el impulso a la concentración de la producción, que no necesariamente equivale a la concentración de la propiedad. A ese proceso ambos autores le asignan una importancia central, en la medida en que “dado el gran peso de los contratistas-tanteros tomadores de tierras, y de los contratistas de maquinarias, fue posible armar redes productivas articuladas muchas veces por profesionales de la ingeniería agronómica, donde los capitales externos se aportaban por asociaciones temporales” (2009: 111). Estas redes productivas, profundizadas a través de figuras como los fondos fiduciarios y los fideicomisos que permitieron la formación de los pools de siembra, dieron lugar a grandes extensiones de las escalas de producción, y generaron la consolidación de grandes empresas en el país e incluso en el extranjero, a través de estrategias asociativas con los dueños de la tierra, contratistas y profesionales.

Como resultado de este proceso, Barsky y Dávila consideran que se consolidó económica y socialmente una gran trama de agentes sociales, en la que también debe incluirse a proveedores de maquinaria agrícola, transportistas, servicios y casas comerciales. Su conclusión es clara: “es esta base social fuertemente unida por la defensa de los excedentes generados por la producción agraria y los procesos vinculados industrialmente la que generó el movimiento social expresado en la rebelión social producida” (2009: 111).

Desde el punto de vista de las relaciones de propiedad, es decir del aspecto jurídico de las relaciones de producción del agro argentino, ellos encuentran en el Censo Agropecuario de 2002 la confirmación de los grandes cambios ocurridos:

“Una importante caída a nivel nacional de las unidades con propiedad privada en forma exclusiva y un importante crecimiento de las unidades en arrendamiento. Igualmente, un gran crecimiento de las unidades que combinan propiedad con tierras arrendadas. Ello revierte la tendencia de las décadas anteriores, mostrando el crecimiento del arrendamiento en gran escala y con importantes aportes de capital. En la región pampeana se destaca la importancia del contrato accidental bajo formas combinadas de tenencia (propiedad y contrato accidental). Todo ello indica que los pequeños y medianos propietarios ceden la gestión de sus unidades a otros actores: propietarios agrarios de mayor capacidad económica, contratistas, etc.”
(Barsky y Dávila, 2009: 80)

Para ambos investigadores, es importante llamar la atención de que estas tendencias vinculadas con los datos censales no deben ser confundidas con procesos de concentración de la propiedad, dado que “la inmovilización de capitales en la compra de tierras no parece ser una estrategia dominante para los principales desarrollos productivos asociados a la gran expansión agrícola, aunque el panorama es distinto con relación a desarrollos forestales y ganaderos” (2009: 84).

Una vez considerado el panorama general, Barsky y Dávila pasan a detenerse en el análisis de cada una de las figuras sociales que participan del proceso productivo, a partir del cual realizan una suerte de radiografía exhaustiva de los diferentes grupos sociales que interactúan en el ambiente agrario argentino.

En primer lugar, los contratistas, a los que clasifican a los contratistas en tres tipos:

- a) Contratistas de máquinas: brindan servicios a terceros en siembra, protección de cultivos y cosecha, recibiendo dinero o productos como forma de pago.
- b) Contratistas-tanteros: toman campos a terceros a través de contratos por una o más cosechas y los pagan en parte de mercadería o pagos fijos. A diferencia del anterior, es una actividad con riesgo porque su rentabilidad depende de la producción.
- c) Productores contratistas: complementan su producción con otras tierras arrendadas.

El rol de los contratistas será central en el proceso productivo agrario. A tal punto es así que desde el punto de vista de estos investigadores, la consolidación del contratismo de maquinarias cristalizó definitivamente las formas en que se divide el capital agrario en el país. Esencialmente, entre dueños de tierras e instalaciones (sólo a veces maquinarias) y entre propietarios de maquinarias cada vez de mayor tamaño y costo. El capital circulante pasaba a ser invertido por quienes encabezaban la organización del proceso productivo, que podía o no coincidir con los dos anteriores.

Este proceso condujo a la expansión de nuevas formas de organizar el proceso productivo, que conectó al sector agrario con otros circuitos del capital, dado que la velocidad de los

cambios tecnológicos demandaba crecientes cantidades de capital por hectárea⁴. A partir de esta consideración, estos autores pasan a analizar la figura de los pools de siembra, muy discutida durante el conflicto agrario. Para ellos en muchos de los casos, se trata de iniciativas locales en las que se articulan pequeños capitalistas urbanos con un profesional que gestiona tierras en arriendo y organiza los procesos productivos con distintos contratistas, para los que se utilizó la figura jurídica de la Unión Transitoria de Empresas. De esa forma, “tienen límites en el proceso de concentración productiva, ya que el proceso efectivo de producción es realizado por los contratistas de la zona, quienes retienen la propiedad de la maquinaria, aspectos sobre los que no avanza la nueva modalidad productiva” (2009: 93) y “no necesariamente significaron cambios radicales en los actores vinculados al proceso productivo, ya que resultó habitual que utilizaran a contratistas de la zona e incluso a los propios productores a los que arrendaban los campos” (2009: 95). En este mismo sentido, los pools de siembra fueron parte de la tendencia a la concentración de la producción en grandes unidades, pero no afectó a la propiedad de las tierras, lo que hubiera significado una inmovilización de capital que contrasta con las importantes oportunidades de ganancias que ofrecía la inversión productiva.

Desde el punto de vista de ambos autores, el ingreso de los pools de siembra jugó un papel en la generación de canales de financiamiento masivos y muy flexibles, que ayudaron en la integración de los contratistas y los Centros de Servicios, fundamentales para el establecimiento de redes productivas sin las cuales sería imposible explicar un proceso tan acelerado de expansión geográfica, de rendimientos y de cifras productivas como el observado desde mediados de los años 90. Por otro lado, en paralelo a los pools y aplicando su misma estrategia, se destaca el crecimiento de grandes empresas que logran importantes ventajas debido a la generación de significativas escalas de producción, como Los Grobo y El Tejar.

Barsky y Dávila rescatan la existencia de un punto de vista crítico de este modelo de gestión agropecuaria entre los propios productores, muchos de los cuales consideran que “no trae desarrollo local, fomenta el desarraigo y no genera empleo rural, destacando que el interés de

⁴ Es relevante a la hora de analizar los flujos de inversión de capital que demandaban estos procesos, tener en cuenta la influencia que tuvieron la devaluación y la reducción de las deudas de los productores a partir del año 2001/02, que significaron una transferencia financiera notable hacia el agro, como destacan Barsky y Dávila (2009: 96).

los pools es sólo la inversión productiva y no existe por su parte una preocupación por el desarrollo de la región” (2009: 97).

Otros sujetos sociales son los rentistas, propietarios de tierras en arrendamiento, cuya activa participación en los acontecimientos junto a los productores es explicada desde este punto de vista “por los beneficios que obtienen, los que se ven afectados por las retenciones que disminuyen los niveles de excedentes y amortiguan el alza del precio de los arrendamientos y por ende el precio de las tierras agrícolas” (2009: 101).

Sobre los trabajadores rurales, Barsky y Dávila repasan algunas tendencias estructurales. Por un lado, la gran disminución de la población que trabaja en tareas rurales como resultado de los cambios tecnológicos que han aparejado las últimas décadas, como una continuación del proceso de éxodo rural que se viene dando con cada modernización de la producción agropecuaria desde los años 60. Por otro lado, destacan que si bien ha disminuido la mano de obra asalariada, la actual cuenta con un mayor grado de calificación y una menor permanencia en el campo. Sin embargo, consideran que puede considerarse un “debate abierto” saber si este tipo de agricultura ocupa globalmente más o menos cantidad de personas, dado que recogen un crecimiento constante en la cantidad de personas que trabajan prestando servicios de maquinaria debido a la imposición del doble cultivo que aumenta la superficie trabajada anualmente, lo mismo que a la expansión de la frontera agropecuaria hacia el norte. Finalmente, también destacan el gran peso de los trabajadores permanentes, a diferencia del tradicional empleo agropecuario nacional, donde predominan los trabajadores transitorios.

La última de las figuras centrales en el proceso productivo agrario, naturalmente, es la que fue protagonista excluyente de los acontecimientos de 2008, el productor y sus entidades. En cuanto a los productores tradicionales, Barsky y Dávila explican que el proceso de concentración en el uso de la tierra no se expresa solamente en los sectores más altos, sino que también dio lugar a la consolidación de una “poderosa clase media agraria” (2009: 103). La existencia de esta clase media de considerable tamaño, junto con la creciente calidad de los servicios públicos en materia de comunicaciones y electricidad, según este punto de vista, refuerza los procesos de ocupación del espacio rural y la producción, y de pueblos y ciudades intermedias que habían sufrido situaciones inversas en décadas anteriores.

En cuanto a las cuatro entidades que conformaron la Mesa de Enlace, Barsky y Dávila, consideran la necesidad de precisar una caracterización sobre los intereses que representa cada una de ellas, dados que los profundos cambios productivos y sociales que hemos venido analizando, los cuales afectaron y volvieron más difusos los intereses sociales que representa cada una de las entidades.

En este sentido, pese al peso que se le suele otorgar a la Sociedad Rural Argentina (SRA), desde su punto de vista “es esencialmente un importante grupo de presión social que solamente existe en la Ciudad de Buenos Aires y nada tiene que ver con las Sociedades Rurales del Interior” (2009: 107). Para comprender el canal de participación política de estas últimas, hace falta remontarse al siglo pasado para historizar el surgimiento de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), vinculado a la problemática de la cría de ganado.

En este sentido, estos investigadores recuerdan que:

“Los criadores crearon una red de federaciones a partir de asociaciones locales, constituidas en el interior del país para disputar a la SRA la exclusividad de la representación del sector ganadero. En 1932 se crea su federación más poderosa, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y su discurso inicial fue fuertemente antiimperialista por el enfrentamiento con los frigoríficos norteamericanos e ingleses, y muy proclive a la intervención estatal en el sector, lo que estuvo asociado a las políticas de creación en esa época de la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP). En 1942, confederaciones representativas de federaciones de otras provincias junto con CARBAP crean Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad gremial de mayor base social. Su ideario inicial fue reemplazado por una dura posición antiestatal, que los hace encabezar las acciones contra la afectación de intereses de sus productores, a los que representan muy directamente a través de una red organizativa de amplia participación.” (Barsky y Dávila, 2009: 108)

Por otro lado, ambos autores señalan que la Federación Agraria Argentina (FAA) surge en 1912, en ocasión del famoso Grito de Alcorta, como producto de las movilizaciones de arrendatarios agrícolas que luchaban por la rebaja de los arrendamientos, dada la caída de los precios internacionales que hacía inviables sus explotaciones. Además, agregan que, más adelante, la FAA acompañó el pasaje de arrendatarios a propietarios de las explotaciones familiares.

En cuarto lugar señalan que la consolidación de una amplia red de cooperativas en todo el país desemboca en la creación, en 1956, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). Esta confederación cubría un amplio espectro regional y productivo, con asociados generalmente de pequeños y medianos productores, y con un papel relevante en la comercialización y transformación de la producción primaria. En este caso, detallan que la base social de CONINAGRO sufrió fuertemente las políticas privatizadoras y concentradoras de la década del '90, en la que muchas de las cooperativas tuvieron que cerrar.

Por otro lado, ambos autores destacan que la Comisión de Enlace de las cuatro entidades tiene un antecedente en 1970 para enfrentar las políticas del gobierno de Onganía. En cuanto a los métodos de presión, aseguran que CRA y FAA siempre han sido más proclives a medidas de acción directa como las movilizaciones, mientras que SRA y CONINAGRO sólo se han sumado a ese tipo de acciones en momentos de alta tensión en los enfrentamientos con los sucesivos gobiernos. Además, afirman que han sido reconocidas como interlocutores válidos por el Estado, y como tales tienen reservados en el aparato estatal lugares para ejercer la representación y desempeñar distintas funciones ligadas a las políticas agrarias.

Finalmente, explican que junto a estas entidades se han desarrollado otras más directamente relacionadas con los procesos productivos, como Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación (AACREA), Asociación de Productores de Siembra Directa (APRESID) y otros vinculados directamente con las cadenas productivas de soja, maíz y trigo, de creciente incidencia en el mundo rural.

Eduardo Levy Yeyati y Marcos Novaro (2013), en un trabajo titulado “Vamos por todo” en el que analizan los años kirchneristas, también destacan la articulación de un amplio conjunto de sectores a la luz de un proceso muy dinámico en la producción agropecuaria:

“En el conflicto con el campo el kirchnerismo se enfrentó a un sector que se había ido modificando rápidamente de la mano del corrimiento de la frontera agrícola. Que se había vuelto más articulado que nunca en términos espaciales, económicos y sociales, y se había cohesionado en torno de ideas distintas de las presidenciales sobre el curso que había estado siguiendo y debía seguir la economía del país. La sojización por siembra directa y los avances con semillas modificadas y agroquímicos que facilitaban la producción abrieron la puerta a una diversidad de actores en la economía

agropecuaria: holdings que explotaban grandes extensiones de tierra, empresarios de servicios de siembra, proveedores de tecnología y también pequeños productores para los que el campo volvía a ser rentable. A lo largo de la década, en el espacio formado por decenas de ciudades pequeñas y medianas prósperas de la pampa húmeda y por la red integrada por miles de empresas de muy diverso tamaño en una densa cadena productiva, se había ido consolidando la conciencia de que, a partir de 2002, la historia volvía a tocar a la puerta, y no había límites para el crecimiento.” (Yeyati y Novaro, 2013: 83)

Además, destacan la cohesión del sujeto agrario y la relacionan antes que nada con la articulación económica del sector, en la medida en que los productores afectados por las retenciones tienden a gastar e invertir en su zona, en esas mismas ciudades y pueblos, por lo que un menor margen de ganancia para ellos es percibido por su entorno como un perjuicio colectivo. Desde este lugar, encuentran un gran desacierto de diagnóstico por parte del gobierno, que en su opinión no solamente ignoró esta cuestión sino que erró al considerarlos “rentistas ausentistas”, según la clásica visión de la “oligarquía”.

En cuanto a la caracterización de los intereses sociales que representa cada una de las asociaciones integrantes de la Mesa de Enlace, y su diverso vínculo con el poder político, Yeyati y Novaro son muy claros en afirmar que:

“La CRA, por lejos la más numerosa, sería desde el principio la más combativa, en parte por tradición, en parte porque reunía al grueso de los productores sojeros; mientras que la SRA, con mucho menos miembros y menos interés en esa actividad, sería casi todo el tiempo más moderada; aunque no tanto como CONINAGRO, que más bien podía considerarse aliada del gobierno, dado el peso en ella de las cooperativas lácteas, que dependían fuertemente de acuerdos de precios y subsidios oficiales”. (Yeyati y Novaro, 2013: 74)

Al mismo tiempo que encuentran en la Federación Agraria una posición cambiante⁵:

“Buscando tanto extremar el conflicto en ocasiones como ofrecerse para facilitar una salida a través de acuerdos específicos que la favorecieran, cuerda floja por la que trató de caminar su principal dirigente, Eduardo Buzzi, un ex aliado del gobierno que hasta el final del proceso no descartó volver a serlo.” (Yeyati y Novaro, 2013: 74)

⁵ Como elemento complementario en este punto, Kulfas, en el trabajo ya mencionado, afirma que “los reclamos sectoriales y las pujas por espacios dentro del aparato estatal no aceptados por CFK (la FAA aspiraba a gestionar con cuadros afines las áreas burocráticas de gestión y apoyo de la agricultura familiar) fueron alejando a esas entidades del gobierno y explican parte de esa belicosidad” (2016: 130).

Por otro lado, en cuanto a una caracterización más precisa de los intereses que cada una representaba, estos dos autores consideran que el gobierno de Cristina Fernández había tenido un importante nivel de desconocimiento al respecto, de graves consecuencias a la hora de implementar políticas de compensaciones, con las que esperaba dividir a la Mesa de Enlace y, por esa vía, desactivar la protesta. En efecto, desde su punto de vista:

“Hacia mucho que las diferencias entre los afiliados a las distintas entidades habían dejado de tener relación estricta y directa con el tamaño de su explotación. La tenían, sí, con la historia, los estilos de acción y la localización geográfica, y al respecto las cosas no favorecían la estrategia de seducir a la FAA, dado que ésta siempre había sido más combativa que otras entidades, como la SRA, y sus representados se contaban entre los que más masivamente se habían pasado a la soja en los últimos años. Más claramente, había tantos pequeños productores de soja en CRA o incluso en SRA que en la Federación, por lo que los intereses de esos pequeños productores no podrían coordinarse fácilmente en ninguna de esas entidades ni expresarse con claridad en la Mesa.” (Novaro y Yeyati, 2013: 77)

Por otro lado, Nardacchione y Taraborelli consideran que la consolidación de la alianza sectorial rural durante la gestión Kirchner, trascendiendo los elementos que tradicionalmente los separaron, se debe a la reestructuración productiva que se fue instalando en el sector desde fines de la década de 1970: “en función de estas transformaciones, la propiedad de la tierra ha dejado de ser el elemento simbólico-material que permite dar cuenta del tamaño de los productores agropecuarios” (2010: 134).

Estos investigadores encuentran los antecedentes de la Mesa de Enlace por primera vez en 1975, cuando las cuatro entidades convergieron en una protesta ante la presidenta Martínez de Perón; y luego en abril de 1999 cuando reclamaron medidas de protección al sector en una coyuntura de apertura total de la economía, pero en este caso mostrando claramente diferencias de acuerdo al sector que representaban.

En cuanto a los aliados de la Mesa de Enlace, además de políticos provenientes del oficialismo y de la oposición, Nardacchione y Taraborelli destacan el carácter inesperado del apoyo de la UIA, la CAC y la AEA. Especialmente en el caso de la UIA; que inicialmente había apoyado al gobierno, encuentran el resquebrajamiento de la tradicional antinomia campo-industria.

En esta misma línea de análisis estructural de las fuerzas movilizadas en 2008 en contra de las retenciones, es interesante desarrollar dos grandes puntos planteados por Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo (2009) en el trabajo citado en los apartados anteriores.

En primer lugar, estos investigadores se proponen documentar la continuidad histórica de la presencia terrateniente en el agro argentino. De esa manera, a través del análisis de los censos disponibles, afirman que en el caso de la provincia de Buenos Aires, los grandes propietarios, considerando como tales a quienes poseen más de 20 mil hectáreas, siguen controlando el 32% de la superficie provincial. Y a continuación afirman que estos grandes propietarios “continúan siendo en la actualidad las tradicionales familias propietarias de tierras que conformaban la oligarquía agropecuaria durante el modelo agroexportador y fueron fundadoras del estado moderno en la Argentina” (Basualdo y Arceo, 2009: 64).

En busca de una mayor profundidad en la comprensión de este sector social, Basualdo y Arceo incorporan una distinción al interior de la oligarquía que es uno de los puntos centrales de sus investigaciones:

“En la actualidad están presentes en la cúpula agropecuaria las dos fracciones que la integran y se sucedieron a lo largo del tiempo en la conducción de la clase en su conjunto. La eminentemente agropecuaria, que fue hegemónica durante el modelo agroexportador de principios de siglo y aquella, que además de ser terrateniente está inserta en otras actividades económicas, y fue la conducción de la clase a partir de la consolidación de la industrialización en el país.” (Basualdo y Arceo, 2009: 78)

Para estos autores, justamente la segunda fracción mencionada, aquella que a lo largo de la historia económica nacional había diversificado sus actividades y luego de la última dictadura cívico-militar había emergido bajo la configuración de grupos económicos locales, sufrió una transformación importante a mediados de los años 90, cuando culminaba el grueso de la privatización de las empresas estatales y se iniciaba otra modificación estructural relevante que dio lugar a la extranjerización de la economía argentina. Se trató del proceso por el que los grupos económicos locales le vendieron al capital extranjero gran parte de sus principales empresas industriales y su participación en los consorcios que prestan servicios públicos, pero conservando sus tierras.

Este conjunto de elementos le permite a Basualdo y a Arceo desplegar una hipótesis de interpretación del papel de este sector central de la oligarquía que resulta pertinente para analizar la conformación estructural del país en aquellos años:

“Es indudable que la fracción diversificada de la oligarquía al ser principalmente financiera (inversiones financieras en el exterior) y agropecuaria, no solo pierde capacidad de interlocución e influencia sobre el Estado, especialmente en una etapa crítica donde la expansión industrial es indispensable, sino que modifica su estrategia de acumulación que ahora está centrada en la producción agropecuaria sobre la base de las transformaciones antes mencionadas, las cuales se ven reforzadas a partir del notable incremento en 2008 de los precios internacionales de esos productos. (...) Es decir, la fracción hegemónica está conduciendo a la oligarquía en su conjunto hacia la recuperación de sus posiciones en la economía real a través de la expansión de la producción agropecuaria. Sin disputarle al capital transnacional el control de la producción industrial propiamente dicho, pero sí condicionándolo, busca recuperar su capacidad para determinar el carácter y rumbo del Estado. Desde esta perspectiva, la disputa social tiene un carácter sectorial (agro versus industria) mucho más acentuado que durante la segunda etapa de sustitución de importaciones (1958-1975), momento en el cual la fracción hegemónica de la oligarquía agropecuaria estaba decididamente inserta en la producción manufacturera.” (Basualdo y Arceo, 2009: 79)

Este análisis sobre la presencia de la oligarquía en el agro les permite a estos investigadores cuestionar un aspecto importante que estaba presente tanto en el discurso del gobierno como en el de la dirigencia ruralista: el presunto papel central de los *pools* de siembra en la producción agrícola y su responsabilidad en el desplazamiento de los pequeños y medianos productores a través del arrendamiento de sus tierras. Para estos autores, las consecuencias de una caracterización de este tipo implican postular un desplazamiento de la figura del propietario como el principal protagonista productivo y, en consecuencia, una disolución de la oligarquía pampeana, en la medida en que la misma ya no participa de las producciones sectoriales más rentables.

Respecto del peso de los propietarios en la producción, siempre de acuerdo a los datos obtenidos del análisis censal, para Basualdo y Arceo el propietario rural sigue siendo durante la fase de expansión el protagonista decisivo de la producción agropecuaria pampeana. En efecto, encuentran que los propietarios trabajan el 90% de la superficie agropecuaria en 1988 y el 86% de la misma en 2002. En el mismo sentido, consideran revelador observar que la superficie trabajada por aquellos propietarios que solo explotan sus tierras descendió muy acentuadamente (9,5 millones de hectáreas) entre ambos censos; mientras que la de los

propietarios que, además de explotar sus tierras, trabajan otras, se incrementaron de forma ostensible.

Con respecto a los pools de siembra, cuyo origen data de los años 90, para estos investigadores su presencia fue minoritaria y declinó sensiblemente a partir de la crisis final de la convertibilidad que comenzó en 1998 y culminó en 2002. Pero sobre todo, la información censal les permite inferir que los pools de siembra y los fondos de inversión agrícola están vinculados fundamentalmente a los propios propietarios pampeanos, muchos de los cuales recurrieron a esta forma organizativa para resguardar la unidad de tierra y maximizar las economías de escala, por lo que aquellos que fueron organizados por capitales provenientes del sector financiero tienen escasa significación.

El segundo de los puntos planteados por Basualdo y Arceo es el del esclarecimiento del papel y la representatividad de la Federación Agraria, de forma tal de poder explicar las características de su participación en una alianza liderada por los intereses oligárquicos. Desde su punto de vista, no se trata de una novedad histórica la alianza entre la oligarquía pampeana y los pequeños y medianos productores representados por la FAA sino que, por el contrario, afirman que éste ha sido su *modus operandi* sectorial desde la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones⁶. Lo que sí consideran inédito es que “la subordinación de dicha entidad a los dictámenes estratégicos de los terratenientes arrastró a las fracciones del capital agrario más débiles a desechar durante el conflicto una neta victoria de sus intereses económicos” (2009: 79).

En este sentido, en otro trabajo (Basualdo, 2011) este autor diferencia entre dos estratos que conforman el sector de los pequeños y medianos propietarios pampeanos: los rentistas puros, que ceden su tierra en arrendamiento y los propietarios-arrendatarios, que toman tierra y la

⁶ En este sentido, vale la pena mencionar que esta opinión contrasta abiertamente con las de personalidades políticas sumamente afines a estos investigadores. Solo como muestra significativa, debido a la relevancia posterior del dirigente en cuestión, reseñamos la opinión de Axel Kicillof, quien en 2019, consideraba que:

“La 125 tuvo un efecto muy grave, que todos indentificamos y en lo que estamos de acuerdo, y es que permitió o produjo que políticamente se unificaran diferentes sectores de la producción agropecuaria que habían estado históricamente enfrentados entre sí. Por ejemplo, la Federación Agraria surgió con el Grito de Alcorta contra la explotación del pequeño productor por los grandes, nucleados en la Sociedad Rural Argentina. Desde el punto de vista histórico, la Mesa de Enlace fue una novedad bastante inverosímil.” (Kicillof, 2019: 170).

trabajan junto a las que les pertenecen, logrando de esta forma obtener economías de escala. Para este investigador, el estrato que tiene coincidencias objetivas con los grandes propietarios son los propietarios-arrendatarios y en consecuencia, afirma que “se puede asumir como hipótesis que estos últimos controlan la Federación Agraria en la actualidad y son quienes se subordinan a los intereses y las políticas enarboladas por los grandes propietarios pampeanos” (2011: 158)⁷.

La perspectiva desarrollada por el trabajo del Grupo de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entabló un debate explícito a través de la pluma de Giarraca (2010) con las posiciones de Basualdo y Arceo, a las que se refiere por su identificación institucional con el Grupo de Economía y Tecnología de Flacso. En realidad se trata de un debate con un doble destinatario, ya que también incorpora como contrincante al discurso del agrupamiento intelectual Carta Abierta. La tesis que Giarraca le atribuye a ambos agrupamientos, y que en su opinión tuvo amplia repercusión en funcionarios del gobierno nacional e incluso en el discurso público del ex presidente Kirchner, es la de que detrás de conflicto de 2008 se encontraba “un actor social agrario ligado históricamente a sectores “golpistas” de la sociedad y que continúa conformando la base del modelo agrario que se enriquece con la expansión sojera” (2010: 315). Es decir que se trataba de los grandes propietarios de la rica región pampeana del país cuya tenencia de la tierra se remonta a la conformación de la Nación y del capitalismo argentino. En dos palabras, la define como la “vieja oligarquía”.

Ante la tesis de la “vieja oligarquía”, este grupo de investigadores sostiene que debido a los grandes cambios ocurridos en el sector agrario argentino:

“Los sectores en conflicto (los miembros de la Mesa de Enlace) ya no son los núcleos de poder del nuevo sistema agrario que denominamos “agronegocio” y simplemente ocupan un papel subordinado y territorializado (básicamente antiguos propietarios de tierra) en el nuevo modelo.” (Giarraca, 2010: 315)

⁷ Sobre este mismo punto, Kulfas explica que ante la tendencia al arriendo de sus tierras y/o la reconversión a la prestación de servicios agrarios de pequeños productores, debido a la presión por economías de mayor escala en la producción, la FAA le solicitó al gobierno en 2006 políticas de créditos blandos y subsidios. Sin embargo, “el gobierno realizó un sondeo de opinión que arrojó resultados adversos: una parte importante de los productores consultados consideraba encontrarse lejos de la escala óptima de producción y prefería alquilar su campo y reconvertirse hacia actividades de servicios” (2016: 131).

Para Giarraca, los antiguos terratenientes pampeanos, propietarios de grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y agricultura, que históricamente estuvieron representados por la SRA y las capas más concentradas de CARBAP, fueron quienes ostentaron un papel económico, político y cultural significativo en la conformación de la Argentina, quienes desarrollaron prácticas corporativas para influir en los distintos gobiernos y quienes apoyaron a militares golpistas. Pero en 2008 este grupo ya era solo “una sombra de lo que fue” (2010: 325).

Por contrapartida, hace una definición por la positiva de los que, desde su perspectiva, sí son los actores centrales del agronegocio:

“Los nuevos actores de la producción que habilitan la impresionante expansión sojera pampeana primero y luego en las otras regiones antes dedicadas a las agroindustrias tradicionales o donde habitaban comunidades campesinas e indígenas así como en bosques y yungas, son estos nuevos inversores en la modalidad de “pools de siembra” o “fondos de inversión”. Estos agentes, que en la mayoría de los casos están fuertemente relacionados con el capital financiero y con el mercado internacional a través de la gestión de exportación, las empresas transnacionales y algunas importantes empresas nacionales (Arcor, por ejemplo), las proveedoras de insumos, agroquímicos, semillas, maquinarias, etc., configuran el conjunto de agentes económicos que componen el pacto fundante del capitalismo del “agronegocio” argentino en estos tiempos presentes.” (Giarraca, 2010: 318)

Si bien para esta investigadora dentro de estos nuevos actores dominantes se encuentran familias de apellidos tradicionales, también hay apellidos inmigrantes como los Grobocopatel y nuevas generaciones de ingenieros agrónomos formados en la universidad del neoliberalismo, trabajando para estos actores. En su opinión, este nuevo actor no concentra sólo rasgos económicos propios sino también sociales y culturales: “otro tipo de relación con la universidad pública a la que la vieja clase terrateniente consideraba un lugar “peligroso”, una relación distinta con los medios de comunicación y que, incluso, creó sus propias “exposiciones” anuales de la mano de los principales matutinos porteños” (Giarraca, 2010: 324). Junto a ellos, ubica a los grandes exportadores, aceiteras y cerealeras (Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Vicentin, Nidera, etc.), en los núcleos del agronegocio sojero.

Dentro de la misma perspectiva de investigación, Teubal y Palmisano (2010) destacan cómo la dicotomía “campo-gobierno” invisibilizó la gran heterogeneidad estructural del sector

agrario, o sea, la persistencia de múltiples y diversos subsectores que lo integran, con distintas contradicciones entre sus intereses. En ese sentido, y en función de las transformaciones ya mencionadas en los apartados anteriores, ellos afirman que el sector agrario puede ser dividido en tres subsectores:

“El primero estaría conformado por un conjunto importante de grandes empresas: exportadoras de cereales y oleaginosas (Cargill entre otras), grandes sojeros (Grobocopatel), pools de siembra, fondos de inversión y la empresa Monsanto y otras semilleras que proveen en el país (y en el mundo) la semilla transgénica utilizada en más de un 95% en la producción sojera. Este bloque de poder se constituyó en el principal beneficiario de las políticas económicas y agropecuarias de las últimas décadas enmarcadas en los procesos de sojización. (...) En el otro extremo del espectro agropecuario están el campesinado y las comunidades indígenas, así como también una parte importante de la agricultura familiar, pertenecientes fundamentalmente a regiones extrapampeanas. (...) El tercer sector (...) está formado por los denominados “medianos y pequeños productores”. Abarca un espectro muy grande de explotaciones, que se extiende desde medianos productores cuya organización responde a la lógica empresarial en la zona pampeana hasta los tradicionales “chacareros” de la misma zona, así como también productores familiares y empresariales de regiones extra pampeanas.” (Teubal y Palmisano, 2010: 198-199)

Cabe destacar que, desde su punto de vista, no participaron del conflicto en forma directa ni el sector campesino ni las comunidades indígenas ni una parte importante de la agricultura familiar, aunque sí hubo sectores chacareros de medianos y pequeños productores familiares que manifestaron críticas al gobierno por múltiples razones, aunque no siempre estaban relacionadas con el nuevo régimen de retenciones.

Por ese motivo, Teubal y Palmisano consideran que durante el conflicto la Mesa de Enlace representó a una parte importante del tercer sector, al que identifican con lo que coloquialmente se llama “los pequeños y medianos productores”, que a su vez fueron quienes sustentaron las medidas de fuerza en las rutas y contribuyeron sustancialmente a las grandes movilizaciones especialmente en los pueblos del interior. Siempre siguiendo el punto de vista de estos autores, las retenciones no fueron el único aspecto de la problemática agraria que los movilizó, sino que funcionó como catalizador o como significativo vacío que unió una diversidad de demandas y situaciones, no siempre profundizadas por la dirigencia de la Mesa de Enlace.

En cuanto al debate sobre el rol de la FAA, Teubal y Palmisano parten de considerar que frente a la imposición artificial de la existencia de dos grandes bloques -campo y gobierno-, “la posición más incómoda le cupo a la Federación Agraria Argentina” (2010: 195). Para estos investigadores, la forma en que la dirigencia de la FAA se movió durante el conflicto es diferente a la que asumen sectores agrarios medios con características productivas similares en otros países, por lo que es lícito preguntarse por las razones de su alianza estratégica con el resto de las entidades de productores. La respuesta que encuentran tiene que ver con un cambio significativo en su base de sustentación de medianos y pequeños productores de la región pampeana. En efecto, encuentran que entre los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002 queda en evidencia la desaparición de más de ochenta mil explotaciones pertenecientes a estratos de pequeños productores de menos de 200 hectáreas, lo cual creen que colaboró en la disminución de la influencia de este estrato dentro de la FAA.

A la hora de analizar la representatividad de las organizaciones patronales agrarias, Rofman también considera que es un error hablar del “campo”, en la medida en que en nuestro país conviven diversas realidades. Por eso, afirma que el “campo” que llevó adelante el conflicto agrario, el que representan las cuatro entidades, es aquel que llevó adelante el profundo proceso de transformaciones productivas, elevando la producción de *commodities* exportables, especialmente de soja:

“Es el “campo” plenamente capitalista, con tecnología de punta, en establecimientos agrícolas donde predomina la tercerización de las actividades y en el que alrededor del 75% de las tierras son cultivadas por arrendatarios pequeños, medianos y grandes. Las familias de los propietarios y arrendatarios ya no residen en las respectivas fincas, sino que habitan en ciudades cercanas o lejanas, recibiendo los beneficios de las actividades como dueños de la tierra, tanto en forma de renta, si la alquilan, o como renta y ganancia empresarial, si la explotan.” (Rofman, 2010: 323)

Gras (2010) investiga en su trabajo los vínculos entre las transformaciones sociales y productivas del agro argentino y la centralidad que adquieren las capas empresariales, con las formas de acción y expresión política que esas mismas capas desarrollan en el conflicto agrario. En ese sentido, esta investigadora se focaliza en los productores “autoconvocados” que, en su opinión, no se alinearon completamente detrás de las entidades principales del agro y que, además, por su capacidad de movilizar tanto a otros productores como a otros vecinos

de sus pueblos, adquirieron un protagonismo creciente y aportaron a la imagen de un interior “vivo”.

En ese sentido, Gras afirma que la expansión del nuevo modelo agropecuario y las transformaciones económicas asociadas a él fueron motorizadas por un conjunto de empresarios que concentran grandes y medianas extensiones de tierra, desplegando un vertiginoso ritmo de adopción tecnológica, tanto en lo referente a las prácticas agronómicas como a la gestión empresarial. La hipótesis que rige su investigación es que la presencia de esta capa empresarial indicaría una transformación de grandes magnitudes en la cúpula del sector agropecuario argentino: “la desaparición de la vieja oligarquía pastoril y su reemplazo por una “nueva clase empresarial” (2010: 309).

A partir de una serie de entrevistas cualitativas, Gras afirma que estas capas empresariales se caracterizan por la asunción explícita de una racionalidad técnica y moderna que les permite transitar subjetivamente un paso desde su condición de “productores” a la de “empresarios”, a partir del abandono de las formas tradicionales de llevar adelante el negocio agropecuario, generalmente a partir de su formación universitaria y de la asistencia técnica de diversas organizaciones. Esta nueva ubicación, que se contrapone a la caracterización de la “vieja oligarquía” que hizo propia el gobierno en el conflicto de 2008, legitima su posición en base a un énfasis en las competencias personales demostradas, por sobre la trayectoria de clase en la que se inserta cada empresario, en la que resalta la reinversión de las ganancias para mejorar la productividad de sus emprendimientos.

Además, esta investigadora encuentra que un número muy importante de estos empresarios vive en los pueblos del interior y contempla una preocupación extendida por ayudar a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, en términos filantrópicos de responsabilidad social empresaria, lo cual también aumenta la distancia que estos sectores sienten respecto de la “vieja oligarquía” ausentista y rentista.

Con respecto a la inserción institucional de las capas empresariales, Gras destaca las transformaciones sufridas por las entidades tradicionales de productores. Entre ellos, destaca que para muchos afiliados la adscripción a sus entidades pasó a sustentarse más en una relación de usuario-empresa, a partir de una serie de servicios gremiales que cada entidad proporciona, que en una relación gremial o corporativa tradicional. En ese sentido, la

gremialidad de estas organizaciones había quedado separada de otras esferas de acción. En segundo lugar, esta autora destaca las modificaciones sufridas por la base social de las entidades, tomando el caso de la FAA, al que considera paradigmático por la desaparición de capas de la pequeña producción familiar durante los años 90 y por el paso a rentistas de una porción de productores que abandonaron la producción directa, así como también el caso de la SRA, donde también encuentra un paso a una posición rentista de antiguas familias de grandes propietarios.

Además de estas transformaciones, Gras llama la atención sobre el desarrollo y ampliación de la presencia de otras instituciones de carácter “técnico”, como la AACREA y la AAPRESID, que fueron convirtiéndose en referentes del empresariado agrario y que no solamente se ocupan de cuestiones directamente asociadas con el agronegocio, sino también con problemáticas amplias como la educación, los proyectos de sociedad y los modelos de desarrollo.

Para esta investigadora la relación entre los productores autoconvocados y las entidades tradicionales fue ambivalente y contradictoria. Por un lado, reconocieron a la Mesa de Enlace como la instancia de representación que puede llevar adelante el conflicto y la interlocución con el gobierno; por otro lado, entienden su propia acción como un elemento de presión sobre la propia Mesa de Enlace, para asegurar la representación de sus intereses. Además, Gras detecta la construcción de relaciones entre los grupos de autoconvocados y otros grupos y sectores a nivel local, como por ejemplo con sectores comerciales, con delegados gremiales o con organizaciones sociales.

Finalmente, en el caso de la elaboración coordinada por Sartelli, ya mencionada en los apartados anteriores, se refiere a las características del bloque agrario como una “alianza agraria” (2014: 204), entendida como “un conjunto de fuerzas sociales organizadas como fuerzas políticas, las cuales entran en una coalición bajo un programa”.

A la hora de describir a estas fuerzas, en su centro están las que considera “entidades corporativas burguesas”, que trascienden a las cuatro entidades de productores que conforman la Mesa de Enlace y son las mayores entidades burguesas del agro. Además de las cuatro entidades de productores, en este trabajo se hace referencia a AAPRESID, a la Bolsa de Cereales de Rosario, a la Asociación de Productores Rurales del NOA, a la Asociación

Agrícola Ganadera de La Pampa, a la Federación de Acopiadores de Granos, a la Bolsa de Comercio de Rosario y la de Santa Fe, a la Asociación Maíz Argentina, a la AACREA, a la Asociación de Productores de Leche, a la Cámara de la Industria Aceitera, al Centro de Exportaciones de Cereales y al grupo Pampa Sur. Como se puede observar, se trata de un conjunto de entidades que mayoritariamente reúnen intereses productivos, comerciales y financieros vinculados al agronegocio en todas sus dimensiones.

A la hora de analizar la composición interna de esta alianza, el trabajo coordinado por Sartelli destaca el liderazgo de los pequeños capitales agrarios, que arrastra a las fracciones más poderosas del mismo campo. Según este punto de vista, no fue la SRA ni la oligarquía quienes encabezaron la lucha: “los pequeños capitales agrarios (CRA, FAA) ejercen la dirección consiguiendo que todo el mundo agrario se ponga en fila, por las buenas o por las malas, con reclamos que, indudablemente, también benefician a los grandes capitales rurales o ligados a ellos” (2014: 224).

En segundo lugar, este trabajo desarrolla un repaso histórico sobre la política de alianzas de las organizaciones corporativas de la burguesía agraria argentina, como forma de intervenir en el debate sobre el rol de la FAA en el conflicto de 2008. El texto tiene un particular interés en polemizar con la posición política de distintas organizaciones de izquierda (se refiere al Partido Comunista Revolucionario y al Movimiento Socialista de los Trabajadores, principalmente) que construyeron un discurso centrado en la importancia de una alianza entre la clase trabajadora y los “chacareros” nucleados en la FAA. Las conclusiones a las que arriba el trabajo coordinado por Sartelli desechan el presunto carácter extraordinario de la alianza de esta entidad con el resto de ellas. Al contrario, llega a la conclusión de que “han operado en conjunto ante circunstancias que afectan al conjunto de la clase: el golpe militar de 1976, la devaluación de 1989 y la crisis de 2001” (2014: 290). Además, sólo registran dos veces su participación en alianzas con un contenido obrero (en 1988 con la CGT y en 1994 en la Marcha Federal), pero por poco tiempo, mientras que este grupo de investigadores considera que la FAA tampoco lideró la lucha contra la concentración económica durante los años 90 (a cuya cabeza afirman que estuvieron CARBAP y CONINAGRO). En función de este recorrido histórico, estos investigadores plantean que la afirmación de un supuesto “progresismo” de la Federación Agraria no resiste la evidencia empírica.

En esta misma línea, para esta elaboración no hay ninguna disputa de fondo entre las organizaciones de la Mesa de Enlace por cuatro razones:

“Siendo los chacareros actuales propietarios de sus tierras, no hay razón para la confrontación interna, como sucedió en Alcorta, momento en el cual los arrendatarios se enfrentaron a los terratenientes; el proceso de agriculturización iniciado en los ´60 viene homogeneizando la estructura productiva de las cuatro entidades, diluyéndose la oposición chacarero agricultor-terrateniente ganadero; el mismo efecto produce la concentración y centralización creciente, que deja en pie sólo grandes y medianos burgueses; por último, todo el campo sufre amputaciones permanentes de plusvalía a favor de las fracciones no agrarias, lo que, por diferentes vías, termina unificándolos”. (Sartelli et. al., 2014: 292)

2.2. El “campo” como sujeto político

A la hora de abordar la conformación del sujeto político que sustentó la protesta agraria, resulta interesante tener en cuenta el análisis desarrollado por Sebastián Ortiz en su trabajo titulado “La patria terrateniente” (2010), quien considera que se trata de un proceso que puede ser pensado a través de tres momentos. De esa forma, incorpora al análisis una perspectiva temporal que permite poner al descubierto que el conflicto de 2008 no fue un rayo en una noche serena, sino el emergente de un malestar acumulado y organizado durante varios años.

Según Ortiz, en el primer momento de conformación de este sujeto, entre abril de 2004 y agosto de 2006:

“Los grandes terratenientes argentinos nucleados en la SRA y la CRA, y expresándose fundamentalmente a través de su órgano de prensa, La Nación, pasan de elaborar un plan único y estratégico consistente en la profundización de la producción primaria y el desarrollo de la industria a ella vinculada, autodenominado Cadena Agroindustrial, a constituirse primero en una opción crítica a las políticas económicas implementadas por la alianza social expresadas en el gobierno de Néstor Kirchner, y luego en una fuerza capaz de nuclear tras de sí a diversos sectores de empresarios agrarios y conducirlos a una medida de acción directa: un boicot patronal caldeado en asambleas y cortes de ruta en el corazón de la Pampa Húmeda argentina.” (Ortiz, 2010: 61)

Este investigador destaca, desde este primer momento, la formulación temprana de un programa nítido, como demuestra la conformación de la “Cadena Agroindustrial Argentina”,

integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y por varias decenas de entidades de primer orden relacionadas con el negocio agropecuario, desde cámaras de la agroindustria, exportadoras, bancarias y bolsas de cereales. La “Declaración de principios” de la entidad, aprobada el 16 de noviembre de 2004⁸ establece entre otros puntos el rechazo hacia las retenciones. Claro que la ausencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de CONINAGRO, así como la participación de funcionarios gubernamentales en la presentación pública de la entidad agroindustrial, expresan que todavía el proceso se encontraba en una fase inicial.

Lo mismo sucede con las medidas de fuerza tomadas por la CRA y apoyadas por la SRA, pero no por la FAA ni por CONINAGRO, centradas en el rechazo a los controles de precios internos y a las regulaciones estatales del comercio exterior de carnes. Durante esos primeros años, la conflictividad tenía que ver, fundamentalmente, con la contención de la inflación que comenzaba a surgir, especialmente en los alimentos, y generaba diversos conflictos que involucraron a las fracciones del capital que operaban en la producción primaria de alimentos (productores agropecuarios) y en la industrialización, distribución y comercialización (industria, frigoríficos y grandes supermercados, fundamentalmente).

En síntesis, Ortiz destaca de esta primera etapa la “capacidad de organización y de presentación de un reclamo sectorial convertido en oposición al plan económico general y en fuerza, capaz de realizar asambleas, cortes de ruta, movilizaciones y un primer boicot sectorial” (2010: 61).

La segunda etapa, es situada por este autor alrededor de diciembre de 2006, cuando se realiza un boicot de comercialización de ganado y granos durante nueve días, en este caso convocado tanto por CRA como por FAA, que además incluyó tractorazos, asambleas y cortes de ruta.

Las características de este segundo momento tienen que ver, por un lado, con la construcción y la unificación de un discurso de oposición política más claro, cuya esencia pasa por la defensa del libre mercado y contra la intervención estatal. En particular, Ortiz encuentra que las entidades de productores se unieron en dos puntos: la “injusticia” de la transferencia de

⁸ Puede ser consultada en: <http://www.foroagroindustrial.org.ar/files/declaracion.pdf>.

ingresos de un sector de la economía (el campo) al resto de la sociedad y la idea de que el campo es el sector más dinámico del país, siendo este sector el que más aportes realizó para salir de la crisis post 2001, por lo que las “injustas” retenciones se convierten en un ataque a las bases económicas del país. Por otro lado, la otra característica de este momento se vincula con un mayor grado de unidad de los productores grandes, medianos y pequeños, si bien todavía se registran diferencias en los planteos de las distintas entidades⁹, y con una ampliación de la base social que participa de las protestas. Es interesante destacar que este autor plantea que, como parte de las contradicciones de aquel momento, las entidades que componen la Cadena Agroindustrial se dividen y polarizan a la hora de manifestar su respaldo al boicot planteado en diciembre de 2006.

Finalmente, Ortiz registra la incorporación manifiesta de gran parte de los partidos opositores nacionales a la protesta de las entidades agropecuarias, si bien en esta etapa “aún no se logran mayores adhesiones ni de pequeña ni mediana burguesía no vinculada al campo, ni tampoco el apoyo explícito de sectores del movimiento obrero ni de organizaciones populares” (2010: 77).

El inicio del año 2007, signado por las elecciones presidenciales, trajo consigo un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, lo que dio lugar a la tercera y última etapa de preparación del conflicto de 2008. En este caso, Ortiz señala que las entidades de productores apelaron a dos herramientas para afrontar la continuidad de sus reclamos: por un lado una feroz crítica a la credibilidad del Gobierno en su política de precios y por otro lado la generación de malestar social mediante un desabastecimiento velado. Este autor señala cómo se trata de dos herramientas que se retroalimentaron, en la medida que la segunda presionaba sobre los precios de los alimentos, generando malhumor social, mientras a la vez se cuestionaban los índices emitidos por el INDEC y, al mismo tiempo, se señalaba que la causa de la tendencia alcista eran las trabas a la producción agropecuaria atribuidas a las interferencias “distorsivas” del Estado en el “libre juego de la oferta y la demanda”.

En esta situación de tensiones crecientes, donde nuevamente se expresaron disidencias entre la cadena de comercialización de alimentos y las entidades productoras ante las políticas

⁹ La FAA en su discurso buscaba diferenciarse con el argumento de que ellos no rechazaban la intervención del Estado en sí misma, sino que reclamaban una intervención diferente, que beneficiara a los pequeños y medianos productores y atacara la tendencia a la concentración de la producción y de las tierras (Ortiz, 2010: 82).

estatales de control de precios, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) -entidad principal de CRA- lanzó por su cuenta un boicot a la comercialización de quince días, el más extenso hasta entonces.

Es decir que, desde el punto de vista de Ortiz, en esta tercera etapa se generaron distintas estrategias para presionar e influir sobre el conjunto de la sociedad, aunque la inminencia de las elecciones generó un *impasse* hasta la asunción del nuevo gobierno. Mientras tanto, se alcanza la “formulación completa del Programa Agroindustrial”, con la incorporación de tres novedades discursivas: la entrega de subsidios o bolsones de comida para las capas más empobrecidas de la población, la apelación a los gobiernos provinciales a defender sus intereses y la recreación del antiguo discurso de la “oportunidad perdida”, que había sido formulado originalmente para cuestionar las políticas de transferencia de recursos desde el agro hacia la industria del primer gobierno peronista. Con este conjunto de elementos ya estaban dadas las condiciones para el inicio de la gran conflagración, que estallaría en marzo de 2008.

De esa manera, luego de este proceso y una vez iniciado el conflicto, Ortiz caracteriza la composición social y política del partido que impulsa el Programa Agroindustrial de la siguiente manera:

“Conducida por la oligarquía terrateniente, la fuerza ya contaba con el apoyo de sectores de medianos y pequeños productores rurales, las capas medias rurales, gran parte de los sectores medios urbanos, y un sector minoritario pero significativo del movimiento obrero organizado y hasta de organizaciones populares como la Corriente Clasista y Combativa y una diversidad de partidos que van desde la Coalición Cívica, la UCR y el macrismo, pasando por la vieja estructura del PJ vinculada tanto al duhaldismo como al menemismo, y desembocando en partidos maoístas como el PCR, trotskistas como el MST, y socialdemócratas como el Partido Nuevo cordobés o el Partido Socialista”. (Ortiz, 2010: 182)

Este conjunto de sectores pasaron a unificarse detrás de la denominación “el campo”, logrando que todas las diferencias sociales y las contradicciones de intereses que devienen de éstas fueran eliminadas en el fragor de la lucha. Junto con ello, “el campo” pasó a actuar en representación de “el Interior”. Sin embargo, Ortiz resalta cómo quedó velada en esta construcción política el dato central de que “el Interior mutilado y vejado por el puerto de Buenos Aires había sido el resultado de la construcción de un país a manos de esa oligarquía

terratiente que se incorporaba al mundo desde el denominado modelo agroexportador” (2010: 114). Además, este autor detecta que también se buscó invisibilizar las características de clase de cada uno de los sectores en pugna, muy evidentes en la composición social de las concentraciones masivas que se dieron a lo largo de los meses de conflicto, algo que juzga fundamental para la búsqueda del partido agrario de lograr apoyo popular para sus medidas de fuerza.

También Barsky y Dávila (2009), en el trabajo ya mencionado, reparan en que desde el año 2005 se incubaba un fenómeno creciente de malestar y enfrentamiento entre sectores del agro y el gobierno encabezado por el presidente Néstor Kirchner, y lo adjudican centralmente a la contradicción siempre existente entre la producción de carne vacuna, sus precios y sus destinos. De esa manera, afirman que durante esos años el sector ganadero pasó de la euforia a la desazón, a pesar de la subida de los precios internacionales, por medidas oscilantes y arbitrarias de intervención directa sobre el Mercado de Liniers, listas informales de precios máximos y todo tipo de presiones sobre el sector.

En este contexto, también ubican la importancia de algunas medidas de fuerza que pueden ser pensadas como precedentes del conflicto de 2008:

“Confederaciones Rurales Argentinas realizó un primer paro, y en diciembre de 2006 se sumaron a una medida similar Sociedad Rural y Federación Agraria Argentina. Los productores ganaderos protestaban por los precios máximos fijados en Liniers y acusaban de que las acciones gubernamentales provocaban una transferencia de ingresos hacia otros eslabones de la cadena, como los exportadores y los supermercadistas. La protesta se convirtió en la más prolongada y masiva desde el camionetazo que los ruralistas le hicieron en 1985 a Raúl Alfonsín. Pero la diferencia es que aquí no se discutía el reparto de pérdidas sino cómo distribuir mejor los excedentes.” (Barsky y Dávila, 2009: 215)

Por otro lado, estos dos autores se detienen en lo que está detrás de la noción de “campo”, cuya instalación consideran determinante para inclinar el resultado de la batalla mediática. Para estos investigadores la expresión “el campo” no solo es de fácil identificación popular, sino que además “recoge una dimensión histórica profunda, socialmente instalada, que vincula a un pasado nada lejano de gauchos, trabajadores criollos y chacareros inmigrantes que construyeron una parte decisiva de la Argentina moderna” (Barsky y Dávila, 2009: 76). A eso se suma que el flamear de banderas argentinas como autorrepresentación del “campo”

condujo a asociar ese significante con el de “patria”, pese a los intentos infructuosos del gobierno por contrarrestarla con la idea de que “el campo somos todos”.

Para estos investigadores el concepto de “campo” atravesó no meramente a la gente que vive o trabaja en zonas rurales, sino que incluyó a la gran mayoría de los habitantes de los pueblos y ciudades más directamente vinculados a las actividades agropecuarias: “un vasto frente de productores en sus diversas gamas, transportistas, comerciantes, profesionales, obreros, empleados e industriales de empresas generadoras de maquinarias y servicios agropecuarios, se movilizó no solamente en las rutas sino dentro de los mismos centros poblados” (Barsky y Dávila, 2009: 76). Incluso destacan el apoyo de un amplio número de intendentes que se declararon solidarios. De ahí la otra conexión del significante “campo”, que pasó rápidamente a leerse como “interior”, lo que quedó en evidencia por la incorporación rápida del cuestionamiento a que la recaudación fiscal de las retenciones fuera no coparticipable con las provincias y los municipios.

Finalmente, para estos investigadores, es relevante marcar el déficit en la interlocución institucional entre las entidades agrarias y el Estado, como resultado de un largo proceso de destrucción, especialmente profundizado en los años 90. Esa es una de las causas que adjudican a la imposibilidad de canalizar de manera menos virulentas el conflicto y por las que, en consecuencia, las bases agrarias movilizadas apelaron a la acción directa.

En el ya mencionado trabajo coordinado por Sartelli (2014) también se hace referencia al proceso de acumulación previa, cuyo inicio data en 2003, incluso antes de la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia y cuyas medidas de fuerza principales fueron la suspensión de la comercialización de hacienda o grano. En ese marco se caracteriza el rol de cuatro entidades: CARBAP (núcleo de CRA) fue la más movilizada y con mayor iniciativa, seguida por FAA, mientras que CONINAGRO fue siempre el eslabón más afín al gobierno y la SRA ha oscilado, manteniendo una posición centrista. En un análisis general, este trabajo considera que:

“la característica que debe destacarse de estos movimientos es su carácter más bien episódico, más allá del grado de radicalidad que pudieran haber adoptado en una u otra medida puntual. (...) No lograron constituir un comando central ni establecer alianzas más allá del terreno corporativo. No se planteó, en ningún momento, un programa político más amplio. Este escenario cambió radicalmente en marzo de 2008.” (Sartelli et. al., 2014: 176)

En el caso de este grupo de investigadores, como hemos mencionado en el punto anterior, se utiliza el concepto de “alianza agraria”¹⁰ para analizar los acontecimientos de forma tal de poder incorporar la presencia de otros sectores sociales aliados a las entidades agrarias propiamente dichas:

“Al incorporar personal político de partidos de la oposición, ha sumado pequeña burguesía urbana, aunque no en magnitud significativa, más allá de las ciudades y pueblos sojeros. La alianza incorporó también a la Iglesia y a una incipiente fracción de la clase obrera rural, por la vía de su sindicato y sus representantes, que comenzaron a mostrarse en actos. En el camino, ha logrado profundizar el desprendimiento de dirigentes kirchneristas. Con el paro general logró fracturar el frente “industrial”, en tanto logra atraer a las fracciones más débiles y más ligadas al mundo agrario, a su campo.” (Sartelli et. al, 2014: 197)

Es decir que “la alianza “agraria” contiene no solo a los productores agrarios sino también a capitales sumamente concentrados, nacionales y extranjeros que han manifestado públicamente su apoyo al reclamo.

Con respecto a la participación de la Iglesia Católica en la protesta, este equipo de investigadores afirma que “si bien la Iglesia había llamado al diálogo, no condenó la protesta sino que la apoyó” (Sartelli et. al., 2014: 210). Para sustentar esta afirmación por un lado remiten a la homilía de las Pascuas de 2008 dada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, en la que al referirse a los grandes males que afligen al país declaró que “necesitamos que haya un gran temblor en la tierra”. Y por otro lado a la participación de sacerdotes, como mínimo, en 20 cortes de ruta en los que oficiaron misas.

La participación de los partidos políticos opositores, siguiendo con el punto de vista de este trabajo, fue importante no sólo al interior del Congreso, donde motorizaron el rechazo a las retenciones móviles¹¹, sino también por su extendida participación en los actos y medidas de fuerza, así como también en los medios de comunicación.

¹⁰ Recordemos que la definía como “un conjunto de fuerzas sociales organizadas como fuerzas políticas, las cuales entran en una coalición bajo un programa” (Sartelli et. al., 2014: 204).

¹¹ Se releva que el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo, el Partido Nuevo liderado por Luis Juez y el Partido Socialista presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados con ese fin, al que sumaban la prohibición de que puedan resolverse por decreto del Poder Ejecutivo y que sean coparticipables.

Por otro lado, estos autores juzgan la participación obrera en la alianza agraria como “verdaderamente pobre” (Sartelli et. al., 2014: 211), dado que se limitó a la “neutralidad” de la UATRE y a la participación de cuadros militantes del MST y el PCR. De la misma manera, al analizar la participación de la pequeña burguesía, consideran que “es probable que el radicalismo y el ARI puedan haber arrimado algo, sobre todo al acto de Rosario, pero resulta claro que la fracción que participó del 2001 no intervino activamente, ni a favor del campo ni del gobierno” (2014: 211). En cambio, sí observan el apoyo a la alianza agraria de parte de la pequeña y mediana burguesía industrial y comercial del interior, aunque sobre todo como solidaridad simbólica. En apoyo de esta visión del “apoyo recortado” de estos sectores, destacan la falta de respuestas ante la convocatoria de las entidades ruralistas a un paro general el 2 de junio, que solo cumplen los sectores comerciales e industriales más ligados al negocio agrícola del interior de las provincias cerealeras.

Finalmente, en cuanto al programa de la Alianza Agraria, que para esta visión es un elemento central para la comprensión de este sujeto político, estos autores plantean cuáles son sus dos ejes centrales: “desmontar el bonapartismo y enfriar la economía” (Sartelli et. al., 2014: 213). Con respecto al primer eje, su interpretación afirma que el reclamo contra las retenciones “implica el fin del kirchnerismo y del bonapartismo” (2014: 212), dado que sin los recursos de las retenciones, el Estado nacional no tendría forma de disciplinar a las provincias ni tampoco hubiera podido organizar su armado político con el que desafió a las estructuras preexistentes del duhaldismo, el menemismo y el radicalismo. Además, la exigencia agraria de que el Poder Ejecutivo pierda la facultad de fijar el nivel de las retenciones y de que ese tributo u otros se coparticipe conduce, siempre según estos investigadores, a la posibilidad real de perder la discrecionalidad en el manejo de fondos. El segundo eje, por su parte, se desprende del primero, en la medida en que de lograrse la disminución de la recaudación fiscal producto de la eliminación o la disminución de las retenciones, las políticas económicas debían apuntar a realizar un ajuste fiscal o un “enfriamiento” de la economía, como proponían distintos economistas que este grupo de investigadores encuentran, desde Melconian o Artana hasta el propio Lavagna.

A esta interpretación agregan que, en las condiciones concretas en que se dio ese conflicto, un programa de esas características, “el único objetivo que podría tener es debilitar al gobierno y preparar las condiciones de una crisis política aguda” (Sartelli et. al., 2014: 213). En ese contexto, analizan el proceso dinámico por el que lo que era un reclamo corporativo se

convierte en un enfrentamiento político y, en consecuencia afirman que “estamos en presencia de la formación de una fuerza social que, como toda fuerza, va camino a convertirse en partido” (2014: 224).

A la hora de enumerar fortalezas y debilidades de la alianza agraria, naturalmente destacan entre las primeras que su fuerza brota del control del recurso económico más importante del país, sin embargo también marcan entre las segundas su incapacidad hegemónica, dado que:

“Una fuerza que se estructura en torno a un programa que presupone la amputación de la plusvalía que permite la supervivencia de fracciones enteras del capital y de las fracciones obreras que les corresponden, difícilmente pueda organizar en torno a sí a un conjunto de intereses más generales.”
(Sartelli et. al, 2014: 227)

Este equipo de investigadores también resalta la presencia de un actor político de difícil encuadramiento y análisis: los autoconvocados y, en particular, llama la atención sobre la inexistencia de un bloque homogéneo entre los dirigentes nacionales y los dirigentes locales de las entidades. En este sentido, este trabajo destaca varios episodios durante el conflicto en los que las decisiones tomadas por la dirigencia nacional de las entidades luego es modificada al pasar por el tamiz de las asambleas de productores, en las que tienen mucho peso los dirigentes y referentes locales de la protesta.

En el caso de Giarraca (2010), a la hora de aproximarse desde el punto de vista de la acción política y la relación con el gobierno nacional a los diversos sujetos agrarios (hay que recordar que desde su punto de vista detrás del significante “campo” hay una realidad heterogénea), la situación a comienzos de 2008 podría resumirse a través de la siguiente clasificación, construida en función del rol que esta investigadora les asigna en el esquema del “sistema de los agronegocios”:

“1) los nuevos inversores concentraban las simpatías de los funcionarios del gobierno “por innovadores, empresarios de la sociedad del conocimiento”, viajaban en el avión presidencial y ocupaban bancas y puestos de funcionarios; 2) los medianos productores “negociaban” con mandos medios del gobierno tales como el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados o el presidente del INTA, sin conseguir mucho (una de las razones que explican sus posteriores alianzas) y 3) los miembros de la vieja clase terrateniente, subordinada a los nuevos núcleos del poder, recibían oficialmente la desconfianza propia de los gobiernos democráticos por

pecados pasados pero mantenían cierta cercanía social con muchos de los funcionarios de gobierno por la vecindad de sus residencias o por pertenencias a una mismo sector social.” (Giarraca, 2010: 325-326)

Un quinto aporte interesante sobre la construcción política de este sujeto se puede encontrar en el artículo que Pucciarelli (2017) dedica al análisis del conflicto en torno de la Resolución 125, dentro del libro que coordina junto con Castellani (2017) bajo el título “Los años kirchneristas”. Allí, este autor lo define como un “conglomerado agromediático”:

“El conglomerado de productores que inició la protesta convocado por la Mesa de Enlace se había ido convirtiendo, a lo largo de ese breve pero intenso enfrentamiento, en un nuevo tipo de sujeto social. Acompañado por sectores urbanos e interpelado por los medios de comunicación, devino en la base social de un remozado y revitalizado conglomerado opositor que, después de mucho tiempo, había logrado enfrentar y colocar a la defensiva al gobierno nacional. Un sujeto en movimiento inmerso en un acelerado proceso de construcción identitaria, cuyo modo de plantear reivindicaciones y de interpretar conflictos y contradicciones parecía llevarlo a generar, inevitablemente, un nuevo tipo de actor político que lo representara.” (Pucciarelli, 2017: 363)

Este proceso de constitución encuentra, siempre según el punto de vista de este investigador, un elemento interesante en la utilización de la figura del productor “autoconvocado”:

“El conglomerado agromediático intentó consolidar su base social amplificando de modo exagerado algo que ya venía dándole un carácter realmente diferente a la movilización contra las “retenciones” impulsadas por la Mesa de Enlace: la presencia dominante en los lugares de protesta de los productores “autoconvocados”. Por su carácter reciente, este nuevo sujeto movilizado mantenía en el momento de iniciar la protesta una relación ambigua con las organizaciones tradicionales del agro, en especial con la FAA, que lo había representado históricamente: aceptaba las convocatorias a la protesta de carácter institucional, pero las organizaba y desarrollaba en forma independiente, teniendo mucho más en cuenta la opinión circunstancial de los sujetos convocados que las estrategias generales y las directivas puntuales de los dirigentes gremiales. Con este modo de concebir la acción aportaron al escenario del conflicto una sorpresiva imagen de colectivos semiautónomos, regulados por una especie inusual de democracia directa asamblearia donde la ausencia de referencias gremiales eran compensada de modo precario con un alto nivel de improvisación. Estas características restaban eficacia a la acción colectiva, pero fueron aprovechadas con inteligencia, tanto por los dirigentes de la Mesa como por los ideólogos procampo de los medios de comunicación para construir la imagen política o, más bien, antipolítica de la emergencia de inesperados protagonistas casi excluyentes de la protesta.” (Pucciarelli, 2017: 363)

En el marco de la conformación de dos concepciones de país enfrentadas, que en la opinión de este investigador surgieron a partir del conflicto de 2008, la corporación agromediática comenzó a delinear un nuevo “universo campo”, a través del clásico proceso de identificación de una parte con el todo, de forma tal de dar lugar a un mundo rural homogéneo sin contrastes ni diferencias a su interior. Para Pucciarelli, la construcción del concepto de campo eludió las cuestiones materiales, en las que hubieran resaltado inevitablemente las diferenciaciones internas, y se definió fundamentalmente por contraste con un adversario: el “populismo kirchnerista” que amenazaba su derecho a la propiedad, al trabajo y a la acumulación de frutos obtenidos por su iniciativa y esfuerzo individual.

“Se trazó con este criterio una gruesa línea demarcatoria entre dos universos claramente diferentes: uno, enraizado en la sociedad civil y dedicado al trabajo y la producción, libre de compromisos estatales, influencias políticas y pertenencias gremiales, que se movilizó en forma espontánea y desorganizada solo para pedir el libre control de sus recursos y de apropiación de sus beneficios en un marco de libertad económica exenta de trabas, regulaciones e impuestos extorsivos. Los acompañaban en esta empresa, además, otros sectores que, a pesar de no ser afines en relación con su inserción económica y pertenencia social, compartían una misma concepción no sólo de la organización de la actividad económica, sino, y sobre todo, del régimen político institucional, o sea, de una democracia no contaminada por la corrupción política y liderada por una nueva especie de administradores tecnocráticos, no políticos, similares a la tecnocracia neoliberal que encabezó las reformas de la década del noventa. Desde el campo, el otro es definido, en unos casos, por contraste, es decir, por la falta de los atributos que marcan la pertenencia al primer grupo; y en otros, por sus rasgos específicos, o sea, por su pertenencia al mundo de la opacidad política, de la corrupción estatal y de la dominación clientelar.” (Pucciarelli, 2017: 359)

Esta diferenciación social, siempre según Pucciarelli, da lugar a una concepción que incorpora un aspecto moral, en la que “el modelo populista” es el resultado de “un modo espurio de hacer política, implantado por un grupo minoritario de aventureros oportunistas que, atacado por una insaciable ambición de poder, acaba por invalidar con sus prácticas aberrantes a la propia política frente a la mayoría de la ciudadanía” (2017: 357). Y por consiguiente, también genera una división en torno de dos calidades de ciudadanía: por un lado “gente pobre, atrapada en redes clientelares y sin iniciativa para poder pensar y actuar con libertad” (2017: 357), y por otro lado “ciudadanos comunes, indignados por la reiteración de los abusos populistas, capaces de actuar con autonomía por fuera de esa red de redes, en ámbitos creados, en general, por la sociedad civil” (2017: 357).

Vommaro, por su parte, encuentra en el conflicto agrario el retorno de la movilización callejera y del análisis de su composición social como parámetros fuertes de la disputa política en nuestro país, después de un periodo (a partir de 1983), en que estas categorías se habían debilitado. Sin embargo este retorno se dio tamizado por las experiencias atravesadas en tiempos recientes. Particularmente, también se refiere a la lectura dominante de la política en clave moral, en la que cobra centralidad la noción de “corrupción”, que jugó un peso muy importante a la hora de evaluar la legitimidad cualitativa de los apoyos cuantitativos que la movilización popular le otorgaba a cada uno de los sectores en pugna.

De esa manera:

“En el conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos, la crítica a la política pensada en términos de acumulación de “caja”, o la oposición a la recaudación fiscal en términos de “robo”, se relacionaba no sólo con la interiorización de los principios liberales antiestatalistas tradicionales en la burguesía pampeana y extendidos a otros sectores sociales durante la hegemonía neoliberal en la década de 1990, sino que estaba asociado también a la crítica de la política en clave moral como una actividad corrupta.” (Vommaro, 2010: 184)

Junto con esta perspectiva moral, este investigador encuentra una mirada estigmatizante de la relación entre la política y los sectores populares, que gira alrededor de la noción de “clientelismo”. En ese sentido, el intento del gobierno por presentar el conflicto como un enfrentamiento entre minorías enriquecidas y el pueblo, chocó con una representación dominante de la política y del Estado en términos morales:

“Durante el reciente conflicto agropecuario, la movilización de “los pobres”, mayoritariamente de parte del gobierno, será así estigmatizada y sospechada como una expresión de “manipulación” política, que en este caso supone, también, el uso de “la caja” y del “aparato” para ocupar la calle. A esta movilización se le opondrá la de los sectores medios y medios altos que, “espontáneamente” y “por sus propios medios”, también participarán de los actos políticos de apoyo a uno u otro sector, aunque su presencia mayoritaria en las movilizaciones del “campo” otorgará a este sector una mayor legitimidad público-mediática en la objetividad de sus adhesiones.” (Vommaro, 2010: 185)

De esa manera, para las representaciones afines al bloque agrario, las movilizaciones oficialistas estaban garantizadas por “el aparato”, se confundía a sus asistentes con “pobres-

clientes” o con piqueteros violentos; mientras que las acciones ruralistas estaba protagonizadas por las “bases” de productores, concebidas a partir de una pureza indiscutida, que participaban de manera autónoma -eran autoconvocados- y con un carácter pacífico.

En consecuencia, el gobierno se encontró en un primer momento con que contra el principio de la cantidad de manifestantes que lo respaldaba, el bloque agrario oponía la cualidad de esos apoyos, y en un segundo momento, con que incluso en el terreno de la cantidad, era muy difícil sostener la oposición entre los representantes del pueblo y los de una minoría privilegiada.

Por otra parte, Vommaro afirma que el gobierno también tuvo dificultades para imponer su representación del conflicto debido a que chocó con la noción de que el “interior” estaba asociado al trabajo, a la producción, al campo y a lo nacional, como quedaba claro en la repetida imagen de tractores y banderas argentinas que reproducía los principales medios de comunicación durante su cobertura del conflicto. Del mismo modo, para este investigador la aparición de Alfredo De Ángeli como un productor plebeyo consiguió hacer más inverosímil la descripción del productor agropecuario como parte de una minoría privilegiada.

También vale la pena tener en cuenta el estudio de Adrián Piva (2015) titulado “Economía y política en la Argentina kirchnerista”, donde este autor se interroga sobre las formas de la conflictividad social durante los gobiernos kirchneristas y su relación con la construcción de la hegemonía política. Al analizar el conflicto agrario de 2008, destaca tres aspectos que le otorgan un carácter disruptivo:

“En primer lugar, por primera vez desde 2002, una fracción de la burguesía, la burguesía agraria de conjunto, rompió abiertamente con el “bloque en el poder” y puso en cuestión las relaciones sociales de fuerza alumbradas por la rebelión popular de 2001. En segundo lugar, no solo logró concitar el apoyo de los pueblos del interior dependientes de la actividad agropecuaria, sino que movilizó en su favor a la población de las grandes ciudades, en particular a los “sectores medios” urbanos. Actos y cacerolazos masivos, como no se veían desde diciembre de 2001, se produjeron en las principales ciudades, en particular en la CABA. En tercer lugar, a lo largo del conflicto, se produjo en torno a la Mesa de Enlace Agropecuaria una unidad en los hechos de la oposición parlamentaria que configuró un bloque político-social de derecha. Este bloque, sin embargo, no tendría finalmente una expresión político electoral unificada.” (Piva, 2015: 114)

Resulta interesante rescatar en este enfoque la consideración de que la revuelta agraria tenía como objetivo el quiebre de las correlaciones de fuerzas sociales establecido tras la rebelión popular iniciada en diciembre de 2001. En efecto, desde el punto de vista de Piva, ese proceso había dado lugar al surgimiento de una etapa caracterizada por la recomposición del orden social y político sobre la base de la satisfacción gradual de demandas populares, que exigían la captura de una porción de la renta agraria. En ese sentido, la burguesía agraria, ubicada como la protagonista central del conflicto, es postulada como una fuerza que impugnaba el lugar que ocupaba en la estructura de clases y fracciones de clase de la Argentina de aquellos años. Esto es lo que implica su “ruptura abierta” con el bloque en el poder.

Por otro lado, se encuentra en el trabajo de Piva una historización del conflicto social producido por los sectores medios, que permite profundizar las razones de su incorporación al bloque agrario. Este autor considera que entre 2003 y 2005 el gobierno había logrado construir un amplio consenso “que abarcaba el heterogéneo mundo de los “sectores populares” y de los “sectores medios”, es decir, al conjunto de los asalariados y de los pequeños propietarios” (2015: 106). Sin embargo, ubica en 2006 y 2007 un periodo donde se produce un alejamiento del gobierno por parte de los sectores medios urbanos, a partir de la “activación de un conjunto de actores de la protesta cuyas identidades se articularían fuera del campo de la producción y de las identificaciones clasistas” (2015: 107). En particular, destaca los reclamos centrados en la demanda de vivienda, las rebeliones de usuarios de trenes metropolitanos, las protestas ambientalistas y las movilizaciones contra la inseguridad. Es decir que, llegado 2008, amplios sectores medios venían de un proceso de alejamiento del gobierno que preparó las condiciones para su incorporación activa al bloque agrario.

Además, Piva destaca un último elemento que en su opinión colaboró a posibilitar la unidad de amplios sectores detrás de la Mesa de Enlace:

“La identificación del rechazo al arbitraje del Ejecutivo entre fracciones del capital, y del rechazo de los “sectores medios” urbanos al estilo político populista en particular y de la política en general, fue muy potente a la hora de posibilitar una alianza de masas liderada por la gran burguesía agraria, algo poco habitual en la historia argentina.” (Piva, 2015: 115)

Finalmente, Yeyati y Novaro (2013) llaman la atención sobre el hecho de que en las elecciones presidenciales de 2007, en buena parte de las pequeñas y medianas ciudades de la pampa húmeda, el voto había sido favorable al Frente para la Victoria, a diferencia de lo que había sucedido en las grandes ciudades. Para explicar cómo es posible que en estos mismo territorios, pocos meses después, se desplegara una rebelión tan pronunciada, apelan a la hipótesis de que “probablemente, una buena parte de esa próspera y renovada sociedad pampeana llegó a mediados de la década a aceptar que éste era el “mejor peronismo posible”: productivista, disciplinado, moderno” (2013: 83), sobre todo en comparación con las otras alternativas disponibles: el duhaldismo, el menemismo o las deshilachadas fuerzas no peronistas.

En cuanto a la dinámica del conflicto, para ambos autores fue determinante la presión surgida desde las asambleas de productores y las seccionales locales de las entidades de cara a la profundización del conflicto. Es interesante al respecto la relación que hacen con las protestas ambientalistas previas en Gualeguaychú y con la legitimación del método de la acción directa y especialmente de los piquetes por parte del gobierno, todo lo que, según esta visión, conecta la protesta agraria con la experiencia de la “la democracia popular directa y espontánea” de finales de 2001:

“También pesó el protagonismo alcanzado por los activistas locales del gremialismo rural, que de pronto vieron que su acción colectiva los volvía poderosos: podían detener la marcha de la economía, convocar a los medios de todo el país, condicionar la gran política desde sus pueblos y ciudades. Y, tras advertirlo, no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad y volver a sus casas sin más. Ese activismo se educó rápidamente en el uso de la acción directa y desafió a sus propios dirigentes adoptando una metodología basista, de asambleas por localidad, en lo que replicaron lo sucedido en Gualeguaychú años antes, a raíz de la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay. Y se aprovecharon de la legitimidad que el propio gobierno les había conferido a los cortes de ruta, los piquetes y otras formas de protesta en años anteriores.” (Yeyati y Novaro, 2013: 84)

3. Composición social y política del bloque liderado por el gobierno nacional

Tras estos desarrollos dedicados al sujeto social y político que se levantó en marzo de 2008 contra la imposición de retenciones móviles, toca dedicarse a la comprensión del otro sujeto social y político protagonista del conflicto. Es decir, al gobierno nacional encabezado por

Cristina Fernández de Kirchner y a los intereses sociales, también heterogéneos, que se alinearon en su defensa.

3.1 El gobierno kirchnerista y el bloque de poder

Sería inabarcable y poco conducente retomar acá el estado del arte sobre el conjunto de la experiencia de gobiernos kirchneristas, pero sí es posible trabajar aquellos planteos que se centran en las modificaciones que sufrió la alianza de intereses sociales que representaba el gobierno a partir del conflicto del campo.

Tomando esta mirada conceptual que sitúa la atención en un nivel de análisis estructural, una primera posición sobre la naturaleza del kirchnerismo es la que expresa Ortiz (2010) en el trabajo ya mencionado, quien afirma que:

“Su proyecto económico y político se basó en una alianza social conducida por sectores de capital financiero vinculados a la industria y al comercio, sectores medianos y pequeños de industria y comercio, un sector mayoritario del movimiento obrero en tanto actor subordinado a dicho plan industrial, y el apoyo del pueblo en general. (...) El proyecto denominado kirchnerista consiste, en gran medida, en la disputa de una porción de la renta diferencial para el desarrollo a través del subsidio de otras ramas de industria y comercio, así como para la redistribución del ingreso en amplios sectores de la población. Uno de los principales mecanismos de recaudación es el conocido como de “retenciones”.” (Ortiz, 2010: 18)

De esta posición se desprende, lógicamente, la centralidad del conflicto agrario, en el que precisamente se ponía en juego la disputa por la renta diferencial agropecuaria¹².

El grupo de investigadores liderado por Sartelli (2014) también pone el foco en la disputa por la renta diferencial agraria y destaca cómo alrededor del conflicto agrario se produjo una fractura del bloque de poder dominante sobre el que se apoyó el kirchnerismo. Desde su punto de vista, “el resultado es la construcción de dos alianzas, las que, por comodidad, denominamos “agraria” e “industrial”, que se enfrentan por el reparto de la plusvalía presente en la renta diferencial” (Sartelli et. al., 2014: 223).

¿A qué se refiere este trabajo con el bloque de poder que apoyó al kirchnerismo? Lo describen como un conjunto de bases sociales que, como resultado del proceso de crisis de 2001, confluyeron en una alianza detrás de una dirección “bonapartista” cuyo objetivo era la restauración de la hegemonía burguesa en Argentina, cuestionada en aquel tiempo:

“Las bases sociales del kirchnerismo son las fracciones más poderosas del capital financiero e industrial local (nacional y extranjero) y la fracción obrera que les corresponde. La vehiculización de la renta diferencial le permitió añadir a ese eje, mediante subsidios, a las fracciones no industriales (transporte, energía, etc.) y neutralizar a los protagonistas del Argentinazo, los desocupados y a la pequeña burguesía proletarizada y/o pauperizada (mediante el crecimiento del empleo), y a las fracciones más débiles de la burguesía y la pequeña burguesía no agraria (mediante la devaluación).” (Sartelli et. al., 2014: 226)

¹² Es interesante retomar en este punto un fragmento del discurso de asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2007, donde abordó la cuestión del modelo de país y, especialmente, los conflictos entre campo e industria:

“Creo que debemos superar ese tabú histórico que siempre hubo entre todos los argentinos de que si el modelo era la industria, de que si el modelo era el campo. Creo que podemos y lo estamos demostrando que en un modelo de acumulación campo e industria tienen sinergia. Siempre digo, me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos tal vez los produjera la industria. Seguramente estaríamos viviendo en los grandes países desarrollados, donde la industria siempre ha subsidiado al campo. Pero este es el modelo que se eligió muchas veces en el siglo pasado y de lo que se trata entonces es de consensuar esencialmente la profundización de este modelo que nos ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos.”

El discurso completo de la entonces presidente de la Nación se encuentra disponible en: <https://www.caserosada.gob.ar/informacion/archivo/16462-blank-35472369> (consultado el 30 de marzo de 2020).

Sin embargo, para este grupo de investigadores, el resultado del conflicto agrario modificó profundamente este cuadro, en la medida en que el gobierno logró mantener la adhesión de las fracciones más poderosas de la industria y las finanzas aunque en un grado más débil, mientras que perdió todo el apoyo de la pequeña burguesía, de gran parte de la burguesía y de una porción significativa del movimiento obrero.

Hagman (2014, 2015, 2017), por su parte, utiliza el concepto de “consenso neodesarrollista” para analizar la conformación de los apoyos sociales que sustentaron al primer gobierno kirchnerista en las condiciones que emergieron tras la crisis del neoliberalismo en 2001. De esa manera, considera que afrontó con gran éxito un doble desafío: “conquistar al gran empresariado que había logrado con el ajuste de 2002 recuperar parte de sus ganancias y recomponer la legitimidad política frente a los sectores populares, que se encontraban aún en plena movilización” (2015: 122).

“Para el empresariado era el gobierno que restituía legitimidad al Estado y al sistema político y permitía la acumulación de ganancias extraordinarias a partir de la superexplotación de la fuerza de trabajo, así como el aprovechamiento de la nueva coyuntura internacional. Para la clase trabajadora, era el gobierno que instauró un modelo que generó empleo y mejoró los ingresos y las condiciones de vida de la mayoría luego de la peor crisis de la historia reciente.” (Hagman, 2014: 31)

Se trataba de practicar al máximo un “equilibrio político-social”, mediante gestos importantes hacia todos lados:

“Al mismo tiempo que con gran audacia tendía la mano hacia el movimiento popular, se limitaba a administrar el nuevo modelo económico y a re canalizar la política y el conflicto social en los marcos institucionales vigentes, apoyándose en las estructuras tradicionales de la política (PJ), del empresariado (UIA), del sindicalismo (CGT) y del poder mediático (Clarín).” (Hagman, 2014: 29)

En otro trabajo (2017), este autor afirma que en aquellos años el retorno del neodesarrollismo fue un fenómeno regional surgido de la crisis de la economía neoliberal. Se trata de un desarrollismo aggiornato, que retomaba muchos de los planteos del desarrollismo clásico en el nuevo contexto mundial sujeto a las transformaciones operadas durante la globalización neoliberal. De esa manera, “la industrialización debía llevarse a cabo en alianza con el agro-negocio y no contra él, con un Estado con mayores capacidades reguladoras pero sin

vocación estatista, con riguroso cuidado de no incurrir en déficit fiscal, entre otras recomendaciones fundamentales” (2017: 104).

Sin embargo, en su opinión, precisamente el conflicto que desató la Resolución 125 marcó un punto de inflexión que rompió el “consenso neodesarrollista”. Ubicó en la vereda de enfrente del gobierno no solo a la Mesa de Enlace de las patronales agrarias sino también a importantes actores de las clases dominantes, en particular al Grupo Clarín, considerado uno de sus principales articuladores políticos. En este trabajo se analiza al llamado “conflicto con el campo” como la “bisagra” que cerró el primer período del kirchnerismo y abrió el segundo, al que denomina “periodo crispado”, modificando tanto el esquema de alianzas y poder del propio gobierno como el de lo que comenzó a denominarse homogéneamente “la oposición”. El autor destaca el inicio de una etapa de polarización política y social a partir de entonces.

Un enfoque que retoma explícitamente a Poulantzas en distintos trabajos, es el que se puede encontrar en Cantamutto (2015, 2017; Cantamutto y Constantino, 2016), quien en referencia al kirchnerismo afirma que “la hipótesis de interpretación de este proceso político es que una fracción de la clase dominante logró construir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista” (2015: 5). Desde su punto de vista, la fracción hegemónica a la que se refiere es la gran burguesía industrial. En un trabajo elaborado junto con Costantino (2016), ambos autores toman distancia de la contraposición entre la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, que formó parte del discurso oficialista de aquel tiempo. Sintetizan su punto de vista en la afirmación de que la década del kirchnerismo alumbró cambios relevantes, pero dentro de una misma orientación general del país, y afirman que por ese motivo no puede definirse a los gobiernos kirchneristas como gobiernos de las clases populares, sino en todo caso como gobiernos que escucharon algunas de sus demandas, pero siempre según los oídos del mismo bloque en el poder.

En otros términos, que este periodo puede encuadrarse como una nueva fase pero del mismo modo de desarrollo vigente en nuestro país desde las décadas anteriores. Una nueva fase, en la medida que las políticas macroeconómicas fueron modificadas en función del liderazgo del capital industrial y al servicio de la intervención sistemática del Estado con una doble finalidad: por un lado, para contener las demandas populares, y por el otro, para compensar a las fracciones desplazadas del bloque en el poder. Un mismo modo de desarrollo porque en su opinión el conjunto de las políticas estructurales no se vio modificado en un sentido claro.

Estos autores relevan entre los rasgos más importantes de esa orientación general de país a la valorización de capital mediante la superexplotación de la fuerza de trabajo y la intensificación del extractivismo, como expresiones del carácter dependiente de nuestro país, así como también a su sesgo primarizante, que se manifiesta en la elevada concentración y extranjerización del capital.

En este contexto, para Cantamutto, la explicación estructural del conflicto agrario de 2008 tiene que ver con “el rechazo de la fracción agropecuaria a aceptar su posición ambivalente de menor poder político pero afianzamiento de su poder estructural (desgarramiento)” (2015: 389). Es decir que este investigador encuadra el conflicto en una disputa al interior del bloque en el poder debida a la distancia entre las esferas política y económica. Se trata de una impugnación general al orden político hegemonizado por el capital industrial por parte de la dirigencia agraria.

Esta posición supone para el autor una lectura crítica tanto de las tesis “postfundacionales” (entre las que sobresalen las menciones a Ernesto Laclau), que en su opinión no determinan el sujeto que conduce la construcción hegemónica, como de las “marxistas”, que juzga que asimilan como conducción política a las fracciones de la clase dominante que ganan más. Al contrario, ante las segundas Cantamutto destaca la distancia entre política y economía, y llama “fracciones desgarradas” (2015: 7) de la clase dominante precisamente a aquellas fracciones que ganan económicamente pero se encuentran desplazadas de la hegemonía política; y ante las primeras afirma que “el sujeto” es una fracción del bloque en el poder (al que identifica con la sigla BEP).

Como resultado del conflicto agrario, este investigador considera que “las tensiones al interior del BEP fueron apaciguadas con el mayor peso de la fracción financiera, y la focalización del conflicto con las fracciones agropecuarias y el grupo Clarín” (2017: 85), dando lugar a una particularización del antagonismo en estos actores, lo cual supuso un desplazamiento de la oposición productivo-especulativo vigente durante los primeros años del kirchnerismo.

Otro investigador que pone el acento en las continuidades entre los años 90 y los de la post-convertibilidad es Piva, para quien desde 1989 “se ha venido desarrollando y profundizando una estrategia de acumulación impulsada por la exportación de productos industriales de bajo

valor agregado” (2015: 72), que acentuó la tradicional dualidad entre el sector moderno y el sector atrasado de la estructura industrial y del conjunto de la economía nacional, así como los procesos de concentración, centralización e internacionalización del capital local. En ese sentido, este autor considera que durante los años de gobierno del kirchnerismo “no puede hablarse de un cambio del bloque en el poder y es visible la persistencia de una fuerte unidad entre las distintas fracciones de la burguesía en torno a los rasgos centrales del modo de acumulación desarrollado desde 1989” (2015: 156).

Sin embargo, distingue dos fases de ese mismo proceso. A la primera la llama “neoliberal” y a la segunda “neodesarrollista/neopopulista”, cuyo quiebre fue la rebelión popular de 2001, que generó un desfase entre política económica y acumulación capitalista a partir de una mejora de la relación de fuerzas sociales a favor de los trabajadores. En ese marco, los gobiernos kirchneristas expresaron la búsqueda de una intervención estatal orientada a la incorporación política y la satisfacción gradual de demandas populares.

Giarraca (2010), por su parte, defiende una tesis categórica: “el gobierno nacional es hegemónicamente neoliberal –del siglo XXI y no de los noventa– aunque se presente con un supuesto discurso progresista” (2010: 342). Para fundamentar este punto de vista destaca que desde 2003 los gobiernos kirchneristas apostaron fuertemente a un modelo productivo extractivo como una de las patas centrales de su política económica:

Los núcleos de poder del sistema productivo extractivo y de servicios públicos (refrendado por los Kirchner), las empresas exportadoras que se quedan con las retenciones, las proveedoras de insumos como Monsanto, los grandes lobbistas de la deuda externa, los grupos nacionales concentrados como Techint, las corporaciones mineras como Barrick Gold o la Alumbrera, las empresas de la privatización de los ferrocarriles, de los subterráneos, los grandes medios de comunicación, son quienes comandan con el Estado argentino el modelo económico. Estos fuertes actores económicos y políticos gozaban del consenso de empresarios nacionales agrarios, industriales, de servicios, de casinos y juegos, etc. de las distintas regiones del país. Algunos por convicciones ideológicas y otros por subordinaciones de diversos tipos. (Giarraca: 2010, 329-330)

Claro que, luego del conflicto agrario de 2008 y del proceso que lo siguió, Giarraca considera que ese consenso se resquebrajó y dio lugar a una “crisis de consenso hegemónico”, dado que se generaron nuevos litigios con gran parte de estos sectores que anteriormente eran aliados,

con los que habían constituido junto con el Estado “el pacto fundante del capitalismo de esta etapa del neoliberalismo (posterior a la década de 1990)” (2010: 330).

Otro punto de vista es el de Gaggero, Schorr y Wainer, quienes en un trabajo dedicado a analizar la concentración y extranjerización de la economía durante el kirchnerismo titulado “Restricción eterna” (2014), afirman que “el abandono de la Convertibilidad implicó cambios a nivel macroeconómico que tuvieron un impacto positivo en el desempeño de los sectores ligados al mercado interno, pero paralelamente se profundizaron las modalidades de participación del país en una economía mundial crecientemente internacionalizada” (2014: 149). De ellos desprenden la existencia de limitaciones objetivas para una propuesta redistributiva, en particular “en un escenario en el que la ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización e inserción internacional se articuló con un recrudescimiento de las tendencias a la concentración y centralización del capital” (2014: 149).

En este marco estos autores consideran que los distintos elencos gobernantes durante este periodo apostaron a la recreación de una burguesía nacional, entendida como el sujeto impulsor de un proceso de desarrollo económico con inclusión social. Para hacerlo, agregan, apelaron a la memoria del empresariado mercado-internista que durante la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones conformó, junto a la clase trabajadora, la alianza social que sustentó al primer peronismo. Sin embargo, desde su punto de vista, “no parece haber ninguna fracción de la gran burguesía que tenga interés genuino en impulsar la reconstrucción de un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de su situación de dependencia” (2014: 158), lo cual constituye una importantísima traba al desarrollo nacional.

En efecto, desde esta mirada se afirma que el grueso de los sectores dominantes sigue asentándose en buena medida sobre dos grandes elementos: por un lado la explotación de las ventajas comparativas que ofrecen los recursos naturales del país; por otro lado en “nichos” de negocios regulados por el sector público. De todo lo cual se deduce como consecuencia que, más allá de los discursos legitimadores, el Estado nacional no ha llevado adelante una verdadera política industrial.

Por su parte, Castellani y Gaggero (2017) trabajan el análisis del recorrido que llevó desde una etapa de apoyo manifiesto y diálogo abierto entre las principales corporaciones de la elite

económica y el gobierno nacional hasta el cierre de los canales de articulación y un progresivo enfrentamiento entre ambos grupos. Un supuesto fundamental de su trabajo es que “no siempre los buenos resultados económicos se traducen necesariamente en apoyos políticos” (2017: 191).

Desde su punto de vista, el conflicto agrario de 2008 marcó un “quiebre en el frente político empresarial”, que modificó el diagnóstico y la estrategia de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Hasta entonces, estos investigadores consideran que en líneas generales, “las principales corporaciones empresarias apoyaron el rumbo económico del gobierno, en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda, estabilidad cambiaria y monetaria, altos precios de los *commodities* y superávits gemelos” (2017: 192). En cambio, luego del voto no positivo de Cobos en el Senado de la Nación, “la AEA asumió el liderazgo en la organización política del gran empresariado y fue escalando su perfil opositor durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner hasta llegar a la conformación de un gran frente empresario en diciembre de 2013” (2017: 192). En ese momento, este frente adoptó el nombre de Foro de la Convergencia Empresarial.

En este sentido, en este trabajo se releva la opinión de Jaime Campos, quien fue electo como director ejecutivo de la AEA en 2009, y distingue tres momentos en esa relación: entre 2003 y 2007, que caracteriza como de “apoyo e interacción fluida”; entre 2008 y 2012, al que llama de “enfrentamiento creciente”; y finalmente entre 2013 y 2015, cuando habla de “distanciamiento completo y confrontación abierta”. A partir de sus palabras, Castellani y Gaggero plantean dos factores como explicación de estos vaivenes en la relación entre el gobierno y el gran empresariado nacional: el incremento progresivo de la injerencia estatal en la economía y la pérdida de influencia empresaria en la definición de las políticas públicas. Es decir que, como mencionamos más arriba, no postulan factores directamente relacionados con los resultados económicos, sino más bien con las pujas y tensiones políticas derivadas del rumbo general del gobierno.

Finalmente, Castellani y Gaggero destacan que el estudio del comportamiento de la elite económica durante este periodo permite aproximarse a las limitaciones del accionar estatal para modificar patrones estructurales de la conducta de este sector, entre los que identifican la reticencia inversora y la fuga de capitales, dos elementos claves que obstaculizan la estrategia de desarrollo de los gobiernos progresistas. Por otro lado, estos dos investigadores también

resaltan la capacidad de la elite de pasar de un plano de articulación defensiva de intereses a uno ofensivo en el que construyeron una agenda común con el conjunto del arco político opositor.

Aronskind (2010) analiza las modificaciones sufridas desde 1976 por la relación entre el Estado y el sector privado, en un proceso que caracteriza como de una creciente subordinación de las políticas públicas económicas a las necesidades específicas de la acumulación de diversos sectores de interés. Tras un primer intento de recuperar autonomía por parte del Estado en tiempos del primer gobierno constitucional, el caótico final de esa experiencia sentó las bases de una subordinación clara de las políticas públicas, que caracterizaría al país hasta 2001, en nombre de la gobernabilidad. Pero la crisis de diciembre de 2001 modificó ese escenario y, a partir de entonces, el Estado recuperó un grado de autonomía mayor, en un principio tolerado por los sectores económicos concentrados en nombre de la situación económica y social imperante en 2002 y 2003, pero que fue crecientemente combatido. En ese sentido, este investigador considera que la oposición a la Resolución 125 no solamente se puede entender como un conflicto específico sino también en un sentido más general, como un rechazo a la acción “inconsulta” del Estado con las diversas fracciones del poder económico.

Para Basualdo (2011), por su parte, el conflicto de 2008 representó una “divisoria de aguas” contundente. En su opinión:

“El recambio gubernamental dentro del kirchnerismo con la asunción de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación, coincide con una modificación en la naturaleza del gobierno que no se origina en una iniciativa gubernamental sino en la determinación de los sectores dominantes de subordinar, de allí en adelante, al nuevo gobierno a sus intereses, dando por finalizada esa dualidad hegemónica contradictoria que caracterizaba la situación hasta ese momento.” (Basualdo, 2011: 150)

El final de la “dualidad hegemónica”, a la que también llama “ambigüedad inicial”, tiene que ver con que a partir del conflicto de 2008 se produce un cambio que este autor juzga fundamental: “el kirchnerismo asume que los grupos económicos locales no constituyen una fracción del capital aliada, sino que forman parte del bloque de poder que fue el sustento de la valorización financiera” (2011: 162). Se trata de un cambio de concepción, luego de un primer planteo que consideraba a “los acreedores externos y a las privatizadas como

responsables de los actuado durante la década de 1990 y encuadrar a los grupos económicos locales como la burguesía nacional agredida por esas fracciones del capital” (2011: 161). A partir de entonces la derrota legislativa de julio de 2008 abre una contradicción profunda e insuperable entre una parte significativa del establishment local (fundamentalmente los grupos económicos locales y los grandes propietarios rurales) y el gobierno, es decir con el conjunto de las fracciones del capital que conforman la oligarquía argentina.

En este sentido, para Basualdo, a través de la propia práctica política, el kirchnerismo tiende a reconstruir en su oposición al bloque de poder que había estado vigente durante la valorización financiera, y que luego se había fragmentado en la crisis de 2001 en dos campos opuestos en función de la salida planteada a la situación: uno devaluacionista, el otro dolarizador. Si bien esta oposición al bloque de poder vigente hasta 2001 le permite ubicar al kirchnerismo en las antípodas del menemismo (que precisamente se había sustentado en ese bloque de poder), al mismo tiempo Basualdo resalta la coincidencia con el peronismo original, de los años 40 y 50, mediante la que el kirchnerismo, al impulsar la reindustrialización, promueve de hecho a la fracción predominante en la misma que es el capital extranjero industrial.

En función de estas consideraciones, Basualdo afirma que, paradójicamente, el resultado del conflicto agrario no solamente es un triunfo para los sectores populares sino también una derrota para la fracción del capital que detentó la hegemonía durante la valorización financiera. En efecto, para los grupos económicos locales, precisamente la fracción a la que este autor le adjudica la hegemonía dentro del bloque de poder a lo largo de la valorización financiera, 2008 cierra un largo periplo: se había iniciado con la dictadura militar, cuando logró acceder a la hegemonía política que luego supo mantener durante los gobiernos constitucionales que se sucedieron, y que perfeccionó cuando logró el predominio económico a mediados de la década de los años 90. Sin embargo, posteriormente perdió ese predominio durante el segundo quinquenio de esa década a manos del capital extranjero, a quien le transfiere numerosas empresas para realizar ganancias patrimoniales y fugarlas al exterior. Y finalmente esta pérdida se replicó en términos de la hegemonía, al diluirse la ambigüedad inicial que estaba presente en los gobiernos kirchneristas como resultado de la ofensiva que esta fracción del capital llevó a cabo a raíz de la Resolución 125 sobre retenciones móviles, “con la intención de doblegar y subordinar al actual gobierno, e imponer a partir del control estatal un patrón de acumulación de capital sustentado en la producción primaria

exportadora” (2011: 183). Es decir que el resultado del conflicto de 2008 pone a los grupos económicos locales -expresión contemporánea de la oligarquía diversificada- en una situación muy compleja porque por primera vez en muchísimo tiempo no cuenta ni con el predominio económico ni con la hegemonía política.

Por otra parte, como adelantamos en el apartado 1.2, para Basualdo es central enmarcar el conflicto de 2008 como un periodo marcado por la indefinición sobre el patrón de acumulación vigente y, por lo tanto, por las diversas tensiones existentes para definirlo, luego de la crisis de la etapa anterior caracterizada por el predominio de la valorización financiera. En este sentido, considera que:

“La causa por la cual la fracción que ejerció la hegemonía durante la valorización financiera forzó la situación imperante radica en su imperiosa necesidad de retomar un control totalizador sobre el Estado, de manera de poder avanzar en un patrón de acumulación de capital nuevo que estuviera bajo su conducción y subordinara a sus intereses al resto de las fracciones dominantes del capital y a los sectores subalternos”. (Basualdo, 2011: 151)

Es decir que, en su opinión, las causas de ese levantamiento deben buscarse en los esfuerzos por definir un nuevo patrón de acumulación, teniendo en cuenta que esta ofensiva sobre el gobierno tuvo condiciones de aceptación dentro de los sectores dominantes por las posibilidades que brindaba en 2008 el mercado internacional y especialmente por el estancamiento, o la disminución relativa de la rentabilidad -aunque el autor insiste en que seguía siendo significativamente más elevada que durante la década de 1990-, debido a las mejoras obtenidas por los asalariados respecto al momento álgido de la crisis de 2001.

Finalmente este autor postula una interesante comparación histórica, a partir de la identificación del gobierno kirchnerista como un gobierno nacional y popular:

“El kirchnerismo se inserta en esta línea histórica aunque enfrentado a un bloque de poder diferente, con mayores similitudes con el correspondiente al modelo agroexportador que al de sus antecesores inmediatos de la década de 1960 y 1970. No se trata de enfrentar las distorsiones productivas y la regresividad en la distribución del ingreso derivada de la expansión extranjera en la producción industrial, sino a las fracciones centrales en la valorización financiera: los grupos económicos locales, los acreedores externos y el capital extranjero prestador de servicios públicos.” (Basualdo, 2011: 188)

3.2. Las transformaciones del bloque liderado por el gobierno como sujeto político

Para el gobierno, el conflicto agrario implicó también un conjunto de modificaciones en su esquema político, en la lógica del ejercicio del poder y los modos de la construcción hegemónica, que la bibliografía aborda desde múltiples puntos de vista.

Yeyati y Novaro (2013) en el trabajo ya mencionado, por caso, ponen el foco en la necesidad de explicar las razones del profundo proceso de polarización política y social que se abrió entonces, para abordar las modificaciones identitarias que produjo. ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes fueron los responsables?

“No parecen haber sido la cúpula de las entidades del campo, los partidos opositores ni los medios los que impulsaron la politización del conflicto, sino más bien las facciones duras de ambos bandos enfrentados. Con una significativa diferencia entre ellas: del lado del gobierno, fue la cúpula la que radicalizó y polarizó, guiada por un diagnóstico que le indicaba que ésa era una apuesta ganadora y rentable; en cambio, del lado del campo, fueron las bases movilizadas las que endurecieron el reclamo y se resistieron a acomodarse a las posturas más negociadoras de la conducción.” (Yeyati y Novaro, 2013: 81)

Es decir que, en su opinión, quienes radicalizaron el conflicto fueron la cúpula del gobierno nacional y las bases movilizadas de productores agropecuarios. De esa manera, los sectores moderados del gobierno y la dirigencia de las entidades de productores habrían sido las víctimas de una doble presión que los acorraló. Desde la visión de estos autores, la estrategia de polarización había sido efectiva para el kirchnerismo en otros contextos, en los cuales había conseguido alinear a sus seguidores, ganar a los sectores dubitativos y sumir en la dispersión a los adversarios, pero en este caso el resultado fue distinto: debilitó a los suyos y fortaleció a sus adversarios. Yeyati y Novaro consideran que el gobierno nacional atribuyó este resultado diferente a que había ido “más a fondo” y enfrentado por ello una resistencia mayor. De ese balance surgieron modificaciones significativas en términos identitarios: una identidad kirchnerista más fuerte, una menor diversidad de su personal político y seguidores más activos. “La suya sería en adelante una coalición más uniforme y más militante, aunque más pequeña y menos expresiva de intereses sociales” (2013: 101), afirman en consecuencia Yeyati y Novaro.

En efecto estos autores, que consideran al enfrentamiento de 2008 como uno de los grandes “errores” del período kirchnerista, destacan la modificación del arco de alianzas en el que se sustentaba hasta entonces el gobierno nacional, al que juzgan impuesto por necesidad más que por convicción, y el inicio de una nueva etapa caracterizada por la elección libre en pos de asegurarse una obediencia incondicional. Se refieren a estructuras territoriales, grupos de interés, aliados políticos y medios de comunicación.

Ellos también registran un cambio en la base social movilizada en apoyo al gobierno, para lo que hacen un análisis del acto oficialista del primero de abril de 2008:

“Entre los asistentes a ese acto, junto a los movilizados por los sindicatos y las organizaciones territoriales oficialistas, asomaron sectores medios inorgánicos que simpatizaban más con la postura que el gobierno estaba asumiendo ahora que con lo que había hecho hasta ese momento. Esos manifestantes, que en buena proporción habían votado a otros candidatos y provenían de la izquierda más que del peronismo, encarnaban una transversalidad diferente de la representada por la fórmula Cristina-Cobos. Una que podía hilar el conflicto del campo con la política de derechos humanos, o con los planteos antiimperialistas ensayados contra el FMI y el ALCA. El discurso de Cristina en la ocasión pareció orientado a atender especialmente a este nuevo público, y no solo por el rumbo impreso al conflicto de la 125, sino más ampliamente por el lenguaje y los criterios con los que definía su gobierno y su coalición.” (Yeyati y Novaro, 2013: 78)

Profundizando este aspecto sobre el lenguaje y el relato que el gobierno elaboró sobre su propia identidad, sobre sus adversarios y sobre los desafíos que afrontaba, Yeyati y Novaro consideran que a partir de ese momento:

“Se empezó a cultivar así una ética del aguante y del “gobierno nacional y popular en lucha contra los poderosos”. Promoviendo la imagen de un liderazgo débil y amenazado, que contradecía la realidad institucional de un gobierno fuertemente concentrado y tan poderoso en términos fiscales como comunicacionales y partidarios. La “guerra contra el campo” abrió además la puerta a una más intensa nostalgia setentista de quienes actuaban en el presente para librar de nuevo viejas batallas perdidas, en un giro que convertiría el revisionismo histórico en revisionismo político.” (Yeyati y Novaro, 2013: 102)

Por otra parte, estos autores también identifican un “quiebre” sobre cómo el gobierno interpretó y a partir de entonces transmitió la orientación general del proceso político y económico que se vivía:

“Hasta entonces en el discurso oficial habían convivido un componente productivista, atento a la moneda competitiva, la expansión de las exportaciones y las inversiones, y por tanto a la rentabilidad empresarial; y un componente populista, intervencionista y distribucionista, para el que el capitalista no era más que un concesionario de los medios de producción, sin derecho a apropiarse de sus ganancias más allá de una “rentabilidad justa” que determinara el Estado.” (Yeyati y Novaro: 2013, 103)

Finalmente, un último elemento sobre el que Yeyati y Novaro reflexionan es el interrogante sobre si estas modificaciones fueron accidentales o si en realidad se trataron de evoluciones naturales de “un movimiento basado en la concentración de poder y el aniquilamiento del adversario” (2013: 100). Es decir, hasta qué punto puede separarse como dos realidades diferentes al kirchnerismo pre 2008 y post 2008. En su opinión, el tiempo demostró que el episodio de la 125 fue un quiebre en el proceso de evolución del liderazgo oficial, pero éste tomó entonces “un camino no necesariamente ajeno a lo que desde el gobierno se había insinuado como afán y destino ya en los años de abundancia” (2013: 100).

Para Nardacchione y Taraborelli, la estrategia de negociación dura e ideologización del conflicto formaba parte del repertorio tradicional de actuación del kirchnerismo y, en ocasiones, le había traído dividendos. Especialmente cuando enfrentaba a sectores fragmentados o deslegitimados, como había sucedido con la reforma de la Corte Suprema de Justicia o con el avance de la política de Derechos Humanos. Por eso, ante la dispersión tradicional de las entidades de productores primó el maltrato institucional y la ausencia de diálogo. De esa manera, se generaba una autonomía gubernamental frente al sector que, “le permitía actuar sin condicionantes pero frente al conflicto le restaba capacidad de incidencia interna” (2010: 132).

De esa manera, la política de endurecimiento que llevó adelante el gobierno no solamente no le permitió sumar aliados extra-sectoriales sino que perdió a todos los aliados que había construido durante la presidencia de Néstor Kirchner. “La sangría política a costa de una disputa sectorial no parece tener parangón en la historia argentina” (2010: 137).

Cantamutto (2017), por su parte, afirma que el conflicto de 2008 impuso un doble cambio en la estrategia política del kirchnerismo: “por un lado, el intento del gobierno por legitimarse mediante la validación institucional, cuando su propio surgimiento ocurrió a través de una ruptura frente al orden previo; y por otro, una inclinación a afianzarse en la fuerza propia” (2017: 84).

Con respecto al primer punto, este investigador analiza el discurso de la presidenta para fundamentar su afirmación:

“El 1 de abril la presidenta explicó el argumento político: se trataba de una minoría corporativa que ponía en riesgo los intereses comunes de la nación, atentando desde dentro de la comunidad contra el bienestar del conjunto, y que, por lo tanto, el gobierno, en calidad de representante de la totalidad, tenía derecho a decidir sobre la parte.” (Cantamutto, 2017: 72)

De ahí que considere que el gobierno validaba su accionar en las instituciones democráticas y en el voto popular. Aunque al mismo tiempo Cantamutto resalta que, pese a las acusaciones de sus detractores, la presidenta no excluyó de la comunidad a los manifestantes, sino que los llamó a recapacitar, lo cual desde su punto de vista resulta una nota típica del populismo, “que juega en el corrimiento de la frontera interna del orden político, sin buscar una exclusión total de la posición antagónica” (2017: 72).

Siempre según el punto de vista de este autor, el establecimiento de esta nueva frontera al interior de la comunidad política representa una novedad, pues hasta el 2008 eran los sectores especulativos quienes representaban la amenaza neoliberal al pueblo, pero a partir de entonces ese lugar sería ocupado por las corporaciones, que defendían ambiciones particulares y atentaban contra el todo, poniendo sus reclamos por encima de los intereses de la Patria. De esa manera pasaba a resaltarse el carácter antidemocrático y antipopular del reclamo del capital agrario ante una fuerza de gobierno que se presentaba como legítima representante de la totalidad política, avalada por el reciente voto de una amplia mayoría.

En este sentido, Cantamutto afirma que la distinción sobre quienes representaban una amenaza “ya no tenía arraigo en valores e ideas (conservadores o neoliberales) ni en ocupaciones (finanzas, especulación) o en distorsiones de la función (corrupción) como al

inicio del mandato apuntaba Kirchner, sino en el carácter particular de la demanda” (2017: 73).

Con respecto al segundo punto, al que hicimos referencia más arriba como un afianzamiento de la fuerza propia, este autor lo conceptualiza como una “afirmación particularista de la fuerza en el gobierno”, que condujo a “la consolidación de una identidad propiamente kirchnerista” (2017: 84), en la que “ante al discurso liberal-republicano, el gobierno enfatizó su matriz nacional-popular como fuente de democracia sustantiva” (2017: 80).

Esta transformación da lugar, para Cantamutto, a una modificación más profunda:

“Es, entonces, en esta fase cuando el kirchnerismo se consolida no sólo como una fuerza política sino que modifica el campo político, al erigirse como identidad política de gran parte de las fuerzas nacional-populares, aun cuando esto implicó la ruptura de alianzas previas basadas en otras prioridades. De la transversalidad orientada por lo electoral, se pasó a una afirmación particularista con mayores componentes ideológico-políticos.” (Cantamutto, 2017: 85)

Pucciarelli (2017), en el interesante análisis ya mencionado en torno del conflicto agrario, afirma que luego del triunfo electoral de 2007 el kirchnerismo buscó poner en marcha la construcción de un nuevo proyecto globalizador de “hegemonía orgánica”, tal como el menemismo había logrado hacer en la década anterior. Sin embargo, estos planes se modificaron de forma sustancial una vez que se instaló la sorpresiva disputa alrededor de la Resolución 125. De esa manera se puso en evidencia, a lo largo del propio conflicto agrario, el surgimiento de dos bloques sociopolíticos enfrentados, suficientemente consolidados, pero que no habían conseguido superar todavía su carácter de “proyectos prehegemónicos” en lucha por la supremacía dentro de un régimen al que llama de “hegemonía escindida”.

A la hora de analizar el bloque que respaldaba al gobierno, la manifestación pro-gubernamental del 1° de abril de 2008 es tomada por este investigador como una muestra de la capacidad de movilización del gobierno de sectores independientes, agrupaciones sindicales, movimientos sociales, columnas conducidas por intendentes del Gran Buenos Aires, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. De esa manera, tomaba cuerpo el intento oficialista de oponer a la movilización del “campo” su propia demostración de fuerzas en las calles. Sin embargo, sus objetivos eran diferentes: el eje de las segundas era

“frenar los intentos desestabilizadores enmascarados en las manifestaciones procampo y defender la democracia” (2017: 358). La irrupción de este elemento fuertemente identitario para el nuevo sujeto kirchnerista que se estaba conformando se basaba en la idea de que los gobiernos populares se encuentran obligados a dar una batalla desigual contra los poderes fácticos para reconquistar la soberanía y autonomía del Estado.

Basualdo (2011), por su parte, realiza un análisis sobre el significado que tuvo el conflicto de 2008 desde el punto de vista político:

“De allí en adelante el gobierno intensifica el tutelaje estatal sobre los sectores populares -mediante medidas que buscan incrementar la participación de los asalariados en el ingreso y también a través de institucionalizar reivindicaciones de minorías diversas- y redobla sus esfuerzos para disciplinar a las diferentes fracciones del capital dominante que formaban parte del bloque de poder de la valorización financiera.” (Basualdo, 2011: 161)

Esta afirmación le permite a este investigador plantear que a partir de entonces el gobierno busca su consolidación social y política a través del ejercicio de la hegemonía clásica¹³, y en términos más específicos, encuadrándose dentro de la tradición de los gobiernos nacionales y populares. Con hegemonía clásica, se refiere a un proceso por el cual se busca plasmar una creciente inclusión política y social de los sectores populares, ubicados en una posición política subalterna, a través del otorgamiento de crecientes beneficios. Un elemento importante que destaca es que “los movimientos nacionales y populares surgen a partir de la crisis del bloque de poder que era hegemónico hasta ese momento y que es al cual enfrentan y tratan de desarticular y disciplinar” (2011: 162). Por ese motivo la identificación de la crisis del bloque de poder en 2001 es una cuestión central para su investigación, en la medida en que está directamente conectada con la definición del kirchnerismo como un “movimiento nacional y popular” de manera categórica a partir de 2008, una vez despejada la “ambigüedad inicial” mencionada en el apartado anterior.

¹³ Para su línea de investigación, esto implica la ruptura definitiva con otra forma de hegemonía sustentada en el “transformismo argentino”, concepto con el que se refiere al proceso de colonización de la dirigencia política y gremial de origen popular, por parte de las principales fracciones del bloque en el poder. Esta configuración política estuvo vigente especialmente, para este autor, durante los años 90 y es el fundamento de su crítica al Partido Justicialista, al que considera el “núcleo central” del transformismo argentino. Por eso en las permanentes tensiones entre una construcción política kirchnerista propiamente dicha y la dirigencia del PJ se juegan para Basualdo las tensiones de la relación de los gobiernos kirchneristas con el bloque de poder.

Respecto de la definición de los movimientos nacionales y populares, para Basualdo tanto la importancia de la autonomía estatal como el enfrentamiento con el bloque de poder hegemónico, indican que su propósito es desarticular un bloque de poder determinado, consolidando un tipo de Estado específico. A partir de lo cual llega a la conclusión de que “la problemática popular delimita un espacio diferente a la problemática clasista” (2011: 163), en la medida en que no se trata de movimientos que en sí mismos aspiran a llevar adelante una revolución social que desemboque en una sociedad sin clases sociales, sino instaurar un régimen específico dentro de un orden capitalista.

Piva (2015), por su parte, considera que el gobierno había logrado constituir un amplio consenso entre 2003-2007 y afirma que consiguió reconstituirlo después de su dilapidación durante el conflicto del campo. En su opinión, la clave de ambos logros fue haber apelado a:

“Una lógica de satisfacción gradual de demandas, que consistió en una recuperación selectiva y resignificación de reivindicaciones democráticas y populares forjadas desde la resistencia al neoliberalismo en los años noventa, le permitió galvanizar el consenso y polarizar el espacio político, identificando al grueso de la oposición con la derecha y la vuelta al pasado.” (Piva, 2015: 121)

Sin embargo, esa afirmación no lo conduce a hablar de la existencia de una hegemonía kirchnerista desde 2003. Esto se debe a que, en su opinión, “el corazón de una hegemonía es la constitución de mecanismos institucionales de canalización del conflicto, en tanto que manifestación coyuntural de las contradicciones sociales” (Piva, 2015: 121). Sin embargo, en el caso del kirchnerismo esos mecanismos institucionales no pudieron consolidarse sino que eran parte permanente de la disputa social, como deja al descubierto el cuestionamiento a la delegación de facultades en el Ejecutivo -los llamados “superpoderes”- y a la interpelación populista del gobierno, así como la tendencia a la acción directa que registra en diversos conflictos sociales, de tipo antiinstitucional, de los sectores medios urbanos, de fracciones de las clases dominantes y de la oposición parlamentaria.

Svampa (2011) establece una periodización de la primera década política del siglo XXI en nuestro país, a partir de su segmentación en tres grandes momentos políticos: el primero en torno de la rebelión popular de 2001, que dio lugar a un escenario de gran movilización política, crisis generalizada y surgimiento de un nuevo *ethos* militante; el segundo alrededor de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en mayo de 2003 que modificó la situación

política, interpeló a amplios sectores sociales, formuló la perspectiva de un regreso a la normalidad política, generó la emergencia de un discurso progresista “desde arriba” y un tímido retorno de lo nacional-popular; y el tercero, desde luego, que se abre con el conflicto agrario de 2008, al que caracteriza como de exacerbación de lo nacional-popular y de intento de construcción hegemónica.

En este sentido, 2008 fue un parteaguas para esta investigadora, que funcionó como “la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular” (2011: 27) que se venía insinuando paulatinamente desde 2003. Por ese motivo resalta la reactualización de antiguos esquemas binarios que derivarían en la estructuración de un escenario de polarización político-social como el que contemporáneamente se desarrollaba en otros países latinoamericanos:

La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico hizo que éste adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos «piquetes de la abundancia») como la rápida reacción de sectores de la clase media porteña, que salieron a la calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición nacional-popular: civilización o barbarie; peronismo o antiperonismo; pueblo y antipueblo. No importa ya si el gobierno mostró escasa flexibilidad para negociar con las diferentes partes, cimentando de este modo el carácter monolítico del bloque opositor, o si las clases medias volvieron a manifestar inveterados prejuicios racistas y clasistas en relación con las bases populares peronistas. (Svampa, 2011: 29)

Svampa considera que tanto el éxito económico de la política del gobierno como la posterior ampliación de sus alianzas en clave nacional-popular redujeron y simplificaron el escenario político y terminaron por ensanchar las espaldas del proyecto político gubernamental, a partir de la incorporación de numerosas bases provenientes de las clases medias urbanas. Esta autora también llama la atención sobre que, a partir un fenómeno más amplio pero que se manifestó muy claramente en el surgimiento de Carta Abierta, por primera vez en su historia, desde el poder, “el peronismo parecería superar la oposición entre pueblo y cultura, entre masas e intelectuales, que tanto ha sobrevolado como maldición sobre anteriores experiencias nacional-populares” (2011: 33).

En cuanto al ejercicio de la hegemonía, asentada sobre todo en una construcción cultural-mediática, por parte del gobierno kirchnerista, Svampa afirma que “la actualización de lo nacional-popular, realizada a través de la profundización de los antagonismos y la activación de estructuras de inteligibilidad binarias, se halla más cerca de las clásicas versiones organicistas de la hegemonía que de una visión pluralista” (2011: 33). Sin embargo, esta investigadora señala que la matriz nacional-popular impulsada por el kirchnerismo fue incapaz de aglutinar y contener todos los frentes de conflicto social y todas las formas de expresión de lo popular. En particular, se refiere a la conflictividad territorial surgida de la lógica de desposesión -en su opinión, sostenida y promovida por el gobierno de aquel entonces- que conlleva el modelo de desarrollo extractivista que marca la continuidad con lo sucedido en los años 90 y que se expresa en la mercantilización de tierras, la expansión del agronegocio y de la minería transnacional.

Rinesi estudia el problema de la representación, a la luz del discurso del gobierno nacional durante el conflicto del campo, donde encuentra un hilo de continuidad con el discurso alfonsinista. Particularmente, se refiere al tema de “la diferencia entre la legitimidad del poder de decisión de los representantes votados por el pueblo y la ilegitimidad de las reivindicaciones particularistas de los dirigentes de las corporaciones” (2010: 47). Es decir, a la oposición entre una fuerza que tiene la obligación de pensar en los intereses del conjunto del pueblo y aquellas otras fuerzas sectoriales que, por definición, aspiran a representar solo a una parte de él.

Para este investigador, se trata de una temática claramente inscripta en la tradición liberal representativa, que actúa en una dirección diferente a otra tendencia con la que convive en los años posteriores a 1983, que es la apuesta por la participación y el protagonismo ciudadano en las decisiones. De esa manera, para Rinesi, resulta necesario interrogarse sobre el por qué esta suerte de liberalismo representativista resulta atractivo para sectores –en los que él mismo se inscribe- que siempre habían reivindicado la otra tendencia. La respuesta que encuentra es por la negativa: “lo odioso que resultaban los poderes contra los que se levantaba” (2010: 49).

Gargarella, por su parte, toma el análisis de Rinesi pero invierte la misma oposición y plantea que en la acción directa y las asambleas ruralistas se podía encontrar un clima democratista relacionado con las experiencias provenientes de 2001, mientras que en el accionar del gobierno se puede rastrear la tradicional opción de las fuerzas políticas liberales de construir

estabilidad y gobernabilidad a partir del acuerdo con sectores conservadores. En este caso, con estos últimos se refiere a las estructuras del Partido Justicialista, especialmente las del Gran Buenos Aires. De esa manera, este autor describe como autoritario y crítico de la movilización popular al discurso oficialista, mientras que encuentra la apelación a la movilización callejera, la crítica a la dirigencia política y la reivindicación de una política reapropiada desde el protagonismo directo en el discurso de los sectores alzados.

En consecuencia, Gargarella caracteriza al conflicto agrario como “una disputa al interior de un mismo esquema de organización política, o sea, un enfrentamiento que se va a dilucidar al interior del orden conservador” (2010: 61).

Con respecto a las modificaciones estrictamente políticas, el grupo de investigadores conducido por Sartelli (2014) afirma que, de conjunto, “las pérdidas del gobierno en realidad reflejan la fractura de la burguesía provocada por el conflicto” (Sartelli et. al., 2014: 223). En ese sentido, su trabajo subraya las diversas rupturas que se producen en el campo político del Frente para la Victoria. Por un lado, en cuanto a los gobernadores, donde consideran que “el conflicto con la burguesía agraria hizo estallar el entramado nacional kirchnerista” (2014: 214), con especial atención a las rupturas del peronismo cordobés y santafesino, pero también a una gran cantidad de situaciones intermedias que se sucedieron a lo largo y ancho del país. Algo similar señalan para el nivel de las intendencias, en las que identifican “una grieta en un armado que al kirchnerismo le ha costado construir” (2014: 217). También en el movimiento obrero, donde se produjo la división de la CTA y el apoyo de la UATRE al bloque agrario, y en las organizaciones piqueteras, donde se inició el distanciamiento de la organización Libres del Sur. Finalmente, en la base electoral del gobierno, como quedaría en claro en las elecciones legislativas de junio de 2009.

4. Debates sobre el carácter del conflicto

Gran parte de la bibliografía discurre sobre dos grandes cuestiones: la definición del carácter del conflicto y lo que estaba en juego en él. Existe un punto de consenso amplio, que pasa por la constatación de que si bien el conflicto de 2008 inició con un reclamo económico-corporativo, el desarrollo del mismo generó una disputa política más general. Sin embargo, luego las interpretaciones y los aportes difieren en distintos puntos.

El grupo de investigadores coordinado por Sartelli considera que a la hora de encontrar un concepto adecuado para caracterizar la forma del conflicto agrario, el más preciso es el de “rebelión fiscal”, entendiendo por ella la continuidad de una disputa de larga data en la historia nacional por la posesión de la renta diferencial, entre las fracciones agrarias y las fracciones industriales de la burguesía.

En ese sentido, realizan una afirmación fuerte al encuadrar el conflicto como una “lucha interburguesa”:

“La oposición “campo”-”gobierno” en realidad encubre a dos fracciones distintas de la burguesía que se disputan el plusvalor social. La negativa a pagar el impuesto que implica la retención es, en su esencia, un rechazo a ceder plusvalía a otras fracciones burguesas, ya sea como abaratamiento de la fuerza de trabajo o como subsidio directo. Dicho de otra manera: lo que aparece como una disputa con el Estado es una disputa contra la fracción burguesa beneficiada por la política estatal.” (Sartelli et. al., 2014: 225)

A partir de esta definición, este grupo de investigadores considera que se trata de un fenómeno de características orgánicas, es decir que no estamos ante un hecho episódico o coyuntural. Por lo tanto, siempre desde su punto de vista, eso significa que la burguesía ha comenzado un enfrentamiento interno de gran envergadura y significa, también, que “ha dejado de actuar como clase en el terreno político y que ha dado comienzo a un proceso de disolución, hasta tanto una de sus alianzas imponga sus condiciones” (2014: 226).

El marco de pujas de cara a la definición de un nuevo patrón de acumulación, ya mencionado en los apartados anteriores, le permite a Basualdo (2011) interpretar el propio conflicto en sus razones de fondo como un emergente de la lucha por la hegemonía política por parte de las fracciones de capital que conducen el proceso de acumulación en el campo.

“Lo notable de esta nueva situación es que no es el resultado de un intento gubernamental por avanzar en un plan de reformas económicas y sociales, sino de una ofensiva de ese establishment local sobre el gobierno para subordinarlo a fin de que actúe en consonancia con sus intereses. Ciertamente, esa ofensiva no se origina en que esas fracciones del capital enfrentan una situación crítica en términos económicos, ya que por el contrario en ese sentido todas las evidencias disponibles indican que transitan circunstancias notablemente favorables. Su contenido es eminentemente político y en última instancia supera incluso la intención de imprimirle una orientación determinada y permanente a la acción de gobierno, porque lo que se pone en

marcha es la disputa por recuperar su hegemonía y definir un nuevo patrón de acumulación de capital que reconozca a esas fracciones del capital como su núcleo central.” (Basualdo, 2011: 159)

Este investigador apunta que el objetivo del planteo de los sectores dominantes no parece ser tanto el derrocamiento del gobierno¹⁴, sino más bien el intento de disciplinarlo para que abandone sus políticas distribucionistas. Hay que recordar que, desde su punto de vista, estos años estuvieron marcados por la pugna social por definir la distribución del ingreso y un nuevo patrón de acumulación, tras la crisis del régimen basado en la valorización financiera. Este autor atribuye la causa de este intento de disciplinamiento a la profundidad de la crisis del sistema político, que no permitía otras alternativas viables, así como a las condiciones económicas vigentes -el crecimiento de aquellos años y la acumulación de reservas en divisas- que no habilitaban la posibilidad de provocar una conmoción económica como sí había sucedido a finales de los años 80. En su opinión, “la alternativa posible está en la movilización social a partir de las actividades productivas donde tienen una fuerte inserción y un liderazgo que les posibilita alinear detrás de sus intereses a las fracciones del capital más débiles que actúan en la producción agropecuaria” (Basualdo, 2011: 151).

Este autor vuelve sobre la inserción de los grupos económicos locales -la fracción que considera hegemónica dentro del bloque de poder- para explicar por qué resulta comprensible que la base social movilizada para disciplinar al gobierno haya sido agraria y, en consecuencia, por qué no se trata de un movimiento ocasional ni anecdótico sino orgánico:

“Que la base social y económica utilizada por los grupos económicos locales sea la producción agropecuaria pampeana, está estrechamente vinculado a las transformaciones ocurridas en la década anterior, tanto en términos del sesgo primario exportador de los grupos económicos y los intereses comunes que los pequeños propietarios-arrendatarios tienen con ellos, como de la consolidación del paradigma sojero sobre la base de las economías de escala y la expansión geográfica de la producción.” (2011: 184)

En opinión de Cantamutto (2017), como hemos visto, el conflicto agrario manifiesta una fuerte disputa al interior del bloque en el poder, cuyo nudo “se estructuró por el rechazo de la fracción agropecuaria a aceptar su posición ambivalente de menor poder político pero de

¹⁴ Hay que recordar en este punto la tesis altamente difundida con la que se lanzó el grupo de intelectuales Carta Abierta, al mismo tiempo que se desarrollaban los acontecimientos de 2008: “un clima destituyente se ha instalado”. Se la puede leer en la Carta Abierta / 1, disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104188-2008-05-15.html> (consultado el 30 de marzo de 2020).

afianzamiento de su poder estructural” (2017: 76). De esa forma en esta fracción de la clase dominante se expresó con la mayor claridad una brecha entre lo político y lo económico que la llevó a lanzar una impugnación al orden político hegemonizado por el capital industrial.

Este antagonismo al interior del bloque en el poder produciría un creciente desgaste en su relación con el gobierno, pero no por ello quebró el apoyo de algunas fracciones. De todas maneras este investigador enfatiza cómo a partir del conflicto agrario se produjo un creciente acercamiento entre el gobierno y las fracciones de la clase dominante ligadas a la actividad financiera.

En el trabajo ya mencionado de Ortiz (2010), por su parte, encontramos la recreación de la tradicional tesis que articula la historia argentina sobre la base de la disputa entre dos modelos de país. Por un lado:

“Desde el año 2002, pero fundamentalmente durante el gobierno de Néstor Kirchner, se ha impuesto el control estatal de una porción de la creciente renta agraria con el objetivo de subsidiar a toda una fracción del capital medio y pequeño en el país y aumentar, aunque moderadamente, la distribución interna de las riquezas de cara al aumento del consumo en el mercado doméstico.” (Ortiz, 2010: 101)

Por otro lado:

“Un determinado proyecto de país cuyo contenido central es la integración al mercado mundial como exportadores de productos agrícola-ganaderos, fundamentalmente primarios como los granos y el ganado (aunque puede incluir alguna fase de industrialización como el caso de los aceites y las harinas), en que la Argentina es internacionalmente competitiva. Dicho modelo también supone la tendencia a la desaparición de ramas enteras de la producción en el país que se encuentran en manos de capitales muy poco competitivos y que sobreviven con las medidas de protección, entregas de subsidios y salvatajes periódicos por parte del Estado nacional.” (Ortiz, 2010: 99)

De esa manera, para este investigador, el resultado del conflicto dio lugar al cumplimiento de un doble objetivo de los sectores agrarios. En primer lugar, frenar el avance en el terreno económico de la alianza social de intereses que representaba el gobierno, que a los ojos de las fuerzas agrarias era vivido como una injusta confiscación de una parte de la renta obtenida para transferirla a otros sectores; en segundo lugar, debilitar fuertemente al gobierno de

Cristina Fernández, con el objetivo de preparar el terreno para reemplazar su programa de gobierno por otro a la medida de la nueva burguesía agroindustrial.

El CENDA (2010) propone una cuestión central para caracterizar la situación económica en la que se daría la rebelión agraria, en contraste con la década anterior. En efecto, este centro de investigaciones parte de la consideración de que a partir del año 2002, “la renta agraria que a lo largo de la década de 1990 era transferida hacia otros sectores de la economía mediante la sobrevaluación de la moneda pasó a quedar directamente en el sector” (Costa et. al., 2010: 313). Por esa razón, si de esta forma la configuración de un nuevo patrón de distribución del excedente agropecuario se constituyó en una de las principales transformaciones con respecto a la década anterior, al mismo tiempo generó el marco de la disputa que se abriría.

Particularmente ante el conflicto abierto por la Resolución 125, este conjunto de investigadores afirma que el eje central del conflicto siempre fueron las retenciones a las exportaciones, aun cuando muchas veces los dirigentes de las entidades agrarias hicieron referencia a la discusión de una “política integral” para el sector. En este sentido, para ellos, “se trata de una lucha por la rentabilidad y la apropiación de una parte importante del excedente agropecuario, rasgo que constituye una novedad de la etapa de las posconvertibilidad” (Costa et. al., 2010: 312).

Para los investigadores del Grupo de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el planteo central ante el conflicto agrario es que fue solapado el análisis en profundidad y, más aún, la crítica acerca del modelo sojero y sus consecuencias (Giarraca, 2010; Teubal y Palmisano, 2010).

En palabras de Teubal y Palmisano, “ninguno de los protagonistas del conflicto cuestionó seriamente el modelo sojero en sí, esto es, el modelo de la soja transgénica impulsado por intereses asociados a grandes empresas que conforman el sistema de los agronegocios en el país” (2010, 193).

Giarraca, por su parte, lo conceptualiza de la siguiente manera:

“Básicamente lo caractericé como un conflicto patronal por impuestos estatales que les influyen directamente en las condiciones de producción, tasas de ganancia y posibilidades de apropiación de renta. Es decir, uno de los muchos conflictos de los agricultores en todos los tiempos del capitalismo argentino que, en este caso, cobra una dimensión política por la respuesta desmesurada del Gobierno frente al paro y su escasa capacidad de negociación con estos capitalistas nacionales heterogéneos (pequeños, medianos y grandes).” (Giarraca, 2010: 316)

Por ese motivo, en su opinión, el conflicto debe ser ubicado “al interior del bloque de poder hegemónico hasta marzo de 2008” (2010: 331). Sin embargo, Giarraca afirma que el gobierno convirtió la medida de fuerza de las entidades patronales agrarias en un “conflicto” y lo caracterizó como una posibilidad crucial para cambiar el modelo económico y así modificar las reglas del capitalismo de esta etapa. ¿Pero realmente lo fue?

Nuestra hipótesis de trabajo es que no lo fue; con sólo repasar la caracterización de quiénes son los núcleos de poder y con quiénes entraron en conflicto justificamos la hipótesis. El razonamiento gubernamental y el de sus aliados estratégicos sostenía que si se podía disciplinar a los dirigentes agrarios, a los miles de agricultores y poblaciones rebeldes a los costados de las rutas, se estaría en condiciones de tomar el camino hacia la redistribución de los ingresos, en pos de cambios sustanciales en la estructura de clases y hacia la consolidación de una sociedad democrática que vence a sus sectores más conservadores, de derecha. Este mensaje se encontró con un primer y grave problema: la oposición de los grandes y concentrados medios de comunicación que por intereses diversos habían tomado partido por “el otro” del conflicto, es decir por los dirigentes rurales. De este modo generaron la otra cara de la moneda de la imagen oficial y construyeron su propia “representación social” del conflicto en la cual el Gobierno, supuestamente, quería manejar una caja más grande para generar hegemonía y mantenerse en el poder; en otras palabras, el Gobierno, en esta postura, deseaba sacarle sus razonables ganancias a un sector emprendedor que generaba riqueza genuina: el sector agrario. (Giarraca, 2010: 326-327)

La visión de Yeyati y Novaro (2013) se detiene en subrayar que la crisis de 2008 no fue simplemente un accidente, fruto del error o la mutua incompreensión, sino que se expresaron en ella problemas estructurales de larga data, que no se habían resuelto pese a los buenos tiempos que el sector y el conjunto de la economía del país vivían desde 2003. Al contrario, desde su punto de vista, la prosperidad económica de aquellos años había generado mayores tensiones, en la medida en que había en juego más dinero, más poder y más legitimidad de los actores para definir la orientación de las políticas públicas. Particularmente se refieren a tres cuestiones: la falta de una representación sectorial institucionalizada y de buenos canales

de comunicación con los partidos y gobiernos¹⁵, el progresivo agotamiento del superávit fiscal y un cambio en el lugar que ocupaban los productores de bienes primarios exportables en el modelo económico oficial: “éstos eran (cada vez más) vistos desde el gobierno como proveedores de divisas y no como motor del crecimiento de la economía del futuro, que se esperaba girase en torno del mercado interno y la distribución estatal de rentas” (2013: 69).

Además, desde una postura muy crítica con el accionar del gobierno, ambos autores consideran que, pese a lo que se afirma desde diversas posiciones progresistas, “el kirchnerismo no había pagado el costo de enfrentar a un bloque reaccionario enormemente poderoso, sino el de insistir con una política tributaria y fiscal conservadora” (2013: 97), toda vez que las retenciones no son un impuesto a la riqueza o a las ganancias sino a la producción.

Kulfas, por su parte, en el trabajo ya citado analiza el ciclo de gobiernos kirchneristas 2003-2015, al que conceptualiza como un gran cambio de tendencia con respecto al último cuarto del siglo XX en la economía argentina, a través de una subdivisión en tres grandes períodos, tanto de acuerdo a una modificación en los estilos de gestión derivada de los cambios en los equipos ejecutivos, como a la alteración de las condiciones económicas que afrontó cada una de esas etapas, desde la recuperación de la crisis de 2001, pasando por la crisis internacional en 2008 a una situación de agotamiento -y la falta de una modificación sustentable- en ciertas variables centrales para su política económica, tanto en el terreno fiscal como productivo. En ese contexto, el conflicto agrario de 2008 aparece como la primera expresión fuerte del inicio del segundo momento.

En concreto, se pregunta por las condiciones que desataron el conflicto agrario y afirma que el gobierno tenía fundadas razones para el cobro de retenciones y la movilidad dispuesta generaba un mecanismo de mayor previsibilidad. Pero en su opinión, “lo hizo en un momento poco oportuno desde el punto de vista del ciclo productivo y sin propiciar el diálogo con el sector” (2016: 132), lo cual generaría importantes consecuencias negativas. Con respecto al momento del ciclo productivo, se refiere a que se anunció la Resolución 125 en marzo, cuando se estaba levantando la cosecha de una campaña récord, y luego de que los

¹⁵ Este es un elemento que también para Barsky y Dávila (2009) resulta determinante para explicar la virulencia del conflicto, y que ellos remiten a un largo proceso de destrucción de la institucionalidad agraria, particularmente destructivo en los años 90.

productores hubieran sufrido aumentos en los costos de esa temporada debido a la intensa alza del precio internacional de los combustibles, que esperaban compensar con la ganancia extra de esa cosecha.

En ese sentido, Kulfas se pregunta si otra modalidad de implementación de esa misma medida hubiera concitado una menor resistencia. Lo que puede ser interpretado, en los términos que venimos encontrando en otros autores, como la pregunta por el carácter episódico u orgánico de la rebelión agrario. Este autor no toma una definición tajante al respecto, aunque sus palabras contienen un sesgo: “es probable que la respuesta sea otro gran interrogante, más aún observando el alto grado de belicosidad de la reacción del sector” (2016: 132).

Finalmente, retomando lo mencionado en el apartado anterior sobre el establecimiento de un régimen de “hegemonía escindida” a partir del conflicto de 2008, Pucciarelli (2017) afirma que este episodio se convirtió entonces en un “parteaguas” para el gobierno y para la oposición. En su opinión, a partir de entonces se abrió un espacio de lucha en el ámbito público nacional por la hegemonía entre lo que puede ser pensado como la democracia popular kirchnerista y la restauración de la república conservadora. Como ya adelantamos arriba, este investigador considera que se trata de “proyectos prehegemónicos”, dado que son “proyectos incompletos, carentes de una adecuada articulación entre bloque social, representación política, discurso y forma de interpelación que deberán intentar consolidarse como tales en el momento mismo en que luchan entre sí por la primacía” (2017: 372).

Pucciarelli considera que esta contraposición no quedó allí, sino que estructuró buena parte de la realidad política argentina de los años posteriores, la que puede ser analizada a partir de los vaivenes de esta disputa en la que ninguno de los dos proyectos consigue una victoria definitiva. Detrás de esta mirada, Pucciarelli encuentra que, ya pasada la época del pensamiento único propia del periodo de valorización financiera, resurgió el histórico antagonismo entre el país liberal-agrario y el país industrial-desarrollista, que el neoliberalismo en vano había intentado disolver.

5. Conclusiones

Como conclusiones de este trabajo que, por definición, no busca tener un carácter exhaustivo sino ordenador y propedéutico para una futura investigación, buscamos estructurar la bibliografía reseñada en torno de los principales ejes de debate encontrados, siempre oscilando entre un nivel de análisis económico-estructural y otro de las manifestaciones y transformaciones políticas.

Con respecto al primer punto, que genéricamente titulamos el contexto económico del conflicto agrario de 2008, es unánime la centralidad que cobran las tendencias económicas globales para una producción, como la del agro argentino, orientada principalmente a satisfacer la demanda de *commodities* del mercado exterior. Por esa razón, los debates en torno de las causas de la volatilidad de los precios agrarios y sobre las causas y proyecciones de la tendencia alcista de los precios constituyen aspectos medulares del cuadro en el que se desarrolló el conflicto de 2008 (Barsky y Dávila, 2009; Teubal y Palmisano, 2010; Sartelli et. al., 2014; Arceo, 2009).

Por otro lado, se encuentra un importante consenso sobre la influencia preponderante que tuvieron las políticas públicas posteriores a 2002 para generar una situación de elevada rentabilidad para la producción agraria y, de esa manera, favorecer la aceleración de las transformaciones del sector agrario ya iniciadas en la década anterior y, a la vez, ayudar a recomponer a los sectores que salieron golpeados pero consiguieron sobrevivir a los años 90 (Barsky y Dávila, 2009; Costa et. al., 2010; Basualdo y Arceo, 2009; Kulfas, 2016). Sin embargo, este consenso se resiente a la hora de analizar las características de la economía nacional en el periodo, donde algunas visiones (Sartelli et. al., 2014; Barsky y Dávila, 2009) resaltan la renovada centralidad del agro en la economía argentina, mientras que otras (Basualdo y Arceo, 2009; Kulfas, 2016) ponen el acento en que en 2002 se abrió una fase de profundas disputas marcadas por la transición hacia un nuevo patrón de acumulación.

Finalmente, el contexto del conflicto agrario de 2008 sería incompleto sin un análisis de las determinantes transformaciones producidas en el agro argentino. En ese sentido, se destacan los trabajos que realizan un pormenorizado análisis histórico de esos procesos (Barsky y Dávila, 2009; Teubal y Palmisano, 2010), en los que se destacan la innovación tecnológica, aunque las visiones se diferencian entre ellos en distintos puntos -la existencia o no de monocultivo, la generación de empleo o la imposición de una “agricultura sin agricultores”, etc.- por sobre todo se distancian por sus posturas antagónicas sobre las consecuencias

económicas, sociales y ambientales del nuevo “sistema de agronegocios”. En ese sentido, se pueden encontrar coincidencias entre quienes defienden el carácter modernizador de estas transformaciones (Barsky y Dávila, 2009; Sartelli et. al., 2014), aunque disienten luego sobre las bases sociales en que se asientan; y quienes, en cambio, cuestionan el sentido general de esas transformaciones, sea por la centralidad absoluta de actores concentrados nacionales y/o transnacionales en su funcionamiento -en su definición no hay acuerdo-, por su carácter distributivo sumamente injusto o por las consecuencias económicas, sociales o ambientales que conllevan (Basualdo y Arceo, 2009; Teubal y Palmisano, 2010; Giarraca, 2010).

En cuanto al segundo punto, al que nos referimos como el sujeto social y político que sustentó la rebelión agraria, en primer lugar resalta la trascendencia que le da el conjunto de la bibliografía a buscar una comprensión profunda de la realidad social del agro, así como una crítica general -por motivos diversos- a la caracterización con la que contaba el gobierno en 2008. Dentro de esa búsqueda general por lograr un diagnóstico actualizado y ajustado a la realidad, se dan una serie de debates: cuál era el papel real de los pooles de siembra y los fondos de inversión, desde quienes los ubican en el centro de la cuestión (Teubal y Palmisano, 2010; Giarraca, 2010) hasta quienes la desestiman (Basualdo y Arceo, 2009), pasando por versiones intermedias (Barsky y Dávila, 2009); cuál era el lugar de los herederos contemporáneos de la oligarquía agraria argentina (Giarraca, 2010; Basualdo y Arceo, 2009; Gras, 2010); cómo y con cuánta densidad estaba conformado el entramado social agrario (Yeyati y Novaro, 2013; Barsky y Dávila, 2009); cuáles eran los auténticos núcleos de poder del sistema de los agronegocios (Giarraca, 2010); cómo se explica la política de alianzas de la FAA con la SRA y la CRA, si fue una novedad histórica, cuál era su base social en 2008 (Sartelli et. al., 2014; Basualdo y Arceo, 2009; Teubal y Palmisano, 2010; Yeyati y Novaro, 2013; Kulfas, 2016, Nardacchione y Taraborelli, 2010, Gras, 2010, Rofman, 2010), entre otros.

En segundo lugar, en cuanto a la construcción propiamente política del sujeto agrario, en la bibliografía encontramos una insistencia en marcar una serie de conflictos precedentes que dan a entender la existencia de un malestar progresivo entre los productores agropecuarios en los años anteriores a 2008 (Ortiz, 2010; Barsky y Dávila, 2009; Sartelli et. al., 2014). Además, hay una serie de cuestiones que hacen al desenvolvimiento de la rebelión agraria de 2008 en el terreno político, es decir como algo más que un conflicto sectorial, que tienen que ver con la construcción de una identidad política. En ese sentido pueden encontrarse

referencias a la asociación con significantes como “el campo” o “el interior” (Barsky y Dávila, 2009; Ortiz, 2010; Pucciarelli, 2017; Yeyati y Novaro, 2013; Vommaro, 2010); análisis sobre la capacidad de articulación otros sectores sociales y políticos (Ortiz, 2010; Sartelli et. al., 2014; Pucciarelli, 2017; Piva, 2015); debate sobre la fluidez de los canales de diálogo real con las esferas gubernamentales (Barsky y Dávila, 2009; Giarraca, 2010); conexiones con otros conflictos recientes de los sectores medios de la sociedad (Piva, 2015); recuperación de las formulaciones programáticas del sujeto agrario (Ortiz, 2010; Sartelli et. al., 2014); fuertes valoraciones del rol de los autoconvocados y de la democracia asamblearia (Sartelli et. al., 2014; Pucciarelli, 2017, Novaro y Yeyati, 2015, Gargarella, 2010; Gras, 2010); una conceptualización sobre la construcción indentitaria del sujeto agrario por contraposición con el “populismo kirchnerista” (Pucciarelli, 2017); y el análisis de la influencia de una concepción moral de la política de cara a la disputa de representaciones entre el gobierno y el bloque agrario (Vommaro, 2010).

En cuanto al entramado de intereses sociales que sustentaron a los gobiernos kirchneristas, y las modificaciones que sufrió a raíz del conflicto agrario de 2008, los debates y la diversidad de opiniones son la regla, en la bibliografía analizada. Como criterio ordenador, vamos a utilizar la ubicación del gobierno con respecto al bloque en el poder por su poder explicativo, aunque no todos los autores consultados utilizan esos conceptos. En ese sentido, podemos decir que una parte de la bibliografía pone el acento en las conexiones del proyecto político kirchnerista con el bloque de poder existente, por lo que estas elaboraciones resaltan las continuidades entre la primera década del siglo XXI y los años 90 (Piva, 2015; Giarraca, 2010; Sartelli et. al., 2014, Cantamutto, 2015, 2017; Cantamutto y Costantino, 2016; Gaggero, Wainer y Schorr, 2014). En ese sentido, en la mayoría de los casos asumen a la rebelión agraria de 2008 como un conflicto que ocurre al interior de ese bloque en el poder. Si bien puede identificarse este punto de partida en común, luego cada trabajo realiza matices que diferencian cada una de esas posiciones: la distinción entre una fase neoliberal pura y una neodesarrollista (Piva, 2015); la acentuación de los rasgos extractivistas del neoliberalismo reinante (Giarraca, 2010); la caracterización del kirchnerismo como un régimen bonapartista que luego de 2008 entraría en crisis (Sartelli et. al., 2014); la identificación de la burguesía industrial como fracción hegemónica de la clase dominante (Cantamutto, 2015, 2017; Cantamutto y Costantino, 2016); la insistencia en la continuidad de las tendencias a la concentración y la extranjerización económicas (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014).

Otra parte de la bibliografía, en cambio, enfatiza cómo el conflicto de 2008 marcó un quiebre de la relación entre el bloque en el poder y el gobierno kirchnerista (Basualdo, 2011, 2019; Hagman, 2014, 2015, 2017; Castellani y Gaggero, 2017), lo que según el caso daría lugar a la emergencia plena de un gobierno nacional y popular enfrentado al conjunto del bloque en el poder (Basualdo, 2011, 2019), a la ruptura del consenso neodesarrollista y la polarización política y social (Hagman 2014, 2015), a la identificación de las limitaciones del accionar estatal para modificar las conductas más sistemáticas de la elite dominante (Castellani y Gaggero, 2017), o a la visibilización del rechazo del conjunto de la clase dominante a los grados de autonomía ganados por el Estado desde 2001 (Aronskind, 2010).

La bibliografía analizada respalda ampliamente la idea de que el gobierno de Cristina Fernández, considerado como sujeto político, sufrió modificaciones sustanciales como resultado del conflicto agrario, que operó como parteaguas o quiebre histórico. Principalmente es posible destacar que, desde distintas valoraciones, encontramos una coincidencia en subrayar la emergencia de rasgos definidamente nacionales y populares, a tono con el proceso de polarización política que estaba viviendo América del Sur en aquellos años (Yeyati y Novaro, 2013; Cantamutto, 2017; Pucciarelli, 2017; Basualdo, 2011; Svampa, 2011; Piva, 2015). Lógicamente, hay quienes ponen el acento en interpretar esta modificación como un achicamiento en la capacidad de representación social del gobierno (Yeyati y Novaro, 2013; Sartelli et. al., 2014; Nardacchione y Taraborelli, 2010); mientras que en otros se resalta el ensanchamiento y consolidación de los apoyos sociales, especialmente de raigambre popular (Basualdo, 2011; Svampa, 2011; Cantamutto, 2017), aunque ambas posiciones no son necesariamente excluyentes entre sí. Pero en todos estos casos -con la excepción de Gargarella (2010), quien sitúa antes la transformación conservadora-, se registra una discontinuidad con la lógica y el ejercicio del poder que había expresado el kirchnerismo hasta entonces, lo que genera interrogantes sobre las conexiones entre el momento previo a 2008 y el momento posterior a 2008 y la aparición de la posición que marca el trazado de una frontera populista al interior de la comunidad política nacional y la ubicación del gobierno como representación de la totalidad ante los intereses particulares representados por las corporaciones (Cantamutto, 2017; Rinesi, 2010).

Además, gran parte de la bibliografía focaliza en el análisis de la cuestión de la hegemonía política, sobre la que hay visiones divergentes. Una de las posiciones más categóricas es la que afirma que, luego del conflicto de 2008, el gobierno nacional consolidó el ejercicio de la

hegemonía clásica de los movimientos nacionales y populares (Basualdo, 2011), mientras que otros puntos de vista niegan el establecimiento de una hegemonía orgánica, sea por la formación de un “régimen de hegemonía escindida” donde se inició una confrontación entre dos bloques por el dominio político (Pucciarelli, 2017), o por la imposibilidad de establecer mecanismos institucionales firmes para la canalización de los conflictos sociales (Piva, 2015). Asimismo, se encuentra el señalamiento de que la hegemonía llevada adelante por el gobierno de Cristina Fernández estaba sustentada en una construcción cultural-mediática y era de tipo organicista, es decir no pluralista (Svampa, 2011).

Finalmente, con respecto al carácter del conflicto agrario, es posible encontrar una coincidencia importante en la bibliografía en la consideración de que no se trató de un conflicto accidental o episódico sino orgánico o estructural (quizás con la excepción de los trabajos de Giarraca (2010) y Teubal y Palmisano (2010), quienes ponen el acento en la respuesta desmesurada del gobierno para explicar la trascendencia de lo que sucedió y en que a lo largo del conflicto no se puso en discusión lo que en su perspectiva era lo fundamental: el agronegocio sojero). En ese sentido, para todas estas visiones la disputa “campo-gobierno” surge directamente de las entrañas de la realidad política y económica del país, sea que se lo interprete como un conflicto interburgués (Sartelli et. al., 2014); como una iniciativa de una fracción oligárquica que apuntaba a recuperar la hegemonía perdida y redefinir el patrón de acumulación en función de sus intereses (Basualdo, 2011); como el resultado del rechazo de la burguesía rural a su posición “desgarrada” de dominio económico pero subalternidad política (Cantamutto, 2017); como la expresión de un régimen macroeconómico posterior a 2002 en el que la disputa por el excedente agrario volvía a estar en el centro de la conflictividad social (Costa et. al., 2010); como la maduración política del programa de la burguesía agroindustrial (Ortiz, 2010); como la consecuencia del agotamiento de las condiciones económicas virtuosas del primer kirchnerismo (Yeyati y Novaro, 2013); como una expresión del paso al “segundo momento” del kirchnerismo (Kulfas, 2016); o como el inicio del eje de la confrontación que vertebraría la situación política argentina por varios años entre una identidad liberal-republicana y otra democrática-popular (Pucciarelli, 2017).

Tal como fue anunciado en la Introducción, este trabajo representa el punto de partida de una investigación más amplia que será desarrollada en una futura tesis de maestría. Allí se abordará, con una amplia base empírica y de fuentes documentales, el proceso de ruptura del “consenso neodesarrollista” en la Argentina que emergió como uno de los resultados

principales del conflicto agrario de 2008. En ese sentido, tanto de cara a la inclusión en ese trabajo posterior del enfrentamiento entre el “campo” y el gobierno por las retenciones móviles –un capítulo fundamental, como creemos que ha quedado sobradamente demostrado–, como respecto a los debates más amplios sobre las transformaciones de los principales bloques políticos y sociales del país en ese período, el análisis bibliográfico desarrollado en esta tesina será de una gran utilidad.

6. Bibliografía

Arceo, E. (2009), “El fin de un peculiar ciclo de expansión de la economía norteamericana. La crisis mundial y sus consecuencias”, en E. Arceo, E. Basualdo y N. Arceo, *La crisis mundial y el conflicto del agro*, Buenos Aires, Editorial La Página S. A.

Aronskind, R. (2010), “Conflicto estructural y conflicto distributivo: el caso del agro argentino”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Basualdo, E. (2011), *Sistema político y modelo de acumulación*, Buenos Aires, Atuel.

Basualdo, E. y Arceo, N. (2009), “Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles”, en E. Arceo, E. Basualdo y N. Arceo, *La crisis mundial y el conflicto del agro*, Buenos Aires, Editorial La Página S. A.

Barsky, O. y Dávila, M. (2009), *La rebelión del campo*, Buenos Aires, Sudamericana.

Castellani, A. y Gaggero A. (2017), “La relación entre el Estado y la élite económica”, en A. R. Pucciarelli y A. Castellani (coords.), *Los años del kirchnerismo: La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina.

Cantamutto F. J. (2015), *El orden político kirchnerista. Hegemonía y populismo en Argentina, 1998-2015*, Tesis para optar por el grado de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, FLACSO México. Disponible en: <http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/dspace/handle/123456789/5623> (consultado el 4 de abril de 2020).

Cantamutto, F. J. (2017), “Fases del kirchnerismo: de la ruptura a la afirmación particularista”, *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, núm. 74, México, Universidad Autónoma del Estado de México. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352017000200063 (consultado el 4 de abril de 2020).

Cantamutto, F. J. y Costantino, A. (2016), “El modo de desarrollo en la Argentina reciente”, *Mundo Siglo XXI*, vol. XI, núm. 39, México: CIECAS-IPN.

Costa, A. et. al. (comp.) (2010), *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual: la economía argentina período 2002-2010*, Buenos Aires, Atuel.

Gaggero A., Schorr, M. y Wainer, A. (2014), *Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo*, Buenos Aires, Futuro Anterior.

Gargarella, R. (2010), “Estabilidad y conservadurismo en América Latina”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Giarraca, N. (2010), “El conflicto agrario. Los debates necesarios”, en N. Giarraca y M. Teubal (coords), *Del paro agrario a las elecciones de 2009*, Buenos Aires, Antropofagia.

Gras, C. (2010), “Actores agrarios y formas de acción política en la Argentina contemporánea. Un análisis a partir de los grupos de “autoconvocados” en la región pampeana”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Hagman, I. (2014), *La Argentina Kirchnerista en tres etapas: una mirada crítica desde la izquierda popular*, Buenos Aires, Cuadernos de Cambio.

Hagman, I. (2015), “Tres momentos de la Argentina kirchnerista”, en *Márgenes: revista de economía política*, n° 1, agosto 2015, Los Polvorines, Ediciones UNGS.

Hagman, I. (2017), “Liberalismo, Desarrollismo y Populismo. Tres proyectos históricos en la Argentina”, en Hagman, I. y Bosia U., *La izquierda y el nacionalismo popular, ¿un divorcio inevitable?*, Buenos Aires, Colihue Ediciones.

Kicillof, A. (2019), “Y ahora, ¿qué?”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina.

Kulfas, M. (2016), “Los tres kirchnerismos: una historia de la economía argentina, 2003-2015”, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Nardacchione, G. y Taraborelli, D. (2010), “La importancia de los aliados: un estudio sobre el conflicto rural”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Ortiz, S. (2010), *La patria terrateniente: nueva burguesía agroindustrial y construcción del Partido del Campo*, Buenos Aires, Continente.

Piva, A. (2015), *Economía y política en la Argentina kirchnerista*, Buenos Aires, Batalla de Ideas.

Portantiero, J. C. (1973), “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en O. Braun (comp.), *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina S. A.

Poulantzas, N. (1975), “Las clases sociales”, en F. Fernandes y otros, *Las clases sociales en América Latina. Problemas de conceptualización. Seminario de Mérida, Yucatán*, México, Siglo XXI.

Poulantzas, N. (2001), *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, México, Siglo XXI.

Rinesi, E. (2010), “Política y corporaciones”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Rofman, A. (2010), “El modelo agrario rentístico financiero, sus características”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.


Sartelli E. et. al. (2014), *Patrones en la ruta: el conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía*, Buenos Aires, RyR.

Svampa, M. (2011), “Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular”, *Nueva Sociedad*, n° 235, septiembre-octubre de 2011, ISSN: 0251-3552.

Teubal, M. y Palmisano, T. (2010), “El conflicto agrario: características y proyecciones”, en N. Giarraca y M. Teubal (coords), *Del paro agrario a las elecciones de 2009*, Buenos Aires, Antropofagia.

Vommaro, G. (2010), ““Acá el choripán se paga”: movilización política y grupos sociales en el reciente conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos”, en Aronskind, R. y Vommaro, G. (Comp.), *Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Yeyati, E. L. y Novaro, M. (2013), *Vamos por todo*, Buenos Aires, Sudamericana.

| | | |
|--|---|---|
| Solicitud de evaluación de TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN | | Código de la Especialización |
| Nombre y apellido del alumno Emilio Ulises Bosia | | Tipo y N° de documento de identidad DNI 30.333.806 |
| Año de ingreso a la Especialización – Ciclo 2014 | Fecha de aprobación de la última asignatura rendida | |
| Título del Trabajo Final El conflicto agrario de 2008: una revisión bibliográfica | | |
| Solicitud del Tutor de Trabajo Final Comunico a la Dirección de la Especialización que el Trabajo Final bajo mi tutoría se encuentra satisfactoriamente concluido. Por lo tanto, solicito se proceda a su evaluación y calificación final. | | |
| Firma del Tutor de Trabajo Final  | | |
| Aclaración.....Julián Kan..... | | |
| Lugar y fecha.....Buenos Aires, 16 de abril de 2021..... | | |
| Datos de contacto del Tutor | | |
| Correo electrónico ulibosia@gmail.com | Teléfonos 113 756 2959 | |
| Se adjunta a este formulario: <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo Final de Especialización impreso (indicar cantidad de copias presentadas) • CD con archivo del Trabajo Final en formato digital (versión Word y PDF) • Certificado analítico | | |
| Fecha 16/04/2021 | Firma del alumno  | |